



RIDAA
Repositorio Institucional
Digital de Acceso Abierto de la
Universidad Nacional de Quilmes



Universidad
Nacional
de Quilmes

Sánchez Macchioli, Pablo

Interacciones, saberes y espacialidad en entornos vulnerables : tres experiencias de vinculación y extensión de la Universidad Nacional de Mar del Plata



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Argentina.
Atribución - No Comercial - Compartir Igual 2.5
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/>

Documento descargado de RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Quilmes de la Universidad Nacional de Quilmes

Cita recomendada:

Sánchez Macchioli, P. (2024). *Interacciones, saberes y espacialidad en entornos vulnerables: tres experiencias de vinculación y extensión de la Universidad Nacional de Mar del Plata. (Tesis de doctorado). Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, Argentina. Disponible en RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Quilmes* <http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/4951>

Puede encontrar éste y otros documentos en: <https://ridaa.unq.edu.ar>

Interacciones, saberes y espacialidad en entornos vulnerables: tres experiencias de vinculación y extensión de la Universidad Nacional de Mar del Plata

TESIS DOCTORAL

Pablo Sánchez Macchioli

pablo.fiba@gmail.com

Resumen

Esta investigación se enfoca en examinar distintas modalidades de interacción entre la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) y su entorno a partir del análisis de tres experiencias de vinculación tomadas como estudio de caso. A diferencia de la tradición extendida que estudia la interacción en términos de valorización del conocimiento por parte del mercado, este trabajo se centra en el estudio de interacciones orientadas al desarrollo social y espacial en comunidades vulnerables.

Las universidades se constituyen en espacios que navegan en un equilibrio inestable entre criterios de excelencia académica y el despliegue de vinculaciones con el entorno que se llevan adelante bajo criterios relacionados con la democratización del conocimiento y la resolución de problemáticas regionales. Este proceso lleva implícita una revalorización de lo local y de las interacciones en copresencia, lo cual lleva a poner en el centro del análisis a la relación que existe entre el conocimiento y el espacio en torno a las prácticas de vinculación.

Las experiencias de vinculación mencionadas con anterioridad involucran situaciones interactivas entre actores universitarios y locales, que tienen por objetivo solucionar un abanico de problemas ambientales, alimentarios y de hábitat, entre otros. En ese marco, las preguntas de investigación que orientaron este trabajo buscan comprender cómo se desarrollaron las situaciones de interacción, qué dinámicas sociales y espaciales enfrentaron los académicos en el entorno, de qué manera se construyeron los problemas y las propuestas de soluciones, cómo se construyeron las escalas de intervención, cómo se produjo la circulación de conocimientos en los marcos interactivos y de qué manera el espacio habilitó o condicionó el despliegue de las interacciones.

**Interacciones, saberes y espacialidad en entornos
vulnerables: tres experiencias de vinculación y extensión de
la Universidad Nacional de Mar del Plata**

por

Pablo Sánchez Macchioli



Tesis para optar por el título de:
Doctor en Ciencias Sociales y Humanas

Directora: Dra. Mariana Di Bello
Codirectora: Dra. Lucía Romero

Buenos Aires
Abril de 2024

Índice

Agradecimientos.....	6
Introducción	8
Capítulo 1: Antecedentes.....	12
Introducción	12
Primer apartado: Relaciones Universidad-Entorno, entre el mercado y la tercera misión .	13
El problema de la universidad-entorno desde distintas perspectivas teórico- conceptuales	15
Segundo apartado: Enfoques sobre lo espacial	29
Time Geography y su influencia en el pensamiento social.....	30
La tradición francesa.....	31
La geografía social francesa y el estudio de la “dimensión espacial”	32
Los sujetos territorializados y los intercambios	35
La nueva geografía cultural alemana	36
El constructivismo en geografía	38
Tercer apartado: Marco Teórico-Metodológico.....	39
Herramientas conceptuales para el abordaje de la dimensión espacial	40
Recapitulando.....	51
Metodología y técnicas de investigación	54
Selección de los casos	55
Técnicas de recolección de datos	57
Las entrevistas en profundidad	57
Recolección de datos a partir de documentación	59
La observación participante.....	60
Capítulo 2: Universidad Nacional de Mar del Plata: Historia y contexto.....	61
Introducción	61
La Universidad Provincial de Mar del Plata y la Universidad Católica Stella Maris.....	63
El Plan Taquini y el contexto nacional de creación de nuevas universidades.....	66
La conflictividad política de los años 70 y su influencia en la creación de la UNMDP	67
Desde la normalización democrática hasta la actualidad.....	70
UNMDP y sus políticas de vinculación con el entorno	72
Proyectos y programas de extensión.....	73
Programa de Innovación y Producción Popular	75

Las Prácticas Sociocomunitarias.....	76
Recapitulando.....	78
Capítulo 3: La unidad demostrativa para la producción de biogás en Los Pinos.....	81
Introducción	81
Los Pinos: características y principales problemáticas socioespaciales	82
Origen del proyecto para instalar una planta de biogás	84
Primeros pasos de la Unidad Demostrativa.....	88
¿Por qué tenemos que apropiarnos de un biodigestor?	90
Posicionamientos vecinales y nuevas disposiciones espaciales	92
Construcción del biodigestor y estrategias de utilidad del conocimiento	96
Conocimiento y acción espacial, una vinculación compleja.....	100
Recapitulando.....	104
Capítulo 4: El Programa Hábitat y Ciudadanía.....	107
Introducción	107
La vulnerabilidad y las formas de abordarla desde el PHyC.....	108
Trayectoria del director del grupo	112
Estrategias del PHyC: entre el conocimiento académico y el conocimiento empírico	113
Redes de gestión y coproducción	115
El rol de la universidad en los procesos de vinculación con los entornos	117
Generación de núcleos productivos barriales.....	119
El problema del agua en el barrio El Caribe	120
El problema de la energía en el barrio El Caribe.....	126
El rol de las trayectorias en las situaciones de interacción	129
Situaciones de interacción en territorios altamente vulnerables	131
Recapitulando.....	134
Capítulo 5: Producción de alimentos saludables a base de pescado en emprendimientos de la economía social y solidaria	136
Introducción	136
Trayectoria personal del director del proyecto y sus motivaciones para la vinculación ...	136
Abordaje de la universidad en el entorno vulnerable de Santa Clara	138
Primeros pasos del proyecto de Ciencia y Tecnología contra el Hambre	142
El proyecto de CCH y su vinculación con una cooperativa de Mar Chiquita	146
La creación de una cooperativa de trabajo en Santa Clara	148
Primeros pasos de la cooperativa y perspectivas productivas.....	152
El problema de la pesca artesanal o de subsistencia en Mar Chiquita.....	154
Problemáticas en la gestión y desenvolvimiento del proyecto	157

Reconversión productiva de la cooperativa	161
Recapitulando.....	162
Consideraciones finales	166
Primeras conclusiones en relación con las dimensiones de análisis.....	167
Conclusiones en relación con los casos	171

Agradecimientos

A la educación pública y gratuita argentina.

Al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y a la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación que financiaron esta investigación doctoral; ambas instituciones son pilares fundamentales e insustituibles para el desarrollo económico, social, cultural, científico y tecnológico nacional.

Al Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología, de la Universidad Nacional de Quilmes, por abrirme sus puertas y permitirme formar parte de un equipo de trabajo de excelencia y de una gran calidad humana.

A Mariana Di Bello, quien confió en mí desde el primer momento y me guió a cada paso con mucho compromiso, calidez y enorme generosidad. Esta tesis no hubiera sido posible sin su acompañamiento y continuo apoyo.

A Lucía Romero, por todos sus consejos y sugerencias a lo largo de estos años. Su gran disposición a intercambiar conocimientos, aportar ideas y brindar nuevas perspectivas constituyeron una parte fundamental de este gran proceso de aprendizaje.

A Cristina Luisio, que me apoyó de manera ineludable en todo este proceso. Su amistad, afecto y generosidad a lo largo de los años hicieron posible que este trabajo pudiera ser llevado adelante.

A mis padres y a Tomás, por estar siempre presentes.

Introducción

El problema de la interacción de las universidades con sus entornos ha sido abordado ampliamente desde diversas disciplinas, que han posado su atención en distintos elementos de estas relaciones siempre complejas. El aspecto que ha primado en estos estudios ha estado tradicionalmente constituido por el lugar que ocupan la creación y el uso del conocimiento en los procesos de desarrollo socioeconómico de los países. De esta forma, la educación superior ha sido concebida de manera creciente como una herramienta fundamental y estratégica para consolidar el despliegue de estos procesos de desarrollo en entornos regionales más delimitados, donde las instituciones universitarias juegan un rol significativo.

En ese marco, en las últimas décadas se comenzó a poner el foco en las distintas modalidades que asumen estas relaciones que se producen entre las universidades y sus entornos: desde vínculos culturales o profesionales, provisión de servicios tecnológicos especializados o de consultoría y asesorías a gobiernos locales o regionales; hasta la creación de empresas de base tecnológica o asociaciones con organizaciones de la economía social. De esta manera, y particularmente en países en desarrollo, se produjo un reconocimiento progresivo sobre el rango y la variedad de actores con los que terminan interactuando las instituciones universitarias: gobiernos, instituciones públicas, empresas, cooperativas, sociedades de fomento, personas, movimientos sociales, entre otros.

En las universidades de Latinoamérica, y especialmente en las argentinas, se produjo un desplazamiento que llevó a muchas instituciones a implementar cambios en sus políticas institucionales. Esto implicó un pasaje de una concepción más universalista, en cuanto a su rol social y a la creación de conocimiento, hacia un compromiso más localizado y en consonancia con demandas crecientes para colaborar en la resolución de problemáticas locales. Es importante destacar que la región presenta grandes desigualdades socioeconómicas y espaciales, por lo que el rol que ocupa la universidad en estos contextos, que tienden a ser más desafiantes y conflictivos que en países desarrollados, tiene especificidades propias surgidas de un contacto estrecho con problemáticas sociales complejas.

Las universidades, a partir de estas consideraciones, se constituyen en espacios que navegan en un equilibrio inestable entre criterios de excelencia académica y el despliegue de vinculaciones

con el entorno que se llevan adelante bajo criterios relacionados con la democratización del conocimiento y la resolución de problemáticas regionales. Este viraje que se dio en las últimas décadas en las instituciones universitarias lleva implícita una revalorización de lo local y de las interacciones en copresencia, lo cual lleva a poner en el centro del análisis a la relación que existe entre el conocimiento y el espacio en torno a las prácticas de vinculación.

Las relaciones entre las esferas de conocimiento y espacio, en lo que respecta al objeto de estudio, no han sido mayormente abordadas por la literatura específica, tanto desde los estudios de educación superior, como desde los estudios sociales de la ciencia. Esta investigación, por lo tanto, propone abordar dicha área de vacancia temática al incorporar literatura proveniente de diversas disciplinas (fundamentalmente de la geografía y la sociología constructivista), para generar un prisma original bajo el cual analizar las siempre cambiantes y complejas relaciones entre las instituciones universitarias y sus entornos.

Esta investigación se enfoca en examinar distintas modalidades de interacción entre la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) y su entorno: a diferencia de la tradición extendida que estudia la interacción en términos de valorización del conocimiento por parte del mercado, este trabajo se centra en el estudio de interacciones orientadas al desarrollo social y espacial en comunidades vulnerables.

Se propone un análisis en dos niveles. En el nivel meso o institucional, se explorarán los aspectos organizacionales e institucionales de la UNMDP, vinculados con la gestión de las relaciones con su entorno. En el nivel micro, se examinarán situaciones de interacción entre académicos y actores del entorno, identificando tres experiencias específicas realizadas por la UNMDP en su región de influencia.

La selección de casos se ha basado en el cumplimiento de una serie de criterios: que adquiera relevancia para los actores y funcionarios universitarios, que tenga un despliegue territorial, que constituya un caso por fuera de las instancias "clásicas" de vinculación comercial de conocimientos, y que produzca interacciones "cara a cara" entre académicos, extensionistas y actores locales.

Las tres experiencias están orientadas a la resolución de problemáticas socioespaciales en diversas porciones del entorno que presentan situaciones de vulnerabilidad. Los casos

específicos de estudio son: la Planta Demostrativa de Biogás de Los Pinos, el Grupo de Investigación en Preservación y Calidad de Alimentos y el Programa de Hábitat y Ciudadanía.

El objetivo principal de la tesis consiste en comprender las modalidades de interacción de la UNMDP con su entorno, a partir del análisis de las tres experiencias de vinculación mencionadas con anterioridad. Las mismas involucran situaciones interactivas entre actores universitarios y locales con el objetivo de solucionar diversos problemas ambientales, alimentarios, de hábitat, entre otros. En ese marco, las preguntas de investigación que orientaron este trabajo buscan comprender cómo se desarrollaron las situaciones de interacción, qué dinámicas sociales y espaciales enfrentaron los académicos en el entorno, de qué manera se construyeron los problemas y las propuestas de soluciones, cómo se construyeron las escalas de intervención, cómo se produjo la circulación de conocimientos en los marcos interactivos y de qué manera el espacio habilitó o condicionó el despliegue de las interacciones.

La tesis se encuentra estructurada en cinco capítulos. El primero está dedicado a los antecedentes y el marco teórico-metodológico. En él se analizan las principales contribuciones teóricas propuestas para abordar la vinculación de las instituciones universitarias con sus entornos y se estudia el problema del conocimiento, desde diferentes perspectivas. A su vez, se sintetizan los principales aportes para pensar lo espacial desde la geografía, y se listan los principales conceptos teóricos que se tomarán como herramientas teóricas para abordar los casos.

El segundo capítulo consta de una breve historización de la UNMDP y una descripción detallada de sus principales políticas de vinculación y extensión. El objetivo de esto es dar un marco institucional e histórico que permita comprender el contexto en el cual se despliegan las iniciativas de interacción estudiadas, y analizar de qué manera dicho marco influye en el desarrollo de las prácticas de vinculación y extensión.

Para dar respuesta a los interrogantes planteados, se busca contrastar el marco teórico-metodológico seleccionado con el estudio empírico a partir de los casos. Es así como el tercer, cuarto y quinto capítulo están dedicados al desarrollo de cada uno de éstos. En ellos, se lleva adelante el análisis a partir de las conceptualizaciones y herramientas teóricas trabajadas con anterioridad, a fin de responder las preguntas de investigación.

Por último, se presenta un apartado con las consideraciones finales, donde se proporciona una síntesis general de los resultados de la investigación, y se destacan los principales hallazgos. Es aquí donde se plantea la validez del marco teórico-metodológico aplicado y la conveniencia de la incorporación de la “variable espacial” para estudiar la generación, uso y difusión de conocimientos en marcos interactivos compuestos por actores heterogéneos.

La tesis se encuentra inscrita en una perspectiva teórica constructivista que asume que tanto el conocimiento como el espacio no son elementos dados, sino en devenir, contruidos socialmente y productos de relaciones contingentes. En ese contexto, el objetivo principal es realizar un aporte para pensar la interacción partiendo de los componentes materiales donde se desenvuelve la acción y de los significados subjetivos que construyen los participantes de las situaciones de interacción. Dichos significados se ven moldeados por elementos de un contexto preexistente y se construyen a partir de la copresencia que generan las vinculaciones, que movilizan la experiencia directa a partir del uso de los sentidos. A su vez, la adquisición de conocimientos está caracterizada por un nivel elevado de cercanía o intimidad, que influye en la manera en la cual el conocimiento se moviliza, se apropia y se difunde.

Como resultado, la tesis muestra que los marcos interactivos propuestos por la universidad en su entorno tuvieron efectos dispares, muy contingentes a la realidad y a los actores con los cuales cada uno se vinculó. En términos generales, se puede pensar que los proyectos que tuvieron impactos más extendidos fueron los que contaron con la particularidad de articular redes densas, en donde la copresencia implicó procesos sistemáticos de identificación de problemas y de construcción conjunta de soluciones. Estas últimas implicaron una modificación sustancial de las condiciones materiales de los participantes, a la par que modificaron la subjetividad de los actores involucrados (tanto académicos como vecinos).

Por el contrario, los proyectos que tuvieron impactos menos sistemáticos, o con mayores discontinuidades, fueron aquellos que no terminaron de articular una red densa de vinculaciones con actores del entorno. Las condiciones materiales de base de los vecinos implicados en estos marcos interactivos funcionaron como condicionantes del despliegue de las interacciones y, a su vez, las vinculaciones propuestas desde la universidad no lograron interpelar de una manera extendida la subjetividad de los actores involucrados, lo que redundó en niveles menores de compromiso e interacción con los proyectos.

Capítulo 1: Antecedentes

Introducción

Las interacciones entre las universidades y sus entornos han sido una preocupación dilatada en los estudios sobre educación superior de las últimas décadas. Tradicionalmente, el acento estuvo puesto en comprender, por un lado, las relaciones entre las universidades y los sectores productivos, y, por el otro, las vinculaciones que tenían la capacidad de poner en valor, en términos de mercado, a los conocimientos generados en el ámbito académico. Si bien estos enfoques problematizaron alrededor de dichas vinculaciones, solían focalizar sus conceptos en la valorización económica de los conocimientos y los productos surgidos de las universidades e instituciones de los sistemas científico-tecnológicos.

La interacción de las universidades con sus entornos se abordó largamente desde una multiplicidad de perspectivas analíticas, tanto desde la economía, la sociología y los estudios de educación superior, como desde los estudios sociales de la ciencia. Sin embargo, la mayor parte no ahondó de manera sistemática y profunda en los elementos del espacio, en las relaciones que de allí emergen; en cómo éste condiciona o restringe las prácticas o en cómo las acciones que llevan adelante los distintos actores en copresencia movilizan recursos, construyendo así nuevos espacios y nuevas disposiciones para la acción.

En las últimas décadas, se produjo en América Latina una transición significativa desde una concepción que implicaba que las universidades se constituyeran como instituciones más “universalistas” en relación con el conocimiento, hacia una concepción de las mismas más vinculada al desenvolvimiento local o regional. Este fenómeno se manifestó a través de cambios profundos en la relación que las universidades mantenían con el entorno, ampliando su perspectiva hacia conexiones que trascendían lo meramente cognitivo o económico. Del mismo modo, abarcaban una diversidad de lazos que se asociaban de forma creciente con procesos de desarrollo social, cultural o de gobernanza local.

En esta tesis, se sostiene que este desplazamiento en las universidades latinoamericanas, y en particular en las argentinas, hacia un compromiso local implica la consideración de una dimensión espacial, aspecto que hasta el momento no ha sido explorado exhaustivamente por

la literatura que estudia dichas problemáticas. La tesis propone, por lo tanto, abordar esta vacancia temática a partir de una investigación que establezca un puente entre las conceptualizaciones más clásicas y los aportes que permitan pensar lo espacial, a fines de poder estudiar con mayor profundidad las realidades empíricas. La intención última consiste en profundizar el cruce entre estos dos dominios, contribuyendo así a una comprensión más completa de la dinámica entre las instituciones universitarias y su involucramiento social en contextos específicos. Este enfoque teórico y metodológico tiene como propósito enriquecer la comprensión de las complejidades que rodean la interacción entre la universidad y sus entornos.

Este capítulo se dividirá en tres apartados principales. En el primero, se realiza un recorrido por las principales discusiones que se han dado acerca de las relaciones entre universidad y entorno, desde diferentes perspectivas conceptuales. En el segundo, se hace un recorrido acerca de los principales enfoques, corrientes y tradiciones que abordan lo espacial desde la geografía. Luego, se analizan los principales aportes del constructivismo en geografía, y su contribución a la hora de comprender la relación entre la espacialidad y la capacidad de crear, movilizar y utilizar los conocimientos. Por último, en el tercer apartado se presenta el marco teórico-metodológico, donde se despliegan los conceptos espaciales más específicos para pensar las relaciones de las universidades con sus entornos, poniendo énfasis en el problema de la interacción y el conocimiento.

Primer apartado: Relaciones Universidad-Entorno, entre el mercado y la tercera misión

A lo largo de su historia, las universidades han experimentado transformaciones significativas en términos de su organización interna, competencias, misión y objetivos institucionales. En un principio, eran consideradas como lugares donde se creaba y distribuía conocimiento y se formaba a los profesionales, contribuyendo de esta forma a la sociedad en su conjunto. Sin embargo, a principios del siglo XIX, un grupo de universidades alemanas, en un modelo que se conoció como “Universidad Humboldtiana”, propuso un arreglo novedoso que dio origen a una segunda misión, caracterizada por el ideal de combinar enseñanza e investigación (Fichte et al, 1959). Este ha sido el modelo universitario dominante a nivel mundial hasta hace unas pocas décadas, cuando la creciente presión del mercado dio paso a la creación del modelo de “universidad empresarial” (Benner, 2011). En ella, la institución estuvo orientada a combinar enseñanza, investigación y, la “tercera función”, que era la utilización económica del

conocimiento en aras de promover procesos de desarrollo de la sociedad (Arocena y Sutz, 2016).

A partir de la década de 1990, fundamentalmente en Europa y en algunos países de América Latina, se consolidaron enfoques que empezaron a considerar que las instituciones de educación superior tenían la capacidad de ser agentes promotores del desarrollo regional (González Hernández, 2012; Gunasekera, 2006). Estos nuevos contextos determinaron que las universidades se vieran en la necesidad de modernizar tanto sus estructuras académicas como administrativas para desempeñar con éxito funciones relacionadas con el desarrollo social. En este marco, el papel que juega la institución en el desarrollo económico y regional se enfoca en los procesos de aprendizaje, la generación de capacidades, y los procesos de fomento de la regionalización de la producción (Gunasakera, 2005). Fue en esta década que comenzó a cobrar auge la idea de una “tercera misión” de las universidades, principalmente fundamentada en la idea de responsabilidad social, que implicaba el rol que podrían jugar estas como agentes del desarrollo local (González Hernández, 2012; Harrison y Turok, 2017).

Los debates acerca del compromiso social universitario para la resolución de problemáticas locales, sin embargo, tienen una larga tradición en la región. En Argentina, se dieron a partir de la Reforma Universitaria de 1918. Diversos autores señalan que resulta dificultoso entender el devenir y el presente de la universidad latinoamericana sin comprender primero la influencia y el significado que tuvo la Reforma Universitaria a lo largo de la región (Tunnermann Bernheim, 2008; Mariátegui, 2008; Buchbinder, 2012). Uno de los principales corolarios de la esta última fue la autonomía universitaria, que permitió mayores grados de autarquía en las decisiones institucionales y en la libertad de conocimientos que se impartían. Otro de los resultados más influyentes fue el de la “función social”, que posibilitó un grado de involucramiento mucho más elevado de las universidades en los procesos de desarrollo socioeconómico.

El problema de la universidad-entorno desde distintas perspectivas teórico-conceptuales

Perspectivas económicas

A lo largo de las últimas décadas, los análisis de las interacciones existentes entre las universidades y sus entornos han sido una preocupación constante en los estudios sobre educación superior. Éstos tendían a enfocarse en entender las conexiones entre las instituciones académicas y los sectores productivos. Un amplio conjunto de investigaciones reconoce el sesgo económico presente en los abordajes iniciales y sugiere evitar una visión simplificada del papel de las universidades en sus contextos (Harding, Laske y Scott, 2007).

Desde la literatura económica, la relación que existe entre la formación de capacidades científicas y los avances tecnológicos con el desarrollo está ampliamente demostrada tanto desde vertientes más neoclásicas (Romer, 1986, 1990; Lucas, 1988), como desde vertientes neoschumpeterianas (Aghion y Howitt, 1992; Dosi, 1984; Metcalfe, 1995). Desde ambas perspectivas, hay un reconocimiento del rol que juega la investigación científico-tecnológica, así como de la formación de recursos humanos altamente calificados para mejorar el dinamismo, inserción tecnológica y competitividad de las economías.

Durante los últimos años, se han incrementado las expectativas para que las universidades se conviertan en agentes de cambio social y económico a nivel regional, por lo que existen crecientes presiones, tanto externas como internas, para que las mismas contribuyan con productos, servicios y soluciones, a problemáticas socioeconómicas regionales (Arbo y Benneworth, 2007; Bagchi-Sen y Smith, 2012; Thomas y Pugh, 2020; Guerrero et al., 2014, 2015; MacKenzie y Zhang, 2017). Si bien estas perspectivas incorporan una visión regional acerca del fenómeno de la vinculación, lo hacen desde una óptica que toma a la dimensión espacial como un elemento dado y como una superficie delimitada política o culturalmente (la región) donde se despliegan las prácticas.

Además, desde estos enfoques, se examinaba qué tipos de vínculos tenían la capacidad de otorgar un valor económico a los conocimientos generados en el ámbito académico, en términos de su relevancia para ser adoptados por el mercado. Aunque abordaban y planteaban cuestionamientos acerca de las conexiones entre las universidades y sus entornos, solían

concentrarse en la apreciación económica de los conocimientos y los productos originados en las instituciones académicas y en los sistemas científico-tecnológicos (Dosi 1999; Edquist 1997; Lundvall, 1992; Nelson, 1993; Etzkowitz y Leydesdorff, 1997; Guston y Keniston, 1994).

Tradicionalmente, la innovación y el cambio tecnológico han sido abordados mediante la identificación del conjunto de instituciones, actores y actividades que realizan procesos interactivos para concebir, difundir y usar conocimientos y tecnologías nuevos (Edquist, 1997). El aporte central del texto de Edquist consiste en entender a la innovación como un proceso holístico, complejo, y socialmente construido. En ese sentido, una de las principales contribuciones radica en pensar a las innovaciones no solamente como un producto técnico, sino también como un proceso socioeconómico en el cual intervienen distintos actores e instituciones.

Otra contribución importante es la inclusión en el análisis del contexto, tanto nacional como regional: la forma en la cual operan los sistemas está influenciada y determinada por el conjunto de características políticas, económicas, sociales y culturales, donde opera el sistema de innovación que se analiza (Edquist, 1997). El estudio del fenómeno de la innovación se profundiza así a partir de la inclusión de los distintos componentes: la investigación básica, el desarrollo tecnológico, la formación de recursos humanos, el financiamiento de la innovación y la difusión de conocimiento. Es aquí donde pone el foco en la relación que hay entre la creación de conocimiento, por parte de las instituciones científico-tecnológicas, y los potenciales usuarios o adoptantes de ese conocimiento, que lo van a valorizar creando productos y servicios que eventualmente llegarán al mercado.

En línea con el planteo anterior, aparece un texto que es considerado canónico para la economía evolucionista, *National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning* de Lundvall (1992). Allí se propone como idea central que la innovación no es producto de esfuerzos aislados o individuales de las empresas, sino que los resultados innovadores son consecuencia del despliegue de los sistemas nacionales de innovación. En este sentido, Lundvall concibe a la innovación como un proceso que resulta de interacciones complejas entre actores y elementos presentes a nivel nacional: desde ministerios, agencias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, hasta empresas, universidades e institutos de investigación.

En la relación de los actores previamente mencionados, circulan conocimientos, recursos y perspectivas, que son fundamentales para que se generen los procesos de innovación. Las organizaciones aprenden a través de su interacción con otras organizaciones o entidades, lo que les permite ajustar sus enfoques y estrategias a partir del resultado mismo de la interacción.

A partir de esto, Lundvall va a proponer la centralidad del conocimiento en esta etapa del capitalismo, convirtiéndolo en el recurso e insumo principal para el desarrollo económico. El acceso al conocimiento, su creación y difusión, se convierten así en vectores centrales para el crecimiento económico. Dentro de este enfoque, los sistemas de innovación se constituyen en herramientas teórico-metodológicas que permiten estudiar los procesos de creación de conocimiento que llevan al desarrollo de una innovación. En tal sentido, estos fenómenos devienen de un proceso de generación de competencias que es sistémico, y que permite mejorar las capacidades de los individuos y de las firmas, dando lugar así al progreso tecnológico (Suárez, 2018).

El enfoque de sistemas de innovación, que desde su creación cobró una importancia central en los análisis económicos de este fenómeno, se fundamenta principalmente en tres elementos: las organizaciones de distinto tipo, que interactúan de forma sistémica; la creación de innovaciones tecnológicas y organizacionales; y una mirada sobre la territorialidad, tanto en los niveles donde se despliega (internacional, nacional, regional), como en los sectores que alcanza. Dicha perspectiva, de esta manera, se constituye como una respuesta a los análisis más lineales de la economía neoclásica, en la cual los resultados tecnológicos y económicos surgen de una interacción un tanto más lineal entre la demanda y la oferta (Suárez, 2018).

En contraste con algunas de las perspectivas citadas con anterioridad, el enfoque de sistemas de innovación hace una incorporación más explícita del espacio, al hablar de territorialidad y del “enraizamiento territorial”. Ante esto, Lundvall (2009) plantea que la circulación de conocimiento se produce entre actores que están situados geográficamente. Sin embargo, sus planteamientos no van a profundizar en su conceptualización sobre lo que implica que un proceso de innovación se encuentre enraizado territorialmente, ni en cómo la localización geográfica incide en su desenvolvimiento.

Otra perspectiva complementaria propone analizar al entorno macroeconómico para comprender la influencia que tiene la política económica en tanto factor que influye en las

dinámicas de innovación de las firmas (Nelson, 1993). En su escrito, Nelson resalta la importancia de los procesos de aprendizaje. De esta forma, argumenta que las firmas desarrollan un conjunto de rutinas organizativas que se producen a partir de la experiencia y del aprendizaje continuo. La comprensión de éstas permite realizar mejoras en los procesos y productos a lo largo del tiempo.

Buena parte del conocimiento necesario para la innovación no está codificado, sino que es conocimiento tácito. A su vez, no resulta fácilmente transmisible o comunicable, dado que se produce a partir de la experiencia y de la práctica. Dicha transmisión, debido a su importancia, se convierte en un factor crítico para el éxito de los procesos de innovación (Nelson, 1993).

El análisis de la innovación se nutrió de estudios que abordaron la influencia de la territorialidad en los procesos, particularmente a partir de los aportes de la Nueva Sociología Económica. Esta corriente, de la cual Granovetter (1973) es uno de sus principales exponentes, sentó las bases para que se pueda pensar a los vínculos territoriales, y al rol que éstos juegan en el desarrollo de los sistemas económicos y de los procesos de innovación. Es así que surgen análisis de los sistemas productivos locales (como los famosos distritos industriales italianos, ampliamente estudiados) como objetos de estudio que cuentan con una doble condición, cultural y geográfica. Esta última marca los procesos económicos a partir de especificidades locales (Trucco et al., 2022). En paralelo, surgió el concepto de modelos territoriales de innovación, que sostiene que, en ciertos espacios relacionales, los distintos agentes económicos se mueven bajo códigos propios de una identidad común, lo cual da margen a que surjan situaciones de cooperación y de creatividad que devienen en procesos de innovación.

En términos generales, el surgimiento del concepto de Sistemas Nacional de Innovación permitió dar cuenta de las interacciones entre las universidades (e instituciones de I+D), las industrias o el sector productivo, y el gobierno. A partir de allí, destaca la importancia que tiene la colaboración entre estos tres actores para llevar adelante procesos de innovación. Esto permite proponer un modelo de relación entre las tres esferas que denominan “triple hélice”, lo cual representa la cooperación y colaboración de estos tres actores (Etzkowitz y Leydesdorff, 2000).

Las instituciones universitarias juegan un rol central en el desarrollo científico y tecnológico regional, que trasciende el rol más usual de proveer capacitación y conocimiento básico. Es así

que buscan redefinir, en cierta medida, su misión institucional, para convertirse en una institución con un rol económico más preponderante o como un actor productivo-industrial, en el marco de la globalización que estimula procesos de competitividad en todos los niveles. Según este enfoque, se producen vinculaciones que transforman el funcionamiento de la universidad, y la vuelven una institución con mayor grado de interdependencia, en que los distintos actores y modalidades de vinculación cobran una importancia central (Etzkowitz y Leydesdorff, 2000).

La literatura que utiliza el concepto de “Triple Hélice” se enfoca en estudiar las estructuras organizativas que surgen a partir de la conjunción entre los tres espacios institucionales (o hélices), y las prácticas de traducción (en términos de Callon, 1992) que llevan adelante los funcionarios para articular las necesidades de cada una de las partes.

Se podría establecer una similitud entre el planteo teórico de Etzkowitz y Leydesdorff con el famoso triángulo propuesto de forma precedente por Sábato y Botana (1968). Este último permitía entender la relación de interrelación entre gobierno, sistema científico-tecnológico y sector productivo. Sin embargo, Etzkowitz y Leydesdorff enfocan su modelo para comprender la transición que se produjo en distintos regímenes del ámbito académico (Versino y Varela, 2022). De esta manera, el modelo de la “triple hélice” configura un nuevo estado de relaciones entre los actores involucrados, el cual está más orientado a un viraje hacia lo que se dio a conocer como “universidad empresarial” (Etzkowitz y Webster 1998).

En los últimos años, ha surgido un enfoque superador: el denominado “cuádruple hélice”, que incluye a los usuarios y a la sociedad civil (Leydesdorff, 2012; McAdam, et al, 2012; Hoglund y Linton, 2018). Esta nueva perspectiva asume a la cuádruple hélice como una conceptualización que permite entender a la innovación, a la par que incorpora la visión y los valores de los usuarios. Otros autores incorporan también a los medios e infraestructuras de comunicación que transmiten valores y reproducen sentidos culturales (Carayannis y Campbell, 2012; Ivanova, 2014; Nordberg, 2015).

Una noción vinculada a lo expuesto con anterioridad es la de “capitalismo académico” (Slaughter y Leslie, 1997), a partir de la cual las universidades recurren al capital humano y sus conocimientos con el objetivo de generar ingresos a las arcas institucionales. Esta noción no alude exclusivamente a la generación de ingresos mediante la venta de productos o servicios

generados por académicos, sino que refiere a un movimiento más amplio que marca un viraje en la concepción sobre el conocimiento donde no se lo concibe como un bien público sino como un “producto” que puede ser objeto de apropiación (Versino y Varela, 2022).

En una línea similar, se puede pensar la conceptualización de “universidad emprendedora” (Clark, 1998). Este término hace alusión a las instituciones de educación superior que diversifican sus fuentes de financiamiento de la influencia de las corporaciones económicas o del arancelamiento a los estudiantes, con el objetivo de disminuir la dependencia de las decisiones de los gobiernos. Las instituciones que se piensan bajo este modelo no están subordinadas al estado o al mercado, sino que tienen la capacidad de utilizar fondos generados de forma autónoma para desplegar políticas propias. En este sentido, las “universidades emprendedoras” establecen líneas estratégicas que se adaptan a las demandas del entorno, para de esta forma generar financiamiento. Esto, sin embargo, no redundaría necesariamente en una contribución directa al desarrollo social o económico del entorno universitario.

Esta conceptualización de Clark (1998) resulta en uno de los principales aportes generados en las últimas décadas para repensar el rol que ocupan las universidades en cuanto a la resolución de problemáticas sociales y económicas. , A pesar de ello, no ahonda en la problematización acerca de las vías mediante las cuales estas políticas universitarias estratégicas impactan en el entorno, en cómo se relevan las demandas surgidas de los territorios, en cómo analizar la espacialización de las prácticas ni en cómo las mismas se reinventan a partir de la interacción entre actores académicos y extraacadémicos.

Desde América Latina, surgieron también aportes para abordar la problemática de la universidad y el desarrollo. Uno de los más influyentes es la denominada “universidad para el desarrollo” (Sutz, 2005; Arocena y Sutz, 2015, Arocena et al, 2015). En ella se plantea aunar los esfuerzos de la enseñanza, la investigación, y la extensión universitarios, junto con las otras actividades en el medio, apuntando a colaborar con actores sociales diversos, con miras a promover el desarrollo humano sustentable. Esto supone promover, en distintas dimensiones, una educación de muy alta calidad, la creación de conocimiento socialmente valioso, y la solución de problemas colectivos, priorizando a los sectores más desfavorecidos (Arocena y Sutz, 2012). Nuevamente, y en línea con lo que se viene sosteniendo en los párrafos previos, estas conceptualizaciones, si bien están orientadas a la resolución de las demandas sociales del entorno, no avanzan con reflexiones precisas acerca de cómo influye la dimensión espacial en

los modos en que las universidades se vinculan con los territorios para lograr el mentado desarrollo sustentable.

Relaciones ciencia y política

Desde una óptica diferente, se ubican un conjunto de trabajos que buscan comprender las relaciones entre la ciencia y la política, así como las consecuencias que éstas tienen en el devenir de la actividad científico-tecnológica. Para ello, realizaremos una breve reseña de las principales investigaciones que abordan los nudos problemáticos centrales de las discusiones alrededor de la ciencia y su creciente imbricación con la esfera del poder.

A partir de la Segunda Guerra Mundial, se observó un cambio significativo en la manera en que los gobiernos se relacionaban con la ciencia. Esto se profundizó en las décadas posteriores debido a eventos que reflejaban luchas políticas en el seno de la comunidad científica, como la competencia entre las dos superpotencias de la época, la Unión Soviética y Estados Unidos, por el dominio del espacio. El período de posguerra marcó el inicio de un proceso en el cual la ciencia se vinculó de una manera sin precedentes con el poder, tanto en términos de intensidad como de complejidad (Bush, 1999).

Guston y Keniston (1994), argumentan que el antiguo "contrato social" entre la ciencia y el gobierno, que tuvo lugar a partir de la Segunda Posguerra, era inicialmente frágil porque pasaba por alto ciertas tensiones históricas entre las dos comunidades, ya no es relevante. Esto se debe a que la ciencia y el mundo que la rodea cambiaron de forma radical en términos de escala y complejidad desde entonces. Del mismo modo, los autores sostienen que, a partir de la década del 40, ocurrieron una serie de cambios institucionales irreversibles, tanto en la esfera científica como en la gubernamental. La tarea científica se volvió demasiado grande, costosa y gravitante para las economías nacionales como para mantenerse apartada del escrutinio público.

Fue en este contexto que los gobiernos de los países industrializados percibieron la importancia de redirigir y movilizar sus recursos científicos y técnicos para utilizarlos con propósitos específicos, orientados no solo a objetivos militares, sino también estratégicos. Prontamente, la agenda de la política científica se amplió para abarcar otros temas de interés económico y social.

Debido al creciente valor militar y económico del conocimiento científico, se observó un aumento considerable en la inversión de proyectos científicos y tecnológicos que condujo a la emergencia de lo que se denomina "ciencia de gran envergadura" o "big science". Esta interconexión entre la tecnociencia y la sociedad tuvo repercusiones significativas no solo en el ámbito del crecimiento económico, sino también en el modelo de justificación de las decisiones y la acción política. Esto produjo una transformación estratégica en la interacción entre la ciencia y el poder, y marcó el comienzo de un mayor involucramiento del estado en la dirección de las actividades de investigación en las naciones industrializadas.

El involucramiento de los actores políticos terminó significando que la racionalidad burocrática incidiera en la organización institucional de las actividades de Ciencia y Tecnología, y, de esta manera, en la profesionalización de los investigadores. En este contexto, la creciente intervención de los gobiernos en su planificación habilitó el debate sobre aspectos tales como el financiamiento público destinado al sector, la definición de prioridades de investigación, la utilidad del conocimiento generado y la percepción pública de sus resultados. Fue así como la ciencia pasó a ser objeto de controles gubernamentales, mientras la comunidad científica comenzaba a operar, tratando de influenciar sobre las decisiones políticas en su propio interés, convirtiéndose en otro demandante de recursos dentro del sistema político (Albornoz, 2007).

El rol de la ciencia en la sociedad comúnmente se ha asociado con su dimensión más instrumental, a partir de la cual se valora su función como medio para conseguir resultados sociales determinados. De esta manera, se suele confundir a la ciencia con la tecnología, y plantear que una utilización extendida de las aplicaciones tecnológicas podría generar esos mismos resultados (Ziman, 2003). En contraposición, se resaltan los roles no instrumentales de la ciencia, que van desde proveer fundamentos críticos para las tomas de posiciones, hasta la imaginación de senderos y escenarios posibles para el devenir social y económico. Ziman, en este sentido, revaloriza a la ciencia, en su papel no instrumental, como un elemento central de cualquier democracia pluralista, función que solo puede cumplir a partir del desarrollo de su práctica académica y universitaria.

Pensar en el rol no instrumental de la ciencia, y el papel que cumple en las democracias contemporáneas nos lleva a interrogarnos acerca de las maneras en las cuales la política justifica el apoyo público a las actividades científicas. Sarewitz *et al.* (2003) plantea que este apoyo se ve justificado a partir de tres argumentos principales: en primer lugar, el rol que tienen los

avances científicos a la hora de fomentar la creación de nueva riqueza; en segundo lugar, el papel fundamental que juega la ciencia para resolver problemas sociales; y, en tercer lugar, el modo en que el desarrollo científico produce información útil para la toma de decisiones efectivas. Sin embargo, estos autores alertan que se generan fuertes disparidades entre las "promesas y los resultados". Esto se da, en buena medida, porque las decisiones de política científica que toman los gobiernos muchas veces se llevan adelante sin una consideración adecuada de los contextos sociales. En este sentido, una comprensión más acabada de los contextos y realidades territoriales parece fundamental para que se reduzcan las brechas entre las promesas y los resultados de la práctica científica en su despliegue para la resolución de problemáticas socioeconómicas.

La perspectiva de estudios de educación superior

Las instituciones universitarias enfrentan una presión creciente para contribuir al desarrollo socioeconómico de sus entornos. En los últimos años, han surgido enfoques conceptuales que buscan explicar los vínculos entre las universidades y sus territorios de influencia, que van más allá de las perspectivas exclusivamente económicas u orientadas a las vinculaciones productivas. Estos enfoques se encuadran en lo que se ha denominado transformaciones recientes en la "misión regional" de las universidades (Benneworth *et al.*, 2016; Pinheiro *et al.*, 2012).

En términos generales, esto implica no limitar el análisis a los procesos de vinculación relacionados con innovaciones científico-tecnológicas o a la valoración comercial del conocimiento, sino abarcar la amplia gama de actividades en las cuales las universidades participan, contribuyendo con conocimientos, recursos y capacidades (Laredo, 2007; Kruss Visser, Aphane y Haupt, 2012). Este interés renovado en examinar la tercera misión de la universidad se manifiesta a partir de instrumentos y acciones de políticas de educación superior, tanto a nivel nacional como supranacional, y en la esfera de la política universitaria (Arbo y Benneworth, 2007; Enders, Boer y Westerheijde, 2011; Jacob, Sutin, Weidman y Yeager, 2015; Kwiek, 2013); así como de la creación de consorcios o redes regionales de universidades (Hoyt y Hollister, 2014).

Las instituciones universitarias enfrentan tensiones debido a dos presiones significativas, vinculadas con demostrar que generan valor para la sociedad, a cambio de las inversiones

públicas que reciben; y con comprobar su responsabilidad ante el financiamiento público, a través de la introducción de una gestión estratégica que permita mostrar a sus financiadores que cumplen con los objetivos propuestos (Benneworth *et al.*, 2016).

De esto último, derivan tres hallazgos principales: en primer lugar, no puede haber una idea unívoca sobre lo que constituye la "tercera misión universitaria" que aplique a todos los casos, junto con la enseñanza y la investigación, debido a que la participación y la vinculación dependen en buena medida del contexto. En segundo lugar, las universidades y las regiones deben comprender mejor los entornos donde desenvuelven sus prácticas, para poder así generar sus propios instrumentos y no aplicar de forma acrítica aquellos que sean generados para otros contextos. En último lugar, los tomadores de decisión en los ministerios de educación deberían reconocer que la diversidad en las instituciones de educación superior es un elemento central para lograr beneficios sociales (Benneworth *et al.*, 2016).

Es importante entender la forma que asume el fenómeno de la interacción con el entorno, y la manera en que esto varía de acuerdo con las regiones y los tipos de universidades (Pinheiro *et al.*, 2012). Los aportes que genera cada institución al desarrollo regional varían y dependen, en gran medida, del estilo institucional que adopta cada casa de estudios, y de la manera en que esto constituye una modalidad predominante de interacción con el entorno. Desde estos autores, hay un reconocimiento de la importancia de la dimensión espacial de la vinculación universidad-entornos, particularmente en lo que respecta a cómo se producen los procesos de difusión del conocimiento tácito, el cual requiere de contactos interpersonales y de confianza. Para ello, resaltan la importancia de dichos intercambios, y rescatan de la economía de la innovación la importancia que tienen los lugares, con su carga identitaria y sus posibilidades de cercanía, como vectores centrales para los procesos de cambio tecnológico.

Por ello, Pinheiro *et al.* (2012) enfatizan la necesidad de entender las trayectorias de quienes emprenden vinculaciones con el entorno, a la par de analizar los lugares donde se desenvuelven estas prácticas. De esta forma, se lograrán comprender las vías y modalidades a partir de las cuales las universidades y los actores del entorno se influyen mutuamente en procesos de intercambio de conocimiento.

Existen otros enfoques para pensar la idea de compromiso social universitario, que se basan en la conceptualización de “universidad cívica” (Goddard, Hazelkorn, Kempton, y Vallance,

2016) y en la identificación de la universidad como “pilar o institución insignia” de una región o lugar (Goddard, Coombes, Kempton, y Vallance, 2014). Estos plantean que las universidades son instituciones reconocidas en su comunidad y generan un conjunto de externalidades positivas, a partir de su capacidad de anclar o nutrir actividades económicas regionales, o de fomentar el desarrollo de otras instituciones locales.

En contraposición con aquellas ejercen mandatos más tradicionales, las universidades cívicas tienen como propósito desarrollar actividades de la tercera misión de una manera intensiva. A su vez, tienen un gran arraigo regional, generan procesos de identificación con miembros y con personas con las que interactúan, y fomentan la participación de actores no académicos en las decisiones institucionales (Goddard y Kempton, 2016). La conceptualización de universidad cívica, de esta manera, incorpora una preocupación por el espacio, a partir de la identificación de la cuestión regional. Sin embargo, esto último no aparece definido o conceptualizado *per se*, sino a partir de una serie de atributos deseables que una región debería poseer, como mayor integración con las políticas nacionales, o una mejor articulación del sector productivo con el sector de creación de conocimiento. Lo que sí aparece es una idea de lo regional relacionada con la visión y la voz de los propios habitantes, que podría asimilarse a una incorporación de la identidad del lugar en el desarrollo de la tercera misión universitaria.

Las conceptualizaciones relacionadas con la innovación social constituyen otro enfoque que es muy utilizado para analizar la tercera misión de las universidades. Estas entienden la generación de procesos y acciones novedosas en las funciones sustantivas de la universidad, con el objeto de hacer frente a problemáticas sociales del entorno (Mulgan et al, 2007; Villa Sánchez, 2014)

La preocupación por establecer formas efectivas de colaboración entre las universidades y las empresas aún es relevante y sigue siendo un desafío. A pesar de ello, en las últimas dos décadas, se ha observado un proceso de revalorización del papel social de las universidades y un reconocimiento de éstas como instituciones que responden a una amplia gama de necesidades y demandas de la sociedad. Esto ha ocurrido pese a los altibajos ocasionados por diferentes situaciones políticas a lo largo de ese período (Arocena y Sutz 2015; Di Bello y Romero, 2018a, 2018b; Fernández Lamarra, 2009; García Guadilla, 2010; Lischetti, 2013; Mato, 2009; Naidorf, 2009; Riquelme, 2008; Romero, Buschini, Vaccarezza y Zabala 2015; Storni, 2005; Zangrossi, 2013).

A su vez, las universidades han cumplido funciones como agentes de transformación social en sus entornos, lo cual ha sido tomado por distintos actores universitarios que lo han incorporado en sus discursos institucionales, a partir de conceptos como responsabilidad social universitaria y diálogo de saberes (Vallaes, 2006; Appe, Rubaii, Lippez de Castro y Capobianco, 2017), así como compromiso social universitario y coconstrucción de conocimientos (Pérez, Cecchi, Lakonich y Rotstein, 2009; Cecchi, Pérez y Sanllorenti, 2013).

Por otro lado, la sociología de la ciencia y de la educación superior ha analizado las formas en que las transformaciones en la relación entre las instituciones académicas y otros espacios sociales influyeron en el ejercicio de la profesión académica (Ziman, 2000; Slaughter y Leslie, 1997; Vessuri, 1995; Clark, 1998; Neave y Van Vught, 1991). En el contexto latinoamericano, estudios realizados por Vessuri (1995), Vaccarezza y Zabala (2002), y Di Bello (2013) estudian las prácticas y estrategias de los investigadores que tienen como propósito conferir utilidad social a sus trabajos. Este grupo de autores se centra en el impacto que la interacción con usuarios o intermediarios de sus productos de investigación tiene en la forma en que generan conocimiento, así como en las expectativas de utilidad asociadas. Sus trabajos consideran al entorno como el conjunto de elementos que forman parte del marco significativo de los investigadores en sus procesos de creación de utilidad. Esto incluye la coyuntura política, la cultura institucional, las reglas disciplinarias y las redes de interacción (Di Bello y Romero, 2018).

Asimismo, también son importantes los trabajos que abordan la participación de los académicos en el intercambio de conocimiento con el entorno, sus incentivos, compromiso y motivaciones (Atta Uwusu y Dahl Fitjar, 2023). En este sentido, hay numerosos estudios que abordan los factores individuales de la participación de académicos en el entorno, el rol de la motivación individual, y los beneficios para los investigadores en mejorar su reputación, conseguir recursos financieros, y contribuir al bienestar de la sociedad (Perkmann et al. 2021; Lam 2011; Iorio et al, 2017; Orazbayeva y Plewa, 2020).

Universidad y extensionismo

Uno de los sentidos principales de la vinculación de la universidad con el entorno, mediante acciones de extensión, estuvo dado por la motivación que surgía de estas instituciones por romper con el elitismo que había caracterizado tradicionalmente a la actividad científica

(Ángeles, 1992). De acuerdo con algunos autores, a la extensión se la concebía como una función ajena a lo cotidiano de la vida universitaria, la cual transcurría entre las aulas y los laboratorios. De esta forma, quedaba en un lugar alejado y no interfiriera con las actividades consideradas como centrales (Tommasino y Rodríguez, 2010). Es así que mientras la función de investigación estaba orientada a dar respuesta a problemáticas disciplinares o de necesidades más generales de las empresas y el estado, la extensión viene a cubrir el conjunto de necesidades vinculadas a la generación de respuestas a problemáticas sociales específicas (Ángeles, 1992; D'Andre et al., 2010).

Como ya ha sido mencionado, aunque la búsqueda de formas efectivas de conectar a las universidades con la industria y el sector productivo sigue siendo un tema relevante y desafiante, en las últimas dos décadas, se observa, a pesar de los vaivenes propios de contextos políticos fluctuantes, un proceso creciente de revalorización del papel social que cumplen las universidades. Del mismo modo, se ha reconocido que las universidades son un actor central para la provisión de conocimiento y tecnologías que tributan a las distintas demandas sociales que emergen (Arocena y Sutz 2015; Di Bello y Romero, 2018; Fernández Lamarra, 2009; García Guadilla, 2010; Mato, 2009; Naidorf, 2009; Riquelme, 2008; Romero et al. 2015; Storni, 2005; Zangrossi, 2013).

La extensión universitaria se constituyó a lo largo del siglo XX como una característica distintiva de los sistemas universitarios de Latinoamérica. Esto ocurrió especialmente a partir de la gran influencia que tuvo la Reforma Universitaria de 1918 en Argentina, con la centralidad que tenía la idea de extender las acciones universitarias al entorno (Tünnermann Bernheim, 2000; Chiroleu, 2000; García Delgado y Casalis, 2013). El reformismo permitió, de esta manera, articular estrategias más generales de política universitaria con la atención puesta en la resolución de problemáticas sociales, lo que implicó un rediseño institucional que permitiera orientar las políticas internas hacia una confluencia con las demandas provenientes de la sociedad (Tommasino y Cano, 2016; Del Huerto, 2018).

La denominación de “extensión”, para señalar algunas de las actividades mencionadas precedentemente, constituye un término en disputa. De acuerdo con diversos arreglos institucionales, y con distintas características que asume el fenómeno que tratamos en este apartado, la función puede denominarse a su vez como vinculación, articulación, compromiso social, transferencia o responsabilidad social universitaria (Cecchi et al. 2013; Perez et al. 2009;

Tommasino y Cano, 2006; Vallaey, 2006). Cada una de estas nociones engloba un conjunto determinado de intenciones, prescripciones, ideologías e implicaciones.

Las actividades de extensión se pueden analizar en función de una serie de parámetros, relacionados principalmente con la modalidad de vinculación que se genera entre los académicos y los interlocutores de estas experiencias, así como con los roles que se les asignan a dichos actores en esos procesos. De acuerdo con esto, se puede observar que predominan dos modelos para entender los enfoques de vinculación con el entorno: uno que está más relacionado con la difusión o transferencia de conocimiento, y otro que se podría denominar de extensión crítica (Tommasino y Cano, 2016; Macchiarola, 2022).

La primera modalidad, la difusionista o transferencista, hace referencia a la primacía del contenido o el propósito del conocimiento que se quiere difundir, más allá de la posible recepción o apropiación que el mismo tenga por parte del público objetivo. En un remedo del modelo lineal, se plantea que las dificultades para el desarrollo local son producto de un problema exclusivo de adopción de conocimiento. Ante eso, se dedica un esfuerzo, dirigido y comandado por la universidad, en la difusión del conocimiento necesario para abordar los problemas de los distintos actores. Esta modalidad, por lo general, asume al espacio como un elemento dado, una suerte de plantilla donde se desenvuelven las distintas intenciones de intervención. La linealidad del planteo lleva implícita una cierta negación del rol más activo que juegan los actores, los posicionamientos que tienen, las disputas de poder y sus maneras de habitar los espacios.

Con respecto a la modalidad de extensión crítica, esta se vincula con ideas provenientes de los enfoques de educación popular, y tiene por objetivo la formación de profesionales comprometidos con la sociedad donde se desenvuelven, para alcanzar procesos más comprometidos con el cambio social (Carlevaro, 2010). En este sentido, busca que el conocimiento se produzca de forma conjunta con el resto de los actores de la sociedad, y que resulte del contexto en el cual se despliegan las acciones universitarias (Macchiarola, 2022). A su vez, surge de la interrelación con otros actores, a partir de la experiencia compartida en marcos interactivos que requieren necesariamente de la copresencia.

En función de esta segunda modalidad, se pueden pensar los procesos de vinculación entre las universidades y sus entornos desde una concepción no lineal, en la cual los conocimientos no

son exclusivamente generados por las primeras, sino que surgen a partir de procesos interactivos donde participan múltiples agentes. Si bien hay un saber experto, que en gran proporción es generado por las universidades e institutos de investigación, también hay conocimientos y experticias en distintos actores del entorno que tienen sus propias trayectorias y modalidades de uso del espacio.

Una de las características compartidas en los enfoques que proponen entender este tipo de interacciones consiste en cierta subestimación sobre la influencia que tiene sobre ellas la dimensión espacial. Los tres casos estudiados en esta tesis están constituidos por situaciones de interacción donde el foco del análisis está puesto en comprender de qué manera se producen los significados en las situaciones compartidas, y en cómo se adquieren nuevas competencias en ese contexto. Las mismas se originan a partir de conocimientos que circulan, procesos de toma de decisiones, negociaciones y el establecimiento de nuevas disposiciones para actuar dentro y en relación con el espacio.

Segundo apartado: Enfoques sobre lo espacial

Tanto las perspectivas que posan su interés sobre los efectos económicos de las vinculaciones universitarias con el entorno, como las que se interesan sobre las dimensiones sociales de la innovación, tienen un denominador común en relación con su visión acerca del espacio. En la mayoría de los casos, se trata de enfoques que lo asumen como un mero estrato físico, o como un stock de recursos pasibles de ser movilizados, valorizados o utilizados a partir de la aplicación de conocimiento.

Partiendo del reconocimiento de las limitaciones que tienen estos análisis, en este trabajo se buscará profundizar teórica y metodológicamente, incorporando la dimensión espacial y las posibilidades de abordaje que brinda ésta al estudio de lo social. En el apartado siguiente, revisaremos algunas tradiciones del pensamiento geográfico que han generado un aporte sustantivo al cruce entre lo espacial y lo social. Este recorrido teórico y conceptual no tiene por objetivo sistematizar de forma exhaustiva cada uno de los enfoques, sino indagar algunas claves que permitan reflexionar acerca de la dimensión espacial y su importancia para comprender los procesos sociales.

Time Geography y su influencia en el pensamiento social

Desde su surgimiento entre los años 60 y 70, la corriente denominada Time Geography ha tenido una influencia sustancial en el pensamiento geográfico y en la teoría social, en particular a partir del interés que despertó en Anthony Giddens. Este autor utilizó el tiempo y el espacio dentro de su teoría de la estructuración, dando a conocer a un público más amplio la propuesta de esta corriente geográfica.

Su fundador es el geógrafo Torsten Hägerstrand, de la Escuela de Lund. Desde allí, propone poner el foco en las prácticas cotidianas de los individuos y en sus trayectorias biográficas. Las conceptualizaciones espacio-temporales que desarrolló Hagerstrand, pensando originalmente en el análisis de los sistemas de transporte, se relacionan con cómo y por qué los individuos se conectan entre sí y se mueven, o son movidos, entre diferentes lugares. Detrás de los movimientos de personas o mercancías hay intenciones, ideas y hábitos. Entonces, la propuesta del autor consiste en comprender la vida cotidiana en una totalidad, a partir de la observación de los contextos donde se planean proyectos de transportes, y se analizan las necesidades de movilidad y de limitaciones que genera el mundo real (Hagerstrand, 1985).

Esta propuesta teórica incluye una preocupación sustantiva de Hagerstrand acerca de determinadas prácticas científicas. Estas, a partir de un exceso de abstracción y especialización disciplinar, pierden de vista la totalidad de la realidad social. la cual incluye a la dimensión espacial, clásicamente subestimada como preocupación conceptual por parte de la teoría social (Ellegaard y Svedin, 2012).

En los planteos que surgen desde la escuela de la Time Geography, se puede observar entonces una doble entrada analítica: un estudio de las trayectorias personales en su devenir cotidiano, en su intersección con las trayectorias de otros individuos; y un análisis sobre las actividades institucionales, llevadas adelante a partir de un conjunto de prácticas, también situadas espacio-temporalmente (Lindón, 2012).

Otro aporte central fue el desarrollado por Pred (1985) al plantear que el despliegue de las trayectorias individuales trae aparejado, necesariamente, una acumulación de experiencias que moldean las creencias, valores, gustos, expectativas o motivaciones. En ese marco, la

dimensión espacial no se constituye como un mero marco para la acción, sino que es un elemento activo, que da forma a las experiencias y participa de los procesos sociales.

De todas formas, esta corriente, que tuvo una profunda influencia en el pensamiento geográfico de las últimas décadas, no estuvo exenta de críticas. Algunas de ellas remarcaron que el excesivo énfasis que ponía en la realidad material tendía a convertirla en una ingeniería social solapada (Gren, 2001). También se criticó, en parte, el foco desmedido sobre las condiciones físicas o corpóreas, tanto en su rol restrictivo como habilitante de la acción humana. Paradójicamente, esta suerte de reduccionismo físico ha sido revalorizado en los últimos años por la inclusión en el análisis de elementos humanos y no humanos, que son cercanos a los propuestos por Latour en su famosa Teoría del Actor Red (Gren, 2001).

La tradición francesa

Si bien en geografía las principales teorías han incluido en su análisis a la dimensión humana, no siempre han incorporado de una forma sistemática a la dimensión social donde las personas desenvuelven sus prácticas. Esta revalorización sobre la condición humana aparece con fuerza en la geografía regional francesa, surgida a principios del siglo XX, conocida como geografía vidaliana, en honor a uno de sus principales mentores, Paul Vidal de la Blache. Junto con algunos de sus discípulos y seguidores, incorporaron y dieron centralidad a la preocupación por la condición humana en sus enfoques (Lindón, 2012).

Desde esta corriente, también denominada “posibilismo”, se piensa al entorno como una entidad compleja cuyos diversos componentes son capaces de reunir y mantener en interacción mutua a seres heterogéneos. A partir de esta premisa, surge la necesidad de explorar el concepto de geografía regional, teniendo en cuenta que cada región se presenta como un espacio donde coexisten seres diferentes que, de manera artificial, se han unido y posteriormente adaptado sus formas de vida en un contexto compartido. Además, se reconoce que éstas, en constante evolución y cambio, están interconectadas y forman parte de un conjunto continuo. Por esto, desde estos enfoques se entiende que la humanidad desempeña un rol activo y significativo en su reproducción.

Vidal de la Blache toma de los planteos funcionalistas el concepto de “género de vida”, definido como el conjunto de prácticas y rasgos de un grupo social, articulado funcionalmente y

cristalizado en hábitos por la historia, que muestra la manera en la cual este se adapta a las condiciones que propone el medio geográfico en el que se desenvuelve. En este caso, si bien vemos una preocupación sobre la relación entre el hombre y el medio, esta es lejana a la visión más reduccionista que planteaban los enfoques positivistas.

Al hablar de “género de vida”, se busca captar las particularidades y esencia de una región determinada, con características propias y una autonomía funcional relativa. La expresión de estas peculiaridades surge del análisis del paisaje como la manifestación del espíritu y carácter de una región. Este tipo de estudio de raigambre histórica de un paisaje regional permite un doble juego: conocer de forma sistemática el despliegue de un fenómeno situado, y comprender de manera específica las particularidades de un lugar que fue “producido” históricamente. Este tipo de enfoques permite ahondar el reconocimiento de una dimensión más colectiva de la condición humana, dado que la producción social de los paisajes no puede ser resultado de iniciativas individuales, sino construcciones conjuntas mediadas por la cultura.

La geografía social francesa y el estudio de la “dimensión espacial”

Las primeras menciones a la dimensión espacial aparecen en la geografía francesa de mediados de la década del 70. Allí Lacoste, analizando textos de Marx, menciona en un pasaje que este se refería a la naturaleza abordando la “dimensión espacial”. En esa misma década, autores como Grataloup y Levy sostienen que la geografía es la ciencia del espacio social, el estudio de la dimensión espacial de la sociedad (Veschambre, 2006).

Esta expresión comenzó a popularizarse en la década del 80, por su gran potencialidad para el análisis de las formas, los efectos de las relaciones sociales, las posiciones sociales y los conflictos. En definitiva, se apuntaba a una geografía que estudiara a la sociedad desde el punto de vista del espacio (Chapuis, 1984). Este viraje, desde una disciplina más anclada en lo físico, lo regional, el paisaje, hacia una más volcada en lo social, no estuvo exento de controversias. Diversos autores de la época manifestaron el riesgo de que se produjeran ciertos desequilibrios a partir de los cuales la geografía perdiera su especificidad como disciplina.

Es así como especialistas tales como Herin (1984) van a proponer el concepto de “relaciones espaciales” como análogo al concepto de relaciones sociales. Estas se dedicarían a estudiar las interacciones que los individuos y grupos formulan con el espacio. Este enfoque apareció en

un contexto en el cual el temor de la disgregación de la geografía, y su posterior absorción por otras disciplinas como la sociología, llevaron a buscar una simetría mayor entre las conceptualizaciones de espacio y sociedad.

Tales ideas tuvieron un impacto muy hondo en la geografía francesa, dado que esta suerte de análisis en simetría entre espacio y sociedad buscó alejar los temores de hablar solamente de la “dimensión espacial” como una más entre las diversas dimensiones que componían la idea totalizadora de lo social (Veschambre, 2006). Otros autores van a distanciarse de este concepto y van a proponer otros para abordar el mismo fenómeno: desde “instancia espacial”, tomando conceptualizaciones marxistas, hasta “modalidades espaciales”, para pensar la estructuración de lo social a partir del espacio (Di Méo, 1991; Herin, 2006).

A pesar de estas discusiones, el uso del concepto de “dimensión espacial” se popularizó para mediados de la década de 1990, y pasó a formar parte del bagaje teórico de la disciplina, primero en Francia y luego a nivel global. El término entró en una fase de consolidación teórica, en la cual se especificaron sus alcances teóricos y metodológicos. Este enfoque dimensional, entonces, permite analizar las prácticas, representaciones y formas de apropiación del espacio, así como entender los modos de reproducción social. Las posiciones que ocupan los actores en los distintos mundos sociales se juegan también en la dimensión espacial, entendida ésta como una capacidad diferenciada de los individuos y los grupos para apropiarse y utilizar recursos materiales y simbólicos propios de cada espacio (Veschambre, 2006).

Otro concepto que generó un gran impacto en la disciplina fue el de “espacio vivido” (Di Méo, 1991). Este incluye a todo el conjunto de lugares que frecuenta cada persona, sumado a la serie de interrelaciones sociales y de valores que proyectan y perciben sobre los mismos. De esta forma, Di Méo procede a integrar, de un modo analítico, a las relaciones sociales especializadas con el espacio imaginado y percibido. Esto apunta a integrar a los actores con la base material de las prácticas, el componente estructural que las constriñe o limita y los aspectos más inmateriales relacionados con la subjetividad de los sujetos.

Desde una perspectiva que se acerca a lo que se reseñó con anterioridad sobre la Geografía Social Francesa, Lussault (2015) propone el concepto de situación, interpretado como las convergencias relacionales de los actantes donde se desarrollan estrategias por parte de los

actores. En ellas, Lussault incluye a lo que conceptualiza como “operadores espaciales”, que pueden ser humanos y no humanos.

El devenir de las situaciones genera *disposiciones espaciales*. Se entiende por éstas a la forma que cobra la dimensión espacial de una práctica cualquiera, por parte de cualquier sujeto analizado (Lussault, 2015). Es así como se pueden encontrar actores con un grado de influencia tal que pueden crear disposiciones espaciales específicas, con un decidido carácter normativo. A estas intervenciones, el autor las denomina “dispositivos espaciales”, los cuales proceden de una intencionalidad y están orientados a producir efectos de regulación del campo social y político (Lussault, 2015).

Esta materialización de un orden, y por ende la forma en la cual se despliegan los procesos sociales para conformar una modalidad de intervención en los territorios y generar una configuración territorial, se puede operacionalizar analíticamente a partir del análisis de la acción espacial. Esta es interpretada como toda actividad que compromete una relación del operador con la dimensión espacial de la sociedad (Lussault, 2015). En este sentido, se conceptualiza al espacio como un recurso para la acción.

Es decir, se parte de entender que hay un conjunto de elementos dados, como las formas espaciales, su disposición, las trayectorias y las identidades, que se cruzan con la actuación de los distintos actores de acuerdo con los sentidos que imprimen y las competencias prácticas que poseen (Lussault, 2007). Esto permite también comprender la “red de interdependencias” en las que están inscritas las personas (Elias, 1970). En ese marco, las competencias de los actores cumplen un rol central dadas las diversas formas que tienen para desarrollar técnicas que les permitan lidiar con la distancia, los límites o los lugares (Lussault y Stock, 2006).

En la acción espacial que plantea Lussault (2007), cualquier actividad va a comprometer una relación entre el operador y la dimensión espacial de la sociedad. Este tipo de acciones conciben dos tipos de recursos. Por un lado, un espacio que está dado, que contiene una disposición preexistente a la acción, por lo que cuando ésta se despliega se ve modificada y reconstruida. Por otro lado, los sentidos y competencias prácticas de los actores, que constituyen un conjunto interiorizado de modos de relación de cada uno con el espacio (Lussault, 2007).

La espacialidad, entendida entonces como un tipo de acción social, presenta una tensión entre rutinas, imaginarios, representaciones, creatividad y cambio. Esto permite que cuando se desarrolla una acción, quien la lleva adelante pueda tanto utilizar una disposición espacial existente, como instituir una nueva. De esta forma, cada acción conlleva, necesariamente, la construcción social del espacio, que consiste en un proceso donde se cruzan múltiples escalas, intenciones y racionalidades.

Los sujetos territorializados y los intercambios

Siguiendo dentro de la geografía francesa, uno de los autores que ha tenido una gran influencia y que busca integrar la teoría social con el estudio espacial, es Hervé Gumuchian. Su principal desarrollo teórico parte del concepto de “actor territorializado”, donde todas las personas son vistas como actores con una personalidad e individualidad que no se ven disueltas en la acción y son estructurantes de las experiencias individuales. A su vez, tienen competencias territoriales, sociales y culturales, y se territorializan a partir de encontrarse en situación de acción (García Chiang, 2014). Esta última, está definida como un marco espacio-temporal en el cual se dan encuentros e intercambios, desde los cuales se produce la libertad de acción.

El actor territorializado, entonces, se despliega en sistemas de acción concretos que son evolutivos, cambiantes y que, partiendo de marcos de decisión generados, transforman de manera colectiva objetos espaciales (García Chiang, 2014). A partir del cruce de diversas intencionalidades, prácticas y discursos sobre el territorio, surgen y se construyen múltiples territorialidades, que, a su vez, son producto de las estrategias de los actores, y de los juegos de poder que se originan en las relaciones sociales y en las experiencias que se ponen en juego (Gumuchian et al., 2003).

Los actores, de esta manera, no están territorializados, sino que *son* territorializados. Es decir, las experiencias sociales se ven materializadas en los territorios, que configuran así la identidad de los sujetos y la manera en la cual estos se apropian de ellos, los usan y significan (Lindón, 2012). La propuesta teórica del actor territorializado lleva a un replanteo y una profundización del análisis de lo que sucede cuando se producen marcos interactivos entre actores diversos, que están situados espacio-temporalmente.

Este tipo de planteos parte de la base de considerar que los fenómenos sociales no están constituidos por realidades unívocas o evidentes, y que las ciencias sociales tendrían como objetivo descubrir o revelar, como lo plantean las concepciones más realistas. En contraposición, y tal como se verá en el apartado siguiente, aparece el constructivismo como el enfoque que va a señalar que las cosas no constituyen elementos dados, sino que son productos sociales necesariamente contingentes.

De un modo similar, se pueden pensar las formas en las cuales las personas no solo se encuentran sujetas a un mundo social o cultural determinado, sino que además desarrollan vínculos que varían en su intensidad y tipo, en función con el territorio y los lugares por donde circulan o en los que generan lazos identitarios (Gumuchian, 2003). Las acciones que estos van a desplegar están territorializadas, debido a que se marcan espacialmente, y las especificidades del territorio tienen un grado de influencia que llega a imprimir una marca a la misma práctica social (Gumuchian, 2003).

La nueva geografía cultural alemana

Esta corriente, que cobró centralidad en la geografía alemana a partir del año 2000, surgió con la adopción de enfoques que buscaban generar una nueva comprensión del mundo y de la forma de estudiar los fenómenos, así como otorgar un nuevo papel a las ciencias sociales. Los autores adscritos a estas ideas se inspiran en la geografía anglosajona de la última mitad del siglo XX, especialmente en trabajos relacionados con lo que se conoce como el “giro cultural”, que se produjo en general en las ciencias sociales, y en particular en la geografía.

En ese contexto, la nueva geografía cultural alemana buscó romper con largas tradiciones esencialistas, deterministas, positivistas y realistas, utilizando enfoques provenientes del constructivismo (Germes et al, 2011). Esto generó una redefinición de los conceptos binómicos de cultura y espacio, por un lado, y de identidad y espacio, por el otro (Hasse, 1988; Krüger, 1988). A partir de estos primeros trabajos sobre geografía cultural, que abordaron conceptualizaciones centrales, surgieron otros que consideraron temáticas más en línea con posturas postestructuralistas, como el postcolonialismo o la cuestión del cuerpo (Germes et al, 2011).

Esta circulación de nuevas temáticas en la geografía alemana llevó a la adopción de enfoques teóricos y metodológicos también novedosos. Se comenzó a problematizar el conocimiento, sus condiciones de producción y el rol que juega como dispositivos para producir y reproducir al poder. Esta postura crítica ante el pensamiento científico lo enmarca como una producción discursiva, que tiene más relación con el resultado de un juego de poder, que con un proceso de producción de conocimiento neutral.

Es de esta manera que la nueva geografía alemana incorporó una visión decididamente constructivista en la cual no hay elementos dados, sino que todos son contingentes, producidos y ambivalentes. Esto tiene implicancias directas sobre las concepciones que se generan alrededor del concepto de espacio, que tradicionalmente constituyó el nudo central de las preocupaciones de la geografía.

En principio, el constructivismo en geografía rechaza al determinismo espacial, es decir que el espacio no es condición suficiente para explicar a un fenómeno social. En segundo término, se plantea contrario al esencialismo espacial. Aquí el espacio no es una entidad por sí misma, dada y preexistente, ni un entorno, configuración o territorio, sino que es antes que nada una forma significativa (Germes et al, 2011).

El espacio social y cultural aparece también como una producción histórica contingente, siendo que las nociones mencionadas constituyen construcciones creadas a partir de la reflexión y el pensamiento geográfico (Gebhart et al, 2003). El centro de este tipo de enfoques está dado por el análisis de la construcción del espacio y de sus implicancias políticas, dado que su producción es un elemento fundamental de la producción misma de la sociedad. El espacio, entonces, es el portador del conjunto de significados que los procesos sociales le asignan. Por lo tanto, el objetivo consiste en descifrar las interpretaciones, y, de esta forma, los significados y los juegos de poder (Germes et al, 2011).

En ese marco, el espacio deja de constituirse como un elemento en sí mismo, en tanto que es producto de una construcción social. Por ello, los análisis producidos desde esta corriente no analizan a los lugares o a los objetos espaciales. Para el constructivismo de la nueva geografía alemana el espacio se convierte en un medio para entender significados asignados socialmente, sus contextos y dimensiones más políticas (Gebhart et al, 2003).

El constructivismo en geografía

Seguimos en este aspecto a la propuesta teórica de Werlen (2003), que sintetiza aspectos de la sociología interpretativa y la geografía constructivista. Esta sugiere focalizar en las prácticas cotidianas de los sujetos, al entender que el devenir de estos en su cotidiano permite que se integre en el análisis los aspectos materiales y no materiales, así como la acción y el mundo social, escapando de las visiones más reduccionistas de lo espacial.

De esta forma, se resalta el grado de importancia que tienen las relaciones espaciales para una construcción significativa de realidades que son tanto socioculturales como geográficas (Werlen, 2004). Este tipo de abordajes señalan que la capacidad de generar conocimientos, movilizarlos y ponerlos en uso, está estrechamente ligada a la espacialidad. Asimismo, existen procesos cognitivos que están insertos en percepciones y análisis de situaciones, en toma de decisiones y en acciones que son indisolubles de los espacios donde dichos procesos tienen lugar. A la vez, se encuentran configuraciones espaciales, y artefactos materiales, que van a adquirir un significado social en función de su apropiación simbólica, a partir de procesos de aprendizaje, evaluación, interpretación y uso (Meusbürger y Werlen, 2017).

Una de las cuestiones que deriva del planteo teórico de Werlen está relacionada con la identidad cultural, y con las posturas acerca del rol que juega en los individuos. Es así como el autor critica tanto a las posiciones que asumen a la cultura como un ente que determina el devenir de los sujetos (desde visiones estructuralistas o funcionalistas), como a las visiones enfocadas en la individualidad de los sujetos (enfoques de individualismo metodológico). En este sentido, Werlen se propone seguir la teoría de la estructuración de Giddens, donde aparece la reproducción de prácticas, a partir de la formación de estructuras, y la idea de la dualidad, donde las estructuras sociales están formadas a partir de la actividad humana y son, al mismo tiempo, el medio para que se constituyan.

Esta vinculación, entre el individualismo metodológico y la dualidad de la estructura, permite conectar los distintos niveles de análisis, tanto los procesos micro como los macro. Para la teoría de la geografía que propone Werlen esto es particularmente provechoso, ya que aborda perspectivas objetivas y subjetivas, que incluyen las motivaciones y valores de los individuos, con su consecuente incidencia en los procesos de estructuración. A partir de estas nociones, surge el cuestionamiento sobre la identidad, y sobre la medida en que los significados

culturales, generados a partir de la acción, están vinculados a su contexto y a las formas de representación que poseen (Omonte, 2021). La copresencia juega un rol central en estos planteos, ya que es la condición base para la construcción de sentidos intersubjetivos, a partir de las atribuciones de sentido y de las experiencias compartidas, que permiten entender qué patrones de interpretación conjuntos se generan.

Este abordaje reconoce antecedentes en trabajos pertenecientes al campo de los estudios sociales de la ciencia, donde la producción y el uso de los conocimientos científicos se ha conceptualizado en términos de actividades intersubjetivas, situadas espacio-temporalmente. En ellas, los actores académicos usan una serie de recursos cognitivos y materiales para lograr sus objetivos relativos a la utilidad social de su trabajo (Clarke y Fujimura 1992; Knorr Cetina, 1999; Tuunainen, 2005).

Tercer apartado: Marco Teórico-Metodológico

Como fuera señalado en el apartado anterior, la problemática de la vinculación universidad-entorno fue abordada desde diversas perspectivas teóricas y metodológicas. La mayor parte se han concentrado tradicionalmente en analizar cuestiones como la valorización del conocimiento en términos económicos, con miras a su posterior comercialización en el mercado. Una porción minoritaria, se enfoca en cuestiones relacionadas con el rol que juegan estas vinculaciones para fomentar el desarrollo socioeconómico de los entornos o regiones donde se insertan las universidades. Estos estudios se llevaron adelante casi exclusivamente desde una perspectiva económica, soslayando en buena medida las dimensiones culturales y espaciales, que fueron tomadas de manera muy subsidiaria.

Los procesos de interacción universidad-entorno tienen una gran complejidad, dada la diversidad de actores y elementos que intervienen, incluyendo cuestiones cognitivas, dimensiones de vulnerabilidad, actores vecinales, académicos, estatales, productivos y organizaciones del tercer sector. A esto se suma un aspecto que no ha sido suficientemente tratado por parte de los estudios sociales de la ciencia, ni por los estudios de educación superior o de desarrollo social que abordan este fenómeno: la dimensión espacial. Es decir, la gran mayoría de los análisis sobre la problemática de la interacción universidad-entorno se llevan adelante sin profundizar el estudio de los elementos del espacio, las relaciones que de allí emergen, la manera en que el espacio condiciona o restringe a las prácticas ni la forma en que

las acciones, que llevan adelante los distintos actores en copresencia, movilizan recursos, construyendo así nuevos espacios y nuevas disposiciones para la acción.

A partir de la literatura reseñada en los antecedentes, esta tesis articula abordajes que provienen de los trabajos más “clásicos” de la literatura de educación superior, y de los estudios sociales de la ciencia, con los enfoques provenientes de la geografía constructivista, los cuales proveen las herramientas conceptuales necesarias para abordar el cruce teórico que se constituye en el eje central del trabajo: interacción, conocimiento y espacialidad. Esta articulación requiere, en primer lugar, una mayor precisión de algunos de los términos que son centrales para el análisis de la dimensión espacial, esto es, las categorías de espacio, territorio, lugar, escala y copresencia. En segundo lugar, un análisis acerca de cómo se puede abordar metodológicamente a estos constructos desde la geografía, para poder ilustrar las distintas modalidades que asumen los procesos de interacción social espacializados.

Herramientas conceptuales para el abordaje de la dimensión espacial

En este apartado, se propone una malla conceptual para analizar el fenómeno de interacción universidad-entorno, a partir de la utilización de cinco conceptos principales: espacio, territorio, lugar, escala o copresencia. Estos han sido profusamente utilizados para dar cuenta de distintas problematizaciones acerca de lo espacial (Jessop *et al.*, 2008). A su vez, van a posibilitar el abordaje de las dimensiones de interacción y conocimiento en clave espacial, en términos algo más teóricos, lo cual luego será puesto a prueba a partir del análisis de los casos empíricos que son estudiados a lo largo de la tesis.

Las nociones de espacio, territorio, lugar, escala y copresencia, son utilizadas a lo largo de la tesis para abordar el estudio de las relaciones socioespaciales que se promueven desde la universidad en distintas situaciones de interacción. Es fundamental realizar una breve distinción de cada una de ellas, dado que tienen una carga teórica muy importante.

Por un lado, el espacio aparece como la conceptualización más abstracta que se define a partir de una disposición de entidades, tanto naturales como artificiales, y de flujos materiales e inmateriales, y que se percibe a través de filtros sensoriales y culturales (Duarte, 2017). Del mismo modo, es entendido como portador de un conjunto de significados que son asignados a partir de procesos sociales, por lo que estudiarlo permite descifrar las interpretaciones y los

significados que se producen en lugares donde se ponen en juego relaciones de poder. Por el otro, los conceptos de territorio y lugar se constituyen en porciones específicas del espacio cuya delimitación ocurre a partir de la interacción de distintos actores, que generan experiencias que configuran la identidad de los sujetos involucrados y generan marcos para el despliegue de las acciones.

Espacio

En principio, es importante definir el concepto que resulta más abstracto para la geografía, y que mayor recorrido teórico ha tenido a lo largo de la historia de la disciplina. Para esta tesis, resulta importante establecer de qué manera se concibe al espacio social, y en qué medida este es una categoría válida para el abordaje que se lleva adelante sobre las relaciones entre la universidad y su entorno.

El concepto de espacio ha tenido históricamente una enorme centralidad en el pensamiento geográfico desde la formación de la disciplina a mediados del siglo XIX. A efectos de lo que interesa remarcar en este capítulo, no se hará un recorrido exhaustivo por todas las teorizaciones que abordan el estudio de lo espacial, sino que se hará una síntesis de las principales concepciones que desde la teoría geográfica se ha hecho de la cuestión. Las tres conceptualizaciones que se presentan a continuación son las que más han permeado los estudios geográficos de las últimas décadas.

En primer lugar, podemos mencionar la perspectiva más “locacional”, derivada de las perspectivas más cuantitativas que atravesaron a la disciplina, sobre todo a partir de los años 50. Estos enfoques se centraron en cuantificar diversas variables de interés para la organización de los estados y de la actividad económica, como las localizaciones industriales y comerciales, las distancias, los costos y los flujos). Esto permitió que la geografía hiciera aportes en cuanto a la comparación de las localizaciones, la competitividad de los lugares, las jerarquías espaciales, en cuanto a nodos, y la intensidad de los vínculos (Lindón, 2012).

En segundo lugar, tenemos la visión del espacio como producción sociohistórica. Esta ahondó en las nociones espaciales como el producto de un devenir histórico, que plasmó en los lugares a las relaciones sociales en formas espaciales concretas. En este caso, las mismas, como expresión material de los avatares de la historia, terminaron redundando en un énfasis

desmedido sobre los aspectos materiales de lo espacial, dejando de lado aspectos relacionados con la agencia de los actores, su subjetividad, sus intereses y sus disputas.

Por último, nos encontramos con los enfoques que ven al espacio como una construcción que, sin negar el componente material, le otorgan una centralidad mucho mayor a la dimensión social (Lindón, 2012). Aquí encontramos una serie de trabajos que le otorgan una significación muy alta a los aspectos simbólicos, representacionales y experienciales de la vinculación de los sujetos con el espacio. Es en este sentido que no se puede reducir ni a una localización ni a una producción histórica, sino que es necesario profundizar en una comprensión del espacio a partir de los sujetos, de los actores que lo moldean y reproducen (Di Méo y Buleon, 2005).

Las prácticas y actividades son las que van a transformar un área determinada en un espacio. Por lo tanto, este se configura como una dimensión que emerge a partir de las distintas acciones que llevan adelante los actores. Como se presentó en el apartado de antecedentes, en la geografía alemana hay una tradición de pensamiento muy consolidado de constructivismo que pone el foco en la acción social, basado en los desarrollos teóricos de Werlen (1993), quien continúa y profundiza así la tradición de pensamiento “giddensiana” sobre la acción.

Retomando los planteos reseñados con anterioridad, este trabajo asume como supuesto teórico que la acción y el conocimiento no son previos al espacio, sino que ambos elementos se coconstituyen (Werlen, 2017). Por ello, se decide tomar aportes que permitan pensar a lo espacial en una situación de interacción social, remitiendo los análisis a marcos conceptuales provenientes de la geografía constructivista. El giro cultural que atravesó la geografía a partir de la década del 90 implicó una cierta convergencia conceptual y metodológica con otras ciencias sociales. A partir de ello, se incorporó una visión constructivista, que pone el foco en entender cómo las personas se desenvuelven en el espacio. Esto conlleva trascender las visiones más esencialistas, hacia la producción intencional y significativa de la espacialidad a través de las prácticas sociales (Dürr y Zepp, 2012). El espacio, pensado de esta manera, no es un elemento dado, sino un concepto en construcción continua, que es producido y reproducido a partir de las prácticas.

Esta corriente geográfica, basada en el constructivismo social, se propone estudiar de qué forma los individuos se vinculan con el mundo a partir de los intentos que hacen por llevar adelante sus acciones. En ese marco, las personas asignan significados simbólicos y sentidos a los

contextos espaciales donde desenvuelven sus prácticas cotidianas. De esta manera, en las situaciones de interacción que se estudian en esta tesis, se procura comprender cómo las relaciones espaciales de copresencia afectan la espacialidad subsiguiente de la dimensión social para la comunicación, las interacciones, la socialización y las situaciones de aprendizaje (Werlen, 2017).

Si pensamos en los casos que se van a analizar, entender al espacio desde una perspectiva constructivista permite descifrar qué tipo de significados se asignan desde la universidad y desde los grupos de investigación a los entornos donde van a desplegar sus intervenciones. A su vez, podemos determinar qué relaciones de poder se despliegan en esos espacios, de qué manera las intervenciones las reconfiguran, y cómo los distintos actores, en las experiencias generadas en marcos de copresencia, van a producir nuevos significados sociales intersubjetivos sobre su espacio habitado.

Territorio

El concepto de territorio ha generado numerosas reflexiones, especialmente desde el surgimiento de la disciplina de la geografía. Ratzel, un geógrafo alemán, fue el que primero desarrolló la idea del territorio en relación con el estado. Su enfoque, positivista y darwiniano, establecía una conexión entre el poder de una nación, su tamaño físico y su extensión geográfica (Sánchez Macchioli, 2020). Esto ocurrió en el contexto de la competencia europea por el poder económico y político, junto con la expansión del colonialismo a nivel global.

En la mitad del siglo XX, la utilización de este término fue perdiendo importancia en la medida en que el concepto de región comenzó a tener cada vez mayor peso, gracias a la influencia de la escuela de geografía social francesa. En ese contexto, surgió el "posibilismo", que enfatizaba la regionalización, tal como se reseñó anteriormente. En la década de 1970, sin embargo, el enfoque regional empezó a mostrar sus limitaciones teóricas y metodológicas, por lo que se recuperó la noción de territorio, a partir del surgimiento de nuevas formas dominantes para la experimentación del espacio y el tiempo (Harvey, 1990). Las nociones sobre el territorio, al incorporar la problemática del poder, se correspondían con preocupaciones crecientes de los estados, particularmente a partir de la década de 1980, para gestionar fenómenos socioespaciales en ámbitos locales. Es así como el concepto fue cobrando mayor relevancia, y ganando lugar en los discursos académicos e institucionales.

Este concepto constituye tanto un referente empírico, como un concepto propio de la teoría. A nivel conceptual, es útil para entender las relaciones sociales en su vinculación con la dimensión espacial, dado que el territorio contiene a las prácticas y a los sentidos simbólicos que los actores despliegan desde sus mundos sociales en su relación con la naturaleza y el espacio social (Llanos Hernández, 2010).

Diversos autores van a ver al territorio como una conceptualización asociada a la idea de dominio o gestión dentro de un espacio determinado, ligado a su vez a la idea de poder público, estatal o privado en todas las escalas (Correia de Andrade, 2002). De esta forma, el territorio deviene en la representación del espacio, el cual atraviesa transformaciones continuas en tanto resultado de la acción social en sus diferentes escalas e intensidades (Llanos Hernández, 2010). Por estos motivos, y por su gran flexibilidad conceptual, el territorio se convirtió, en las últimas décadas, en la categoría más importante del pensamiento geográfico académico.

Dentro de la geografía humana, una derivación está constituida por el concepto de territorialidad. Este fue muy utilizado para comprender determinados patrones de comportamiento. De acuerdo con Sack (1986), la territorialidad es vista en su capacidad de ejercer control e influencia sobre las acciones de otros actores, tanto en términos de ubicación como de movimiento, es decir, de los flujos en el espacio (Souto y Benedetti, 2011). Este tipo de definiciones incorporan la dimensión subjetiva donde existen agentes que tienen una intencionalidad. Hay un sustrato que da marco a la acción, y una voluntad por intervenir o controlarlo. Las relaciones de poder que se presentan en estos territorios tienen escalas múltiples, formando territorialidades multiescalares, que son inestables a nivel temporal y de límites flexibles o mutables (Souto y Benedetti, 2011).

De esta forma, el territorio se convierte en el resultado de la vinculación y el cruce de tres elementos principales: los agentes, que ejercen territorialidad; la acción, a partir de la cual se delimita e intenta controlar o apropiarse un área; y una porción del espacio, que tiene una posición pasible de ser modificada mediante una intervención técnica (Souto y Benedetti, 2011). Esta conjunción de esferas lleva a que el territorio no sea un mero sustrato, sino que se entienda como una red de relaciones sociales (Lopes de Souza, 1995), atravesadas por relaciones de poder (Haesbaert, 2013), en las cuales emanan temporalmente formas de legitimidad y modos de regulación propios (Lussault, 2015; Porto Goncalves, 2002).

Se entiende que las especificidades del territorio llegan a imprimirle un sello a la práctica misma en la medida en que se constituye en materialización de memorias individuales y colectivas que, a su vez, contribuyen a configurar las identidades de los sujetos y sus cursos de acción en el espacio (Lindón, 2012). A partir de situaciones interactivas, es posible realizar un recorte espacio-temporal del territorio, donde, de forma múltiple y simultánea, se cruzan diversas trayectorias con finales abiertos (Massey, 2012), producto de biografías que también son expresiones de otras singularidades (Lindón 2012). Se trata de un conjunto de trayectorias que se producen *en y con* el espacio, y que permiten pensarlo no solo como un soporte de las actividades, sino también como un elemento pasible de ser reconstruido y atravesado por las diferentes direcciones que toman esas trayectorias (Massey, 2008).

Para los casos que son analizados en esta tesis, se va a utilizar el concepto de territorio, que resulta útil para comprender las maneras en que se cruzan las trayectorias de los actores, académicos y extraacadémicos, en un área delimitada; y cómo estos cruces generan formas novedosas para moverse, regular y gestionar porciones del espacio. Las iniciativas de interacción que se proponen desde la universidad tienen, particularmente en uno de los tres casos, límites espaciales algo difusos, y, por ende, se vuelven más concretas a partir de la creación de redes de vinculación con actores específicos del entorno. Es desde el concepto de territorio que se puede entender cómo se conforman dichas redes, en las cuales se generan formas de legitimidad temporales y modos de regulación propios de cada espacio, que resulta territorializado a partir de una intervención social.

Estas intervenciones generan procesos a partir de los que diversos actores locales se reapropian de su entorno inmediato de forma novedosa. De esta manera, los actores, tanto universitarios como locales, incorporan saberes, experiencias y conocimientos. En el primer caso, ejercen ciertos efectos regulatorios sobre los procesos sociales, donde despliegan sus prácticas. En el segundo, las interacciones les permiten a los vecinos entablar redes con tramas más densas, y con mayor cantidad de vinculaciones, que les permiten gestionar de un modo diferente sus territorios y sus proyectos de vida.

Lugar

El concepto de lugar se ha utilizado de diversas maneras en la geografía. Por ello resulta necesario precisar los modos en que se lo ha empleado, siguiendo las tres principales

dimensiones en las cuales aparece (Agnew, 1987). En primer término, podemos encontrar su uso en referencia a la ubicación o localización específica en donde un objeto o una actividad se encuentra y relaciona con otros lugares a partir de la interacción o el movimiento. En segundo término, aparece la dimensión de lugar como local o sede donde se despliegan las actividades de la vida social y se estructuran las interacciones. En tercer término, surge la idea de un “sentido del lugar”, que está vinculado a la apropiación sobre una porción del espacio, y a los sentidos de pertenencia que se conforman de manera colectiva. Estos constituyen el requisito ineludible para que emerja la solidaridad social, la circulación de conocimiento y la acción colectiva (Agnew, 2011).

De acuerdo con la corriente humanista en geografía, el lugar se entiende como un área que se corresponde a una porción específica del espacio, con una estructura interna particular, y que produce un conjunto de significaciones con una respuesta afectiva de quienes lo evocan. De esta manera, el concepto constituye para la fenomenología una serie de significados a partir de los cuales las ciudades, los monumentos, las naciones o los edificios, pueden ser lugares en la medida que organizan el espacio y forman centros de significación (Tuan, 1978). Este tipo de enfoques, que están basados en la centralidad de los sujetos y sus experiencias, en el marco de un fuerte giro cultural en las ciencias sociales llevaron a una revitalización teórica de la disciplina, al incorporar dimensiones relacionadas con la subjetividad, la imaginación, la identidad y la percepción (Tuan, 1977).

Desde distintas vertientes de la geografía, entonces, se considera al lugar como un nodo donde convergen actividades, una acumulación de significados, un espacio concreto individualizado, una parte de la superficie terrestre que no tiene equivalencias en ninguna otra, o un ámbito donde confluyen objetividad y subjetividad (Tuan, 1974; Gumuchian, 1991; George, 2007; Farinelli, 2003; Entrikin, 1976). Desde Latinoamérica, por otra parte, lo definen de diversas maneras: como un espacio acotado que congrega múltiples significados materiales y simbólicos; como la construcción de puntos de encuentro; o como una localización de nivel local con sentidos y generadora de identidad (Lindón, 2007; Méndez, 2016; Ramírez Velázquez y López Levi, 2015).

El concepto de lugar es utilizado a lo largo de la tesis para nombrar a porciones del espacio que no constituyen entidades perfectamente delimitadas o aisladas entre sí. De acuerdo con la visión constructivista, los lugares se entienden como parte de redes de conocimiento, políticas y

culturales, que tienen distintos alcances y escalas. Por ello, y siguiendo a Agnew (2009), se analizan de una manera relacional, como localizaciones inestables, en cambio permanente, y atravesadas por las trayectorias de las redes de actores que están implicadas en su desarrollo.

Las situaciones de interacción, que se analizaron previamente, promueven en los actores locales, y en los mismos grupos académicos, la creación de nuevos sentidos sobre el espacio, que devienen en la emergencia de procesos de apropiación de los mismos y en la emergencia de identidades locales. El concepto de lugar, en este marco, permite indagar de qué manera se generaron dichos procesos identitarios en localizaciones específicas, cómo fueron significados esos lugares antes y después de la intervención de la universidad, y en qué medida las situaciones de interacción abordaron y coconstruyeron nuevas percepciones acerca del entorno, llevando a que una porción del espacio se constituyera en un lugar con características singulares.

Escala

Uno de los conceptos que han sido más utilizados por la geografía es el de escala, el cual cobró gran centralidad especialmente a partir de la década del 90. Esto se dio por la necesidad de contar con una herramienta conceptual para entender cómo los procesos de globalización y repliegue del estado afectaron las relaciones espaciales en distintos niveles, ya sea global, regional o local (Jessop et al., 2008). Este tipo de enfoques fue provechoso, entre otras cosas, para entender los procesos de diferenciación de jerarquías entre formas diversas de organización espacial (Collinge, 1999).

En este caso, y dado la perspectiva que se utilizará a lo largo de la tesis, se propone emplear el concepto de escala desde una noción constructivista. Esto implica trascender una visión de las escalas como un elemento dado ontológicamente, y pensarlas como uno producido y disputado por los distintos actores (Marston, 2000; Smith, 1993). Esto supone entender a las escalas de una forma relacional, a partir de la cual las mismas pueden pensarse como una relación de múltiples niveles, resultado de procesos históricos y contextuales (Madsen, 2022).

Desde la universidad, esta construcción no constituyó un proceso unívoco a lo largo de su historia. De hecho, cada gestión ha establecido un territorio determinado de intervención, con mayor o menor amplitud regional, y cada actor de la universidad que interactúa con el entorno,

como directores de proyectos de investigación y extensión, también determinan sus propias escalas de intervención en función de criterios de demarcación propios. Cuando distintos actores se proponen construir o producir una escala, en paralelo, están estableciendo, diferenciando y jerarquizando unidades espaciales determinadas (Brenner, 2001).

En ese marco, es posible pensar los procesos de interacción entre la universidad y los entornos a partir de la noción constructivista de las escalas. De esta forma, se podrá analizar de qué manera la universidad construye una noción propia, la cual por momentos colisiona con las escalas en las cuales intervienen otros actores (los estados municipal, provincial o nacional), o con las organizaciones del tercer sector que tienen su propia agenda de intervención territorial.

Las prácticas de los distintos actores se producen a partir de una convergencia relacional en donde cada uno despliega una serie de estrategias, que buscan generar efectos prescriptivos y regulatorios sobre el espacio social. Esto nos lleva a cuestionarnos: ¿el espacio se produce? ¿De qué manera? ¿Cómo se moviliza este en el marco de una práctica social? ¿Qué estrategias de intervención se llevan adelante y con qué finalidades? ¿En qué medida las intervenciones dan el marco para que surjan nuevas capacidades para desenvolverse en el espacio?

Procesos de interacción espacializados

Desde la sociología, el concepto de copresencia cobró popularidad a partir del trabajo de Goffman (1963), quien la pensaba como la interacción cara a cara en un espacio físico compartido. Esta visión algo simplista del proceso fue profundizada por autores que la plantearon como posible, a la distancia, mientras los actores compartan una mutua percepción, situada en tiempo y espacio (Giddens, 1991); o a partir de encuentros que se producen por medio de la utilización de dispositivos virtuales (Campos-Castillo, 2012; Knorr Cetina, 2009). Desde otra perspectiva, autores como Zhao y Elesh (2008) sostienen que la copresencia está vinculada con la percepción acerca de un “otro”, construyendo así una relación que está orientada de forma activa para con los demás.

La copresencia es uno de los conceptos centrales para entender los fenómenos que suceden cuando distintos actores e instituciones interactúan en un espacio determinado, particularmente cuando hay dos o más que están de forma presente y simultánea en un mismo lugar. Es allí cuando se producen procesos de comunicación de distinta índole, que están mediados por el

espacio y generan patrones de interpretación que son compartidos por diferentes actores. Entender las formas en las cuales la acción se especializa, entonces, supone necesario entender los tipos de conocimiento que circulan, la calidad de las trayectorias que se cruzan en los marcos interactivos, las experiencias compartidas por los individuos y el rol que las mismas juegan en los procesos identitarios y de creación de sentidos.

Las acciones de vinculación, en su dimensión última, involucran una corporeidad, una materialidad que en esta tesis va a ser analizada a partir del concepto de “copresencia”. Centrar la perspectiva en la acción implica entender el contexto de las condiciones subjetivas, sociales, culturales y materiales, en las cuales se insertan y desenvuelven los actores (Werlen, 2017). Esto resulta particularmente importante para analizar la forma en la que circula el conocimiento, particularmente los tácitos, a partir de compartir un espacio físico en simultáneo, lo cual termina modelando la experiencia directa a través del uso de los sentidos (Arbo y Beneworth, 2007).

Existe amplia literatura, desde la geografía económica, que reseña el papel que cumplen la proximidad espacial y la inserción territorial en los procesos de creación y difusión del conocimiento (Amin y Cohendet, 2003). De esta forma, el flujo de conocimiento, en estos marcos de copresencia, se vuelve cercano y personal, lo que plantea una relación entre la experiencia y la capacidad de adquirir conocimientos, que difiere de las experiencias donde la intermediación juega un papel central.

La forma en la cual se construye conocimiento a partir de la copresencia tiene implicancias más extendidas al momento de analizar fenómenos de interacción entre actores, dado que termina alterando las relaciones simbólicas con los espacios y los procesos identitarios que de allí emergen. En términos de Lussault (2007), la copresencia implica intercambios de conocimiento que parten de una disposición espacial de base y que, a partir de la interacción entre diferentes actores, ponen en juego, recrean y promueven, nuevas disposiciones espaciales en los lugares donde se implantan.

En este cruce de trayectorias, en copresencia y especializadas, se aplican tanto los aprendizajes generados con anterioridad, que están plasmados en rutinas y hábitos, como la capacidad para innovar, la creatividad y la imaginación. Dilucidar este tipo de encuentros, que se producen en marcos situacionales específicos, como los propuestos por la universidad a partir de las

experiencias de interacción, permite abrir esa caja negra que constituye la dimensión espacial de las prácticas.

Analizar una acción especializada requiere, en primer lugar, observar los “ensamblajes” que se producen en una situación y que son contingentes (Latour, 2000). En segundo lugar, estudiar cómo se constituyen ensamblajes efímeros, con dimensiones espaciales que se modifican de forma continua. Si el espacio y la acción van a ser elementos que se coconstituyen, entonces las prácticas sociales van a crear arreglos espaciales, delimitaciones, distancias, y nuevos cruces de trayectorias. Estas, a su vez, implican discursos en los actores que tienen contenidos y elementos espaciales, tales como ubicaciones, distancias, accesibilidades o límites (Lussault y Stock, 2006).

Siguiendo con el planteo anterior, los marcos situacionales, como los que se analizan en esta tesis, van a estar compuestos de un ensamblaje de elementos diversos, que en procesos de intercambio de conocimiento buscan instituir disposiciones espaciales en sus interlocutores. Es a partir de las prácticas que se construye nuevas espacialidades, mediante ensamblajes efímeros que contienen a las formas materiales preexistentes, las cuales constituyen un recurso para las situaciones, pero a su vez las reconfigura con base en su despliegue, generando nuevas formas materiales y disposiciones para la acción.

En relación con los procesos de interacción y difusión de conocimiento, y en línea con las ideas de Amin y Cohendet (2003), en esta tesis se tomará al espacio como una red de relaciones, tanto contiguas como virtuales, con escala, duración y longitud variable. A partir de ello, el conocimiento implicará operaciones de distinta índole, que van desde movilizaciones espaciales de los actores implicados, hasta encuentros presenciales, comunicaciones virtuales, experiencias compartidas, flujos de información y de ideas. En cada uno de los tres casos estudiados, de esta manera, se prestará particular atención a qué tipo de conocimiento movilizan los actores académicos, las experiencias que surgen a partir de la interacción con los actores barriales, los saberes emergentes del encuentro entre ambos, y las nuevas disposiciones sociales y espaciales que resultan de estos marcos interactivos.

Recapitulando

De acuerdo con los antecedentes y aportes que se han ido reseñando en este capítulo, se puede llegar a la conclusión de que la geografía constructivista aporta un conjunto de herramientas conceptuales que permiten incorporar en el análisis a cuestiones como la territorialidad, la apropiación, la identidad, el espacio vivido, la imaginación, la subjetividad, entre otras. Estos conceptos han sido tratados, en parte y de forma subsidiaria, por la teoría social, por lo cual resulta importante rescatar su potencial analítico y metodológico para el abordaje de temáticas que se encuentran en el cruce entre lo social y lo espacial.

Es en este marco donde resulta importante dejar en claro qué definiciones sobre cada concepto son utilizadas en el análisis, y en qué medida estos son útiles para pensar las dimensiones de interacción y de conocimiento. En el cuadro que se presenta a continuación, se sintetiza brevemente este cruce conceptual entre las variables espaciales y las dimensiones de análisis principales.

Cuadro N.º 1: Malla conceptual generada a partir del cruce entre las variables espaciales y las dimensiones de conocimiento e interacción

	Interacción	Conocimiento
Espacio	Asignación de significados desde la universidad. Reasignación de significados en los actores locales. Entender las maneras en que la interacción afecta de modo más global la dimensión espacial	Conjunto interiorizado de modos de relación de cada actor con el espacio, que regulan la forma en la cual el conocimiento puede ser apropiado.

	Interacción	Conocimiento
Territorio	Gestión y abordaje de problemáticas sociales a partir de construir redes de relaciones. Efectos regulatorios sobre procesos sociales.	Cruce de prácticas y discursos: las experiencias sociales territorializadas influyen en la manera en que los actores se apropian del conocimiento.
Lugar	Generación de procesos identitarios en localizaciones específicas. Generación de nuevas percepciones localizadas	Sentidos colectivos y localizados de pertenencia que moldean la forma en la que circulan y se adoptan los conocimientos.
Escala	Escalas múltiples de intervención desde la universidad que colisionan con las escalas generadas por otros actores, estatales y privados.	Circula mejor situado en escalas micro. Dificultades para la apropiación de conocimientos complejos entre escalas diversas.
Copresencia	Generación de patrones de interpretación compartidos. Los procesos de interacción social nuevos necesitan de la copresencia para consolidarse.	Procesos de comunicación mediados por el espacio. La cercanía promueve circulación y apropiación de los conocimientos

Fuente: elaboración propia.

La propuesta de esta tesis consiste en articular teóricamente el problema de la interacción de la acción universitaria con la dimensión espacial, entendidos ambos como dos grandes ejes teóricos. A lo largo de este trabajo, en cada uno de los tres casos relevados, se lleva adelante el análisis poniendo el foco en cada una de las variables presentadas en el cuadro precedente, las cuales permiten profundizar en las dimensiones que constituyen el objetivo central del trabajo.

La utilización de esta matriz, en cada caso de vinculación universitaria, permite estudiar distintos aspectos que no suelen ser tratados con especificidad por la literatura que aborda estas problemáticas. Al analizar al espacio desde una visión constructivista, se pueden entender los significados que asigna la universidad sobre el entorno y la manera en la cual estos son reasignados por los actores locales. En cuanto al conocimiento, permite ver los modos de relación que tiene cada actor con el espacio, y las formas en las que esto moldea los procesos de apropiación.

El concepto de territorio es tomado en este trabajo desde su dimensión más relacionada a la gestión y los efectos regulatorios que tiene sobre los procesos sociales, lo cual permite entender las formas en las que las interacciones propuestas por la universidad marcan una agenda donde los actores involucrados despliegan y generan respuestas. Esto tiene relación directa con el rango de prácticas que pueden llevarse adelante y con los discursos que estas legitiman o restringen.

El concepto de lugar permite abordar, desde una óptica más micro social, las formas en las cuales se construyen las identidades y percepciones, en porciones del espacio más acotadas y con especificidades propias. El conocimiento, en estos marcos específicos, tienen patrones de circulación particulares relacionados con sentidos contruidos entre actores locales que generalmente son vecinos que interactúan con intensidad.

El concepto de escala, por su parte, permite comprender una de las principales problemáticas de los procesos de intervención universitaria en los entornos, vinculada con iniciativas de distintos actores, públicos y privados, que tienen sus propias lógicas, escalas y agendas de intervención. Este concepto permite entender esta colisión con intereses no siempre alineados, y la influencia que ejerce en la circulación de conocimiento, que tiende a transitar mejor en escalas que son más acotadas y donde la interacción personalizada juega un rol más extendido. Esto nos lleva al concepto de copresencia.

El concepto de copresencia resulta útil para comprender de qué manera se generan patrones de interpretación compartidos, a partir de procesos de interacción social, intensa y personalizada. Esta noción resulta fundamental para entender de qué modo un proceso de interacción universitaria puede tener éxito, al lograr tejer una red de vínculos densa, o fracasar, al no lograr consolidar estos procesos de copresencia, que resultan fundamentales para la circulación de saberes y experiencias. Los procesos de comunicación entre los distintos actores están necesariamente mediados por el espacio, y la circulación del conocimiento tiende a tener mayor éxito en la medida de que se desarrollen lazos personales, en los cuales la cercanía resulta fundamental.

Metodología y técnicas de investigación

La presente investigación sigue una metodología cualitativa. La selección de este enfoque, también llamado "no estándar" (Marradi, Archenti y Piovani, 2007), se basa en la adopción de un marco teórico que se compone de herramientas analíticas provenientes de perspectivas interpretativas. El propósito fundamental de este abordaje es lograr una comprensión profunda de las prácticas de los actores involucrados, así como de los significados, creencias y sentidos, que se encuentran presentes en ellas. Para alcanzar este objetivo, se requiere utilizar técnicas de recolección de datos específicas que permitan captar adecuadamente dichas asignaciones de sentido, trayectorias y disposiciones de actuación en el espacio.

Blumer (1984) argumenta que la investigación científica se inicia al plantear preguntas sobre el mundo empírico para luego transformarlas en problemas a investigar. Para ello, según el autor, es necesario tener una cierta familiaridad con el recorte empírico donde estos se encuentran. Es a partir de allí que se construyen problemas, datos, conceptos e interpretaciones, que surgen de la naturaleza del mundo empírico que nos hallamos analizando.

La estrategia que se plantea para llevar adelante un análisis de este tipo parte de una primera exploración como modo de indagación de la realidad. Esto implica, en primera instancia, que se desarrolle una cercanía con este mundo social que se está investigando; y, en segunda instancia, que la recolección de los datos, las relaciones analíticas y las interpretaciones, se mantengan enraizadas a partir de los componentes empíricos que se están estudiando (Forni,

1988; citado por Pérez Serrano, 1997). Se parte de un foco de investigación amplio, pero que se afina a medida que la investigación se va desplegando y desagregando.

En este sentido, el diseño de la investigación cualitativa debe caracterizarse principalmente por su flexibilidad (Hammersley y Atkinson, 1994) y por su diseño interactivo (Maxwell, 1996). Esto implica que las decisiones tomadas en el proceso de investigación pueden ser reconsideradas o modificadas a lo largo del trabajo de campo. En el contexto de este tipo de enfoque metodológico, no se encuentra una equivalencia directa al concepto de "marco teórico" que se utiliza en los diseños convencionales y consiste en un conjunto más o menos cerrado de parámetros teóricos, que actúan como una guía para iluminar el fenómeno social de interés. De forma inversa, la modalidad que asume un diseño cualitativo va a depender, fundamentalmente, de los objetivos que fueron trazados por el investigador (Patton, 2002).

Selección de los casos

La tesis se desarrolla a partir de lo que se denomina como una investigación de casos, la cual puede definirse como una profundización de situaciones particulares para analizar un fenómeno determinado. En este tipo de investigaciones, la selección de los casos puede estar basada en diferentes criterios, tales como el grado de representatividad, la variabilidad, la importancia que revisten, o la conveniencia a efectos del estudio a ser realizado.

La investigación está atravesada por un supuesto principal: partiendo de los tres casos de vinculación seleccionados es posible comprender el problema central de la tesis. En este caso, se refiere a cómo opera el conocimiento científico generado por la universidad en marcos interactivos específicos, por fuera de la institución universitaria. En términos más generales, a partir de ellos se busca ilustrar diferentes modalidades de interacción de la universidad con el entorno, en espacios que se ven atravesados por diversas dimensiones de vulnerabilidad.

Dadas las características del fenómeno, la selección de los casos se constituye en un aspecto de centralidad en la metodología de la investigación. Uno de los criterios clave fue, en términos de Stake (1988), el grado de accesibilidad a los escenarios donde se desplegaron los proyectos y a las distintas personas involucradas. Tanto la Universidad Nacional de Mar del Plata, a nivel de Rectorado, como sus distintos grupos de investigación, se mostraron altamente dispuestos a

colaborar, a proveer documentación específica y a habilitar redes de contactos para llevar a cabo las entrevistas por fuera de la institución.

La selección de los tres casos en la misma universidad obedeció a este amplio criterio de accesibilidad, más que al hecho de que la universidad tuviera alguna característica particular por sobre otras. Dentro de la misma se buscó, entonces, identificar casos de vinculación con el entorno que cumplieran con determinadas condiciones. En primer lugar, que fueran vinculaciones que no tuvieran como eje la valorización estrictamente económica del conocimiento. En segundo lugar, que buscaran abordar dimensiones de la vulnerabilidad a partir de visiones más consustanciadas con el desarrollo socioespacial. Y, en tercer lugar, que cada caso tuviera la voluntad de trascender visiones más lineales y buscara enrolar a actores del entorno en el desarrollo de los proyectos.

Para la identificación de qué casos estudiar se consultó a funcionarios de gestión pertenecientes al rectorado de la universidad, y a secretarios de vinculación y extensión de distintas facultades (Humanidades; Arquitectura, Urbanismo y Diseño). Estos señalaron un grupo de experiencias de vinculación que consideraban particularmente significativas, tanto en relación con la cantidad de personas involucradas, como con la relevancia social y el alcance territorial de las problemáticas abordadas. Luego se realizaron algunas entrevistas exploratorias en varios de los casos tentativos, a partir de las cuales se determinó que los casos a estudiar finalmente fueran tres: la construcción de una planta demostrativa de biogás en Los Pinos; el Proyecto de Hábitat y Ciudadanía, desarrollado en territorios de alta vulnerabilidad social; y el Proyecto de Ciencia y Tecnología contra el Hambre, que consistía en la fabricación de alimentos con base en harina de pescado.

Es importante destacar que el trabajo de campo fue realizado en distintos momentos entre los años 2018 y 2022, con un impasse producto de la Pandemia de Covid-19 entre los años 2020 y mediados de 2021. Esto implica que el trabajo para el caso que se desarrolla en el Capítulo 3 se llevó adelante entre los años 2018 y 2019; para el Capítulo 4, entre 2021 y 2022; y para el Capítulo 5, entre los años 2022 y 2023.

En el desarrollo de los casos, que se condensan en un capítulo cada uno, se utilizó como estrategia respetar su temporalidad. Esto implica sostener un orden cronológico que respete la especificidad de cada uno para la presentación de la información, tal como fuera relevado en el

trabajo de campo a partir de las entrevistas que se llevaron adelante. Si bien esta narrativa temporal se apoya en los distintos ejes analíticos propuestos en la tesis, es al final de cada capítulo donde se proponen consideraciones en términos más sintético-analíticos.

Los trabajos de investigación que llevan adelante estudios de caso no tienen por objetivo generar conocimiento generalizable, o extrapolable necesariamente a otras realidades similares. Sin embargo, partiendo de esta tesis, se pretende hacer una contribución metodológica acerca de las posibilidades que brinda el análisis espacial en el estudio de realidades sociales complejas.

Técnicas de recolección de datos

En función al problema de investigación que se aborda en esta tesis, utilizaron distintas técnicas de recolección cualitativas, como parte de una estrategia de “triangulación intrametodológica”. En este caso fueron: entrevistas, observación participante y análisis de documentos. Esta combinación se utiliza para lograr una visión más acabada y refinada del aspecto a estudiar. La triangulación de datos ya sea a nivel temporal o espacial, implica la implementación de diversas estrategias de recopilación, que tienen como propósito confrontar un conjunto específico de observaciones con otros, explorando el mismo fenómeno desde múltiples perspectivas (Forni, 2020).

La triangulación intrametodológica emerge como una estrategia central, ya que permite confrontar y complementar datos que fueron obtenidos mediante instrumentos o estrategias diversos. Esto permite disminuir los sesgos y superar las limitaciones que son inherentes a la dependencia de un solo método de investigación. Dicho enfoque, al integrar múltiples perspectivas y fuentes, aporta solidez al análisis y enriquece la visión general de la investigación.

Las entrevistas en profundidad

Las entrevistas en profundidad fueron la técnica de recolección de datos más utilizada en la tesis, debido a que cumplen con una serie de funciones que resultan indispensables para realizar el análisis propuesto como objetivo. En principio, permiten a los investigadores explorar y

comprender en detalle las experiencias, actitudes, percepciones, valores, creencias y motivaciones de los entrevistados. Por otro lado, son fundamentales para conocer de primera mano el contexto en el que se desarrolla el fenómeno estudiado. Por último, durante el transcurso de las entrevistas surgen nuevas preguntas, interrogantes y aproximaciones, las cuales permiten refinar los presupuestos iniciales.

El proceso en profundidad tiene un carácter flexible y dinámico, que involucra encuentros en copresencia del investigador con la persona entrevistada, y permite conocer, de primera mano y con sus propios términos, sus experiencias relacionadas con la temática abordada. Como señala Lindón (2008), el análisis de las prácticas espaciales de los sujetos parte de la premisa de que estas involucran a la memoria y al acto del habla. En función de esto, Di Méo y Buleon (2005) señalan que las entrevistas, entre otras técnicas, son estrategias adecuadas para aproximaciones constructivistas, dado que permiten encontrar y comprender las lógicas de la acción.

A lo largo de la tesis, se llevaron adelante un total de veintiocho entrevistas: seis a funcionarios de gestión de la Universidad; quince a directores de grupo de investigación, investigadores y extensionistas; y siete a vecinos-interlocutores de los procesos de vinculación. Todas ellas se realizaron teniendo en cuenta el criterio denominado “muestreo teórico”, en términos de Glaser y Strauss (1967), a partir del cual se sostiene que el número de personas a entrevistar se ve saturado desde el momento en el que el investigador percibe que realizar más entrevistas no conlleva a una mayor comprensión del fenómeno a abordar. Para todos los casos se sostiene el compromiso del investigador para no revelar los nombres de los entrevistados.

Las entrevistas con los distintos actores se distribuyeron de la siguiente manera:

- Secretario de Investigación de la UNMDP
- Subsecretaria de Extensión
- Subsecretario de Transferencia y Vinculación Tecnológica
- Secretario de vinculación Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño
- Encargada del área de Innovación y Transferencia de conocimiento de la Facultad de Humanidades
- Responsable de los Centros de Extensión Universitarios

Entrevistas preliminares, previas a la selección de los tres casos de estudio:

- Directora de Centro de Investigación
- Cuatro investigadores UNMDP-CONICET

En relación con los casos analizados, se llevaron adelante las siguientes entrevistas:

- **Grupo del Programa Hábitat y Ciudadanía**
 - Director del grupo
 - Tres becarios de investigación adscritos al proyecto
 - Tres interlocutores barriales del proyecto
- **Grupo del Programa Ciencia y Tecnología contra el Hambre**
 - Director del grupo
 - Responsable del Centro de Extensión Universitaria Santa Clara
 - Coordinador de Economía Social, Municipalidad de Mar Chiquita
 - Emprendedora social interlocutora del proyecto
- **Grupo de Planta Demostrativa de Biogás en Los Pinos**
 - Directora del proyecto
 - Directora de un proyecto de extensión vinculado
 - Dos investigadores adscritos al proyecto
 - Tres interlocutores barriales del proyecto

Recolección de datos a partir de documentación

En paralelo a las entrevistas, también se obtuvo una cantidad de información en función del análisis de un conjunto de documentos, que tratan tanto de fuentes primarias como secundarias: artículos de investigación y presentaciones en congresos desarrollados por los investigadores involucrados; currículum vitae de dichos investigadores; y convenios, documentos institucionales y ordenanzas del Consejo Superior de la UNMDP. A la par, se consultaron sitios web institucionales de la UNMDP, de empresas de provisión de servicios públicos, y de

organismos vinculados a los tres casos. De la misma forma, se indagaron artículos periodísticos, y sitios web de noticias.

La observación participante

La observación participante es una técnica para la producción de datos, en la que el investigador observa las distintas prácticas que llevan adelante los agentes sociales, en el “escenario natural” en donde se producen, en situaciones que no necesariamente son objeto de atención por parte de éstos. A la par, el investigador participa en el desarrollo de dichas prácticas de diversas formas (Jociles Rubio, 2018). Esto puede darse de una manera más activa, en los escenarios donde se desenvuelven, o de una forma más pasiva, como una simple presencia en esos espacios (Guber, 2001).

La producción de datos a partir de esta técnica de observación participante fue utilizada en dos de los tres casos: en la planta demostrativa de biogás de Los Pinos y en el Programa de Hábitat y Ciudadanía. Ambos tenían una dinámica de trabajo que implicaba encuentros frecuentes entre investigadores y extensionistas de la UNMDP con vecinos o referentes territoriales de los barrios donde se desplegaban cada uno de los proyectos. La observación participante, en ese contexto, fue utilizada para conocer de forma directa cómo eran los intercambios entre ambos grupos, y comprender qué se discutía o intercambiaba en esos encuentros, qué tipos de conocimiento e informaciones circulaban, y qué características tenían las dinámicas de trabajo territorial de los universitarios en los barrios.

En ambos casos, la posibilidad de llevar a cabo la observación participante contó con el permiso de los directores de cada proyecto, y se realizó a lo largo de distintas visitas. Dos fueron concretadas en la localidad de Los Pinos, y otras tres, en dos barrios de Mar del Plata. En esos encuentros, se tomaron notas de campo, que luego fueron sistematizadas y estudiadas en función de los datos que se obtuvieron en las entrevistas y en los análisis de datos provenientes de otras fuentes.

Capítulo 2: Universidad Nacional de Mar del Plata: Historia y contexto

Introducción

La ciudad de Mar del Plata cuenta con una historia particular, dados sus orígenes como balneario turístico visitado por las élites porteñas y su posterior transformación en una ciudad socialmente heterogénea y con una importante diversificación productiva. Ya en la década de 1920, con la llegada de administraciones socialistas al gobierno municipal, se comenzaron a implementar políticas para permitir un acceso más igualitario a las prácticas de ocio. En los años 30, y de la mano de intendencias conservadoras, se llevaron adelante diversos proyectos de envergadura que buscaron democratizar el balneario y abrirlo al acceso de las ascendentes capas medias y altas del país.

El dinamismo urbano de la ciudad se vio acelerado, en gran medida, por la llegada del peronismo, que con la extensión de sus políticas sociales incorporó al turismo como uno de los derechos básicos de los trabajadores. Mar del Plata, que, desde fines del siglo XIX, y con mayor fuerza a inicios del siglo XX, se había convertido en un emblema de las posibilidades de ocio de los sectores más acomodados, se transformó en un lugar de un gran simbolismo y, por ende, un objetivo a “conquistar” por parte de los trabajadores. Algunos de los hoteles más tradicionales de la ciudad pasaron a ser adquiridos por organizaciones obreras lo que permitió que comenzara a desarrollarse fuertemente, a partir de los años 40, el turismo de masas. En la ciudad, esto implicó la masificación de la hotelería sindical, lo que terminó por convertirla en el principal destino del país para el turismo gremial.

A la par de esto, la Ley de Propiedad Horizontal, promulgada en 1948, reglamentó las construcciones de esta tipología habitacional, y sentó las bases para que la industria de la construcción despegara y se convirtiera en uno de los sectores más dinámicos de la economía local. Entre los años 50 y 70, la incorporación de nuevas capas medias a las prácticas de ocio se multiplicó y la ciudad pasó de recibir 350 mil turistas en los años 40, a más de 3 millones en los años 70.

El enorme incremento de la actividad turística llevó aparejado el crecimiento de otras industrias complementarias, como la construcción, la alimentación, la pesca, la hotelería y los servicios. También posibilitó la radicación de muchas familias y de trabajadores atraídos por el gran desarrollo de la ciudad. Estas radicaciones, que no solo fueron de migrantes nacionales sino también de migrantes provenientes de otros países, movilizaron fuertemente la vida social de la ciudad. Sin embargo, este dinamismo económico y urbano tuvo siempre los altibajos laborales propios de una actividad con un componente fuertemente estacional, como lo es la turística, que a su vez tradicionalmente contó con fuertes visos de precarización.

A pesar de esto, se puede verificar que la ciudad, sobre todo a partir de los años 40, desarrolló procesos de movilidad social ascendente que permitieron la emergencia de capas medias, profesionales y técnicas, que se fueron insertando en las distintas ramas socioproductivas. También surgieron toda una serie de instituciones intermedias que contribuyeron a densificar los lazos sociales, entre las que se pueden mencionar: asociaciones obreras, sociedades de fomento, clubes deportivos, bibliotecas, organizaciones políticas, entre otras.

Para finales de la década del 50, Mar del Plata contaba con más de 200 mil habitantes, y una matrícula primaria y secundaria de 44 mil alumnos. Esta ciudad, plagada de contrastes, con sectores sociales altos en retirada, un fuerte crecimiento, tanto de la población como de la economía, y una estructura ocupacional crecientemente sofisticada, pero con grandes problemas sociales, comenzó a requerir espacios de formación para las distintas profesiones y oficios, que se demandaban cada vez en mayor número. Estos requerimientos se produjeron en un contexto nacional en el cual se venía discutiendo fuertemente la necesidad de ampliar la matrícula a fines de cimentar procesos de modernización económica.

La matrícula universitaria aumentó explosivamente en las administraciones peronistas, pasando de 50 mil estudiantes en 1947 a más de 140 mil en 1955. La inestabilidad política de los años posteriores no cercenó este crecimiento. Las discusiones sobre la implicancia de la formación universitaria en los procesos de modernización socioeconómica contaron con terreno fértil en los tiempos del gobierno de Frondizi (1958 a 1962). En esta época, y a pesar de una activa campaña en su contra, se avanzó en la reglamentación del artículo 28 del decreto 6.403 por el cual se posibilitó la creación de universidades privadas.

La posibilidad de conformar un sistema privado de enseñanza superior resultaba contrario a la tradición educativa argentina, basada en el predominio de la instrucción laica y la impronta gratuita e igualitaria (Buchbinder, 2010). Esta situación se puso de manifiesto en las huelgas, movilizaciones y actos multitudinarios realizados en contra de esta medida¹. A fines de agosto de 1958, siete rectores de universidades nacionales solicitaron al presidente que no reglamentase el artículo. Los episodios que se desarrollaron en este contexto también revelaron la influencia adquirida por la Iglesia en la esfera pública y la debilidad en el consenso histórico que postuló el sistema de enseñanza laica monopolizado por el Estado.

En el caso de Mar del Plata, esto se tradujo en un proyecto de crear una universidad privada en la ciudad de Mar del Plata: El Instituto Universitario Libre, luego denominado Universidad Católica Stella Maris (en adelante UCSM), impulsado por el Obispo Enrique Rau. La ley que permitió en 1958 la creación de universidades privadas posibilitó también la conformación de universidades provinciales. Así fue como se crearon instituciones en La Pampa (1959), Mar del Plata (1961), Neuquén (1964), San Juan (1965) y Tandil (1968), entre otras, como consecuencia de la creciente demanda de espacios de formación.

La Universidad Provincial de Mar del Plata y la Universidad Católica Stella Maris

La Universidad Nacional de Mar del Plata fue creada en el año 1975, a partir de la nacionalización de dos universidades preexistentes: la Universidad de la Provincia de Buenos Aires y la Universidad Católica Stella Maris, que a su vez fueron fundadas respectivamente en los años 1961 y 1958².

La Universidad Provincial de Mar del Plata (en adelante UPMDP) se creó en octubre de 1961, como una institución dependiente del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires³. La misma tenía como objetivo la formación de profesionales en diversas disciplinas de orden científico, técnico y humanístico. Según su ley de creación, la 7463, tenía por objetivo:

a) Propender a la formación del hombre argentino, a través del desarrollo de una cultura

¹ Risieri Frondizi, rector de la UBA y hermano del presidente se puso al frente de aquellas manifestaciones.

² Mediante la Ley N° 21139 sancionada el 18 de noviembre de 1975.

³ Por medio del Decreto N° 11723

integral; b) Adaptarse a las características de la región y velar por sus necesidades tanto culturales como científicas; y c) Asesorar y cooperar en la investigación de los problemas regionales, por propia iniciativa o apoyando planes, de origen oficial o privado, que aporten soluciones adecuadas. Una de las principales instituciones que impulsaron su creación, la UCIP (Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata), esperaba que esta nueva universidad fuera capaz de “subsana el déficit de personas capacitadas para impartir enseñanza”, así como trabajar en la capacitación de profesionales necesarios para el desarrollo de la industria local (Álvarez y Reinoso, 1999). Particularmente se hacía hincapié en que se formaran profesionales para las principales actividades económicas de la ciudad: la construcción, el comercio y el turismo.

La importancia de la UCIP en el surgimiento de la UPMDP fue tal que el Ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires le encomendó que organizara la primera Asamblea para conformar la Comisión Cooperadora de la Universidad Provincial. En esta, se planteó “(...) se buscará una formación humanista en los estudios y de subsana el déficit de personas capacitadas para impartir enseñanza, la creación de una Facultad de Medicina sobre la base de la habilitación del Hospital Regional y la realización de cursos de verano (...)”⁴.

La UPMDP estaba constituida por las Facultades de Ciencias Económicas, Ingeniería, Humanidades y Arquitectura y Urbanismo. En 1966 se creó la Facultad de Ingeniería Técnica y se incorporaron el Instituto Superior de Ciencias de la Educación y la Escuela de Psicología, que a su vez posteriormente conformó la Facultad de Humanidades. Finalmente, ese año se creó también el Departamento de Ciencias Médicas, en dependencias del Rectorado. En junio de 1968, se constituyó el Instituto Superior de Turismo y al mes siguiente, como resultado de un convenio entre la Universidad y la Dirección Nacional de Salud Mental, la Escuela de Terapia Ocupacional. En 1969, y atendiendo a las necesidades de las diferentes carreras que integraban ya la Universidad, se creó el Departamento de Idiomas, se transformó el Instituto Superior de Turismo en Escuela de Turismo y se fundó el Instituto para la Investigación de los Intereses Marítimos.

Por su parte, la Universidad Católica Stella Maris nació bajo el impulso de una política muy decidida de la iglesia católica cuyo objetivo era recuperar su influencia en el sistema educativo

⁴ Historia de la universidad. Texto disponible en el siguiente enlace: <http://www2.mdp.edu.ar/index.php/institucional>

argentino. En la década del 50, esta lanzó varias casas de estudio que luego se convertirían en universidades: la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad Católica Argentina, y las Universidades Católicas de La Plata, Santa Fe, Tucumán y Mar del Plata.

En el caso particular de Mar del Plata, la UCSM surgió a partir de la conjunción de esta política de la iglesia de intervenir más activamente en la sociedad y un impulso muy decidido de las fuerzas vivas de la ciudad, particularmente de cámaras comerciales y de profesionales e intelectuales, que demandaban la creación de una universidad que formara profesionales para sostener el desarrollo y el crecimiento económico. El obispado de la ciudad, a comienzos de la década del 50, comenzó a realizar algunos cursos de capacitación y lanzó una universidad de verano. En el año 1958, lanza el Instituto Universitario Libre, que fue el germen de la futura UCSM, la cual finalmente logró ser reconocida como universidad en 1961. Este reconocimiento llevó a la situación de que casi en simultáneo se erigieran dos universidades en Mar del Plata: la UCSM y la UPMDP. Sin embargo, ambas casas de estudio no tendieron a competir en su oferta académica, sino a “repartirla” de manera tal que los posibles interesados no tuvieran que elegir entre una y otra. En la UCSM se organizaron las Facultades de Agronomía, Derecho, la Escuela de Enfermería Universitaria y la Facultad Central de Filosofía, que dictaba las carreras de Letras, Historia, y Filosofía.

Una de las experiencias de vinculación más intensa entre la oferta académica y las demandas del entorno estuvo dada por la creación de la Facultad de Agronomía. La misma articuló la participación de diversas instituciones: el INTA, la Agencia Internacional de Desarrollo (AID), la UCSM y el Consejo Nacional del Desarrollo (CND). Se decidió la creación de la Facultad en un predio del Partido de Balcarce, en el cual se planteó una articulación entre enseñanza, investigación y extensión.

Uno de los problemas recurrentes de la UCSM fue el del financiamiento. La universidad cobraba aranceles para las carreras que impartía, pero la matrícula no resultaba suficiente para sostener todas las erogaciones. Por otra parte, el estado estaba imposibilitado por ley a sostener financieramente a universidades privadas. Esto llevó a una situación de ahogo presupuestario que, a pesar del crecimiento de la matrícula, acabaría resultando prácticamente terminal para comienzos de los años 70.

En este punto, la situación de la UPMDP no fue muy diferente. Los años 60 y 70 fueron de gran inestabilidad, política y económica, y la universidad tuvo constantes problemas de financiamiento. A esto se sumaron los problemas de infraestructura, al no tener una sede propia y, por lo tanto, verse obligada a desarrollar todas sus actividades curriculares en el turno tarde/noche de distintas escuelas de la ciudad.

El Plan Taquini y el contexto nacional de creación de nuevas universidades

La inestabilidad política de los años 60, en particular a partir de la autodenominada “Revolución Argentina”, implicó fuertes tensiones para el sector universitario. Esto se debió a la creciente politización de los estudiantes universitarios, en un contexto de fuerte crecimiento de la matrícula a nivel nacional. En un contexto de “modernización autoritaria”, tal cual fue llevado adelante por la dictadura que depuso al gobierno de Arturo Illia, las universidades eran vistas como un núcleo de oposición política que tenía que ser neutralizado. Fue así que surgió la propuesta del Dr. Alberto Taquini por crear nuevas universidades, que buscaban convertirse en polos de desarrollo, fomentando la regionalización y modernización de la educación universitaria. Cabría tener en cuenta dos factores determinantes: la concentración de la población y la necesidad de impulsar el crecimiento regional. En este marco, la propuesta consistía en la creación de cinco universidades nacionales, tres que dieran respuesta a la necesidad de equilibrio demográfico, y dos orientadas al desarrollo regional. Siguiendo el primer criterio, se emplazarían dos instituciones en el conurbano bonaerense: una en el oeste, en Luján, y la otra en el sur, en el trayecto entre Buenos Aires, La Plata y Quilmes. Tomando en consideración el segundo propósito, se pretendía crear una universidad en la Patagonia. A su vez, la creación de una universidad en el sur de la provincia de Córdoba, Río Cuarto, y de otra localizada en la zona norte de Buenos Aires, próxima a Zárate, buscaría conjugar ambos objetivos.

Basado en el modelo de las *research universities* norteamericanas, las nuevas casas de estudio estarían estructuradas en un *campus* y se organizarían bajo la unidad departamental, eliminando las tradicionales facultades y cátedras independientes. Asimismo, esta modernización suponía la oferta de carreras nuevas no tradicionales, orientadas al desarrollo regional y con un tamaño óptimo estimado en alrededor de 20 mil alumnos. La inspiración de Taquini provenía del

proyecto universitario de Joaquín V. González, quien en 1905 había creado la Universidad Nacional de La Plata bajo el modelo estadounidense. Durante la presidencia de Levingstone, el “Plan Taquini” comenzó a ser percibido como un instrumento político, destinado no solo a cumplir con la descentralización universitaria y el desarrollo regional, sino también como estrategia de seguridad nacional, asociada a la desconcentración de las masas estudiantiles (Rovelli, 2009). Mientras que en el período desarrollista las universidades habían sido concebidas como “motores del desarrollo”, con el nuevo régimen autoritario se las identificó con los “focos de perturbación pública”.

La política universitaria tomó un nuevo giro bajo la presidencia de Lanusse, quien pronto anunciaría la creación de más universidades de las que estaban contempladas originalmente en el proyecto de Taquini. Ya inserto en la agenda política del gobierno, el proceso adquirió un acelerado ritmo junto con el aumento de las presiones provinciales por crear universidades nacionales en todo el país, y obligó al gobierno a exigir estudios de factibilidad que justificaran la solicitud. El freno al éxodo universitario de las provincias aumentaría las posibilidades de las mismas, al contar con recursos humanos formados e instituciones con posibilidades de articular con el medio (Perez Lindo, 1985).

Entre mayo de 1971 y mayo de 1973, se crearon 16 universidades nacionales. Si bien el anhelo de distintas provincias de tener una institución universitaria en su territorio no era nuevo, a principios de la década del 70 el proceso cobró impulso. La propuesta de Taquini, el Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad 1971-1975 y la formación de comisiones pro-universidad en numerosas localidades, constituyeron una combinación que permitió el resurgimiento de viejos proyectos y la gestación de nuevos, en el particular contexto de la apertura electoral que iniciaba el gobierno militar. Si bien este proceso cobró fuerza en lo relativo a la expansión cuantitativa del sistema universitario, apenas logró modificarlo cualitativamente (Mendonca, 2018).

La conflictividad política de los años 70 y su influencia en la creación de la UNMDP

Tomando en cuenta el proceso de expansión del sistema universitario argentino, que se produjo en el marco del Plan Taquini, la UNMDP fue la última casa de estudios en haber sido fundada,

siendo que su ley de creación fue promulgada en el año 1975. Si bien tradicionalmente se la ubica como un resultado directo de este proceso de descentralización de la matrícula, existen autores que van a proponer otra lectura acerca de la influencia real que tuvo el plan en la política de nacionalizar la UCSM y la UPMDP para conformar la UNMDP. Este proceso se debió fundamentalmente a las posibilidades legales de la institución pública y a las crecientes dificultades financieras de la Universidad Católica, en mayor medida que a las complejidades del proceso institucional y político (Bianculli y Arana, 2013).

En este sentido, el ahogo presupuestario de la UCSM, y los problemas tanto financieros como edilicios de la UPMDP, llevaron a que los actores involucrados en ambas universidades solicitaran al estado formar parte de una universidad nacional. A su vez, existía un reconocimiento generalizado acerca de la falta de articulación en instituciones locales que buscaban abordar las problemáticas del desarrollo local entre sí y con ambas universidades de Mar del Plata. Entre ellas se encontraban: la Estación y Museo Oceanográfico (1930), el Museo de Ciencias Naturales y Tradicionales Lorenzo Scaglia (1939/1948), la Escuela de Pesca y Caza Marítima (1955), el Instituto de Biología Marina (1960), la Base Aeroespacial Meteorológica de Mar Chiquita y la Facultad de Agronomía, con su sede en INTA Balcarce. Esta dispersión de esfuerzos, institucionales y financieros, hizo necesario pensar en algún tipo de comando unificado que permitiera dar respuestas integrales a las problemáticas regionales. La creación de la UNMDP sería vista como una posible solución a este desafío.

También jugó un rol importante la inestabilidad política que se vivió en el país a finales de los 60 y comienzos de los 70. Esto devino en enfrentamientos de creciente violencia entre los sectores más radicalizados de izquierda y de derecha. Uno de los puntos culmines de esta violencia fue el asesinato de la estudiante Silvia Filler, dentro de la Facultad de Arquitectura, en el año 1971, a menos de un grupo de personas pertenecientes a la Concentración Nacional Universitaria (CNU). La hostilidad a partir de allí continuó creciendo entre el sector identificado con la derecha del peronismo, entre los cuales se encontraban quienes formaban parte de la CNU, y la vertiente de izquierda más radicalizada, que comenzó a disputar poder cada vez con mayor intensidad dentro de las dos universidades.

Las tensiones políticas, presentes en todos los niveles de la vida social del país, sobre todo a partir de comienzos de los años 70, implicaron fuertes rupturas institucionales dentro de las universidades. Esto se vio particularmente en la UPMDP, que fue intervenida en varias

oportunidades. El asesinato de Ernesto Piantoni, dirigente sindical peronista y jefe de la CNU, ocurrido en 1975, y los asesinatos que se desataron en venganza, terminaron de conformar una situación de extrema violencia e inestabilidad en la ciudad. Este fenómeno impactó en todos los sectores, y especialmente en el ámbito universitario, que fue un territorio de disputa y objeto de “depuración” ideológica por parte de la derecha peronista que se había hecho con los resortes de la institucionalidad.

Como menciona Reynoso (2018): “En la UNMDP, en los meses anteriores al golpe militar se había intensificado la relación entre la cúpula directiva de la universidad, la CGT local, y la Juventud Sindical Peronista (JSP) a fin de extender la depuración ideológica. La participación orgánica de la central obrera en las decisiones respecto a diversos actores administrativos y académicos había alcanzado su plenitud a mediados de 1975”. Parte de los procesos de “depuración ideológica” significaron que varias carreras, que se consideraban muy politizadas o problemáticas, no se abrieran (Ciencias políticas, sociología, entre otras) y que buena parte de los docentes, identificados con posturas más radicalizadas, fueran expulsados. También quedó suspendida la autonomía universitaria, a manos de los distintos interventores, y se prohibió el accionar de los centros de estudiantes.

La UPMDP y la UCSM se terminaron nacionalizando el 14 de abril de 1975, por Decreto N° 967. Luego el 30 de septiembre de 1975 se aprobó la creación de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), con la promulgación de la Ley 21.139. La nueva institución comenzó a desarrollar sus actividades a partir de las siguientes ocho Facultades y Escuelas: Arquitectura y Urbanismo, Ciencias Agrarias, Ciencias Económicas, Ingeniería, Humanidades, Derecho, Turismo y la Escuela de Ciencias de la Salud.

El proyecto de nacionalización era tanto de la comunidad local, que demandaba cada vez en mayor medida servicios de formación profesional, como del gobierno nacional, a partir del mencionado Plan Taquini (Ladeuix y Reclusa, 2018). Sin dudas, se trató de un proceso de una gran complejidad, en el cual se cruzó toda una trama de intereses políticos e ideológicos tanto locales como nacionales. Además, era un viejo anhelo de la sociedad local, que fue promovido activamente por distintas fuerzas vivas de la ciudad, especialmente de cámaras empresariales como la UCIP. Por otro lado, y en el marco de las tensiones políticas expuestas anteriormente, el sector universitario se constituyó en uno de los principales campos de disputas ideológicas,

que fue objeto de políticas muy específicas para intervenir y “encauzar”, o directamente tratar de suprimir, los conflictos.

La nacionalización de las universidades permitió, en un contexto crecientemente represivo y de cercenamiento de la autonomía universitaria, que el Ministerio de Educación de la Nación pasara a controlar la nueva casa de estudios. De esta forma, desplegaba toda la batería de medidas represivas que se aplicaban en otros órdenes: prohibir la militancia política estudiantil y perseguir a los docentes más politizados.

La llegada de la dictadura militar implicó, para la recientemente creada universidad, que se restringiera fuertemente el ingreso de estudiantes, que se terminara la participación política y que se cerraran numerosas carreras, particularmente de ciencias sociales, como antropología, sociología, ciencias políticas y psicología. También se disolvieron el Departamento de Salud Mental y el Instituto de Educación Física y Deportes. En paralelo, a partir de 1978, se produjo la apertura de algunas carreras e institutos: se creó la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Biológicas, que incorporó a las carreras de Terapia Ocupacional, Enfermería, Química, Biología, Matemática, Cartografía y Química. En paralelo, se crearon el Instituto para la Investigación de los Problemas del Mar y el Departamento de Biología, que dependían de forma directa del Rectorado. En 1979, se fundaron el Instituto de Geología de Costas, y la carrera de Bibliotecología en la Facultad de Humanidades.

Desde la normalización democrática hasta la actualidad

La llegada de la democracia en el año 1983 implicó profundos cambios en la universidad. En ese año, se promulga el Decreto 154/83 que establece el Régimen Provisorio de Normalización de las Universidades Nacionales. Este establecía que las universidades que fueran creadas después de 1966 debían adoptar un estatuto que fuera apropiado para sus fines. Fue así como el 26 de febrero de 1984, la UNMDP aprobó la adopción del estatuto de la Universidad Nacional de La Plata, y su adaptación a partir de la introducción de algunas modificaciones.

Con la elección del Rector Normalizador en 1983, el contador Víctor Iriarte, se llevó adelante un proceso de normalización y democratización de la universidad, que fue de la mano de la

liberación de las restricciones de ingreso de estudiantes, y del retorno de una gran cantidad de docentes, que habían sido cesanteados durante la dictadura.

Luego de haberse concursado más del 70% de los cargos docentes, se decidió elegir a un nuevo Rector a partir del voto de la Asamblea Universitaria. Fue así que en 1986 asumió el cargo el arquitecto Javier Rojo y fue reelecto en 1988. En ese año, se lanzó una de las primeras iniciativas de la UNMDP relacionada con la vinculación con el entorno regional de la universidad: la creación de los Centros Regionales de Educación Abierta y Permanente (CREAP). Estos constituyeron una iniciativa de articulación entre la UNMDP y un grupo de municipios de la Provincia de Buenos Aires, relativamente cercanos a Mar del Plata, tales como Ayacucho, Coronel Pringles, General Madariaga, Carlos Casares, Trenque Lauquen y Pehuajó. Allí se buscó hacer llegar la oferta de la universidad, en modalidades no presenciales, a localidades de menos de 30 mil habitantes que no contaban con institutos de formación universitaria.

En el año 1986, se aprobó, por ordenanza del Consejo Superior Provisorio N.º 670, el primer Estatuto Universitario de la UNMDP. El mismo incorporó una serie de modificaciones al texto de la Universidad de La Plata que se había tomado como base. En este estatuto, apareció por primera vez una mención específica a la función de extensión. En el Título VIII, artículo 108, se postulaba que “la Universidad considera a la Extensión Universitaria como uno de los medios para realizar su función social. Para su cumplimiento se creará el departamento respectivo” (OCS N°670, Universidad Nacional de Mar del Plata, 1986).

Como puede observarse, la función de extensión comenzó a cobrar significación a partir de la normalización que se produjo en los años 80. En un principio, las actividades eran realizadas de una manera más vocacional por parte de los docentes e investigadores, que tenían una voluntad por acercar sus conocimientos al entorno y a vincularse con actores del medio. Recién en la década de los 90, en el marco de la nueva gestión comandada por el Ing. Jorge Petrillo, que asumió en 1992 y reeligió 4 años más tarde, se produjo una valorización de la función de extensión. A fines de fomentarla, se dotó al área de un presupuesto propio que permitió que se crearan becas y subsidios a proyectos de extensión. A la par, se crearon Centros de Extensión, que fueron el germen de lo que hoy se conoce como Centros de Extensión Universitaria.

El Estatuto Universitario, que se encuentra vigente en la actualidad, fue aprobado a partir de la Ordenanza de Consejo Superior N.º 2230/16, con fecha de 15 de diciembre de 2016. En este documento, ya se encuentra muy consolidada la visión que tiene la UNMDP en relación con su compromiso de vinculación con el entorno. En su título VI, el Estatuto hace directa mención al compromiso de la universidad por promover la extensión, poniendo el foco en actividades inter y transdisciplinarias en vinculación dinámica con distintos actores de la sociedad. También se menciona que la universidad proveerá becas y subsidios para desarrollar programas de extensión.

En el Título V, por otro lado, se aborda la vinculación y transferencia tecnológica, que tiene por objetivo fortalecer la relación entre el sector de ciencia y tecnología, con otros organismos públicos e instituciones privadas. Estas vinculaciones están pensadas para conectar y transferir conocimientos, que sean fruto de investigaciones llevadas adelante por la universidad, con el fin de que sean apropiadas por la sociedad.

UNMDP y sus políticas de vinculación con el entorno

En la actualidad, la mayor parte de las actividades de vinculación de la UNMDP con el entorno son llevadas adelante por la Secretaría de Extensión, que tiene un gran abanico de actividades, financiamientos y dispositivos institucionales. De acuerdo con una de las entrevistadas, la Secretaría tiene dos vías principales para implementar su mandato de extensión:

“Nosotros tenemos políticas institucionales de trabajo en territorio y después convocatorias a concurso de subsidios. Los centros de extensión universitarios, fue una iniciativa de la universidad, pero para la cual se realizó un concurso de organizaciones que quisieron ser sede y a partir de la definición de la sede se hace de forma permanente una construcción de problemáticas del territorio. A partir de eso se desarrollan las distintas estrategias, algunas suceden de forma más grandilocuente, es decir una jornada con todas las organizaciones, otras son más cotidianas, a partir de las demandas que existen se van llevando adelante las distintas estrategias, proyectos, etc. Después hay otra vía que son los proyectos de extensión, los que nosotros denominamos que va a convocatoria de subsidios, ahí cada proyecto define la problemática que va a trabajar, la comunidad, y ahí hay más heterogeneidad” (Entrevistada N° 1, comunicación personal, 15 de mayo de 2019).

Los Centros de Extensión Universitaria (CEU) son uno de los principales instrumentos que tiene la Secretaría para vincularse con el entorno. Los CEU son espacios físicos que están ubicados en distintos barrios de la ciudad, generalmente alejados del centro o de las sedes principales de la universidad (Barrios de Camet Norte, Puerto, Unión Sur, entre otros), y en algunas localidades de la Provincia de Buenos Aires, como Santa Clara, Miramar, Necochea, Balcarce y Villa Gesell.

Estos, desde su origen, fueron concebidos como espacios de “cogestión” entre la universidad y la comunidad. Su función era responder a problemáticas o necesidades presentes en cada barrio. Desde su creación, los CEU se plantearon como espacios institucionales que buscaban romper con la dispersión e intervenir en el entorno. En relación con esto, una entrevistada comentaba:

“Son dispositivos territoriales para acercar la universidad al territorio y viceversa. Surgen como un intento de puente, para articular diferentes proyectos que venían, y además de promover todo lo que tiene que ver con el ingreso y la permanencia universitaria. Y también poder trabajar con el conocimiento que la Universidad produce, poniendo el mismo a disposición de los territorios para mejorar los procesos de organización popular, así como los diagnósticos y las intervenciones” (Entrevista N° 1, comunicación personal, 15 de mayo de 2019).

En ese sentido, constituyen un intento por dar una respuesta situada en regiones que se encuentran alejadas tanto física como simbólicamente de los bienes y servicios que provee la universidad. Cada centro tiene una persona responsable a cargo financiada por la Secretaría de Extensión, que es quien articula las instancias de trabajo y cooperación con actores de la sociedad y uno o más becarios que colaboran con las tareas de articulación territorial.

Proyectos y programas de extensión

Otra vía importante para canalizar las iniciativas de extensión está constituida por las convocatorias abiertas a los distintos proyectos, que pueden presentar tanto docentes, como no docentes, graduados y alumnos de la universidad. Este instrumento fue creado en el año 2004, originalmente como un subsidio a proyectos de extensión. Esto se sostuvo de forma anual y fue consolidándose institucionalmente, al punto de que cuenta con su propia ordenanza de asignación presupuestaria. Anualmente, se financian alrededor de 80 proyectos de extensión,

con el objetivo de solventar emprendimientos que promuevan el mejoramiento de la calidad de vida de la población y la participación de actores sociales, cuya actividad se sitúe por fuera del ámbito natural de la universidad.

En la actualidad, estas convocatorias constan de tres modalidades: Proyectos Estímulo, para demandantes que no tenían trayectoria en extensión; Proyectos Nuevos, que abordan problemáticas novedosas; y Proyectos Consolidados, que ya han trabajado en alguna temática, fueron evaluados positivamente y requieren continuidad.

Una tercera vía, que ha constituido una importante innovación para la UNMDP, y que canaliza buena parte de los esfuerzos, se agrupa bajo la denominación de Programas de Extensión. De acuerdo con la información institucional, estos programas son espacios que fomentan la articulación de proyectos de extensión, investigación y actividades en general que comparten un objetivo. Están constituidos por cinco iniciativas: las Prácticas Sociocomunitarias, los Programas de Acción Comunitaria, el Programa de Vinculación Socioproductiva, el Programa de Extensión Cultural y el Programa de Promoción de la Salud y la Soberanía Alimentaria.

El Programa de Vinculación Socioproductiva (ViSoPro), importante en cuanto a alcance y cantidad de vínculos establecidos, fue creado en el año 2006, con la finalidad de desarrollar emprendimientos productivos, que trabajen de forma asociativa, tanto en formato cooperativo como de ferias autogestionadas. Entre las principales líneas del programa se encuentran: capacitación y sensibilización, la intervención territorial, la formación de formadores y la investigación-acción.

Dentro del ViSoPro, una de las iniciativas más convocantes, y que mayor estado público ha tomado, ha sido el acompañamiento a cooperativas de trabajadores de la ciudad. Específicamente, el programa ha llevado adelante vinculaciones destacadas con tres cooperativas muy reconocidas en la ciudad, dos de ellas recuperadas por sus trabajadores. Estas son la Cooperativa CURA (de recicladores urbanos), la Cooperativa Arhehpez (de procesamiento de productos pesqueros), y la Cooperativa Nuevo Amanecer (de productos lácteos).

El Programa de Extensión Cultural es el encargado de la articulación de los principales proyectos artísticos de la universidad: el coro universitario, el cuarteto de cuerdas, el coro de

niños y la compañía de teatro de la universidad. Por su parte, el Programa de Acción Comunitaria agrupa actividades de carácter interdisciplinario en temáticas sociales tales como Infancia y Adolescencia, Derechos Humanos, Género, y Salud Colectiva.

El Programa de Promoción de la Salud y la Soberanía Alimentaria fue creado en el año 2018. Tiene como objetivo realizar actividades de formación y transferencia con organizaciones sociales, y desarrollar talleres, debates, jornadas u otras acciones de vinculación que promuevan la salud y la soberanía alimentaria, desde una perspectiva de extensión crítica. Este programa tiene grandes vinculaciones con los Centros de Extensión Universitaria, que son su ámbito natural para desarrollar muchas de sus prácticas.

Programa de Innovación y Producción Popular

El Programa de Innovación y Producción Popular (PIPP), fue creado en el año 2020 dentro de la Subsecretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la UNMDP, con el objetivo de desarrollar estrategias de Vinculación e Innovación Tecnológica Abierta con distintos actores sociales con pertenencia en sectores populares. Estas estrategias partían de la base de codiseñar y coproducir Tecnologías Sustentables para la Inclusión Social. En este sentido, el PIPP estuvo orientado a realizar procesos de vinculación tecnológica con organizaciones populares en áreas estratégicas: agricultura familiar, salud y discapacidad, economía popular, educación y cultura y hábitat.

El programa tenía diversos propósitos: generar respuestas tecnológicas a problemáticas comunitarias; generar espacios de innovación asociativos; ofrecer asesorías técnicas especializadas en temáticas de tecnologías de inclusión social; promover acceso a fuentes de financiamiento para proyectos de innovación popular (Carrozza y Cavalli, 2022). El PIPP tuvo como característica distintiva la búsqueda por contar con actores universitarios y extrauniversitarios en los procesos de evaluación de cada proyecto; esto implicó, en cierta medida, repensar ciertas lógicas de funcionamiento de los procesos de vinculación tecnológica más tradicionales (Carrozza y Cavalli, 2022).

Esto fue particularmente significativo en el contexto de la Pandemia por Covid-19, donde la emergencia sanitaria, y posteriormente socioeconómica, multiplicó la necesidad de contar con espacios de asistencia y vinculación de la universidad con actores del mundo de la economía

social. Este programa se convirtió en uno de los principales vehículos para canalizar interacciones entre actores universitarios y actores adscritos a diversas organizaciones comunitarias.

Las Prácticas Sociocomunitarias

Dentro del universo de programas, instrumentos y dispositivos, uno de los más destacados son las Prácticas Sociocomunitarias (en adelante PSC), que en alguna medida se han convertido en un “emblema” de la UNMDP en relación con la vinculación con el entorno, dado su crecimiento, alcance y trascendencia institucional.

Un programa como el de las PSC, al momento de su creación, encontró escasos antecedentes en el país. Tan solo las universidades del Litoral y de Río Cuarto tenían experiencias similares, aunque en ninguno de los dos casos eran obligatorias, y funcionaban como seminarios optativos para distintas carreras. En el ámbito latinoamericano, tan solo se encontraron experiencias análogas en Costa Rica y México.

La innovación institucional en la UNMDP se produjo, en un primer momento, en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, a partir de una propuesta que surgió en el año 2003 en la Secretaría de Extensión. El programa se presentó con la condición de que fuera obligatorio para los alumnos de las distintas carreras de esta facultad. La propuesta finalmente se incorporó en los planes de estudios en el año 2005, y comenzó de manera más sistemática a partir del año 2008. De acuerdo con una funcionaria con un cargo de gestión en la Secretaría de Extensión de la universidad:

“La otra línea fuerte en materia de extensión es la inclusión curricular de la extensión, a lo que denominamos Prácticas Sociocomunitarias. Nuestra universidad tiene mucha trayectoria en ese camino, fue de las primeras universidades del país en establecer una normativa propia que obligara a la inclusión de estas prácticas en todas las carreras de grado. Esto ya venía con antecedentes en la Facultad de Ciencias Económicas, que las tenía incluidas en la currícula desde el año 2005 y en la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, que tenían prácticas de residencia en territorio con otras características con muchísima mayor antigüedad” (Entrevistada N° 1, comunicación personal, 15 de mayo de 2019).

Las PSC implican que los estudiantes de las distintas facultades realicen prácticas profesionales en organizaciones de la sociedad civil, o en distintas instituciones públicas, elaborando proyectos que contribuyan a la resolución de problemáticas socioambientales, productivas o tecnológicas. Para ello, se pone especial énfasis en abordar situaciones de vulnerabilidad y que provengan de una demanda concreta por parte de algún actor social. Casi todas las facultades han curricularizado estas prácticas, aunque cada Facultad, por una cuestión disciplinar, le ha dado una impronta diferente. Un funcionario de la Secretaría de Vinculación de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño planteaba lo siguiente:

“Primero, es el contacto con la realidad. Si sos estudiante de una universidad pública, tenés que entender lo que pasa afuera. Para el caso particular de arquitectura, cursás todas las materias, hacés el proyecto de una casa, un complejo habitacional, edificio en altura, un complejo de shopping, de cines. Vos hiciste todo eso, pero nunca tuviste un cliente enfrente y además que como estudiante de una universidad pública tenés que tener un compromiso con tu comunidad que es la que financió y pagó tus estudios. Entonces, para nosotros las prácticas sociocomunitarias hacen a la formación de un profesional, tiene que entender esas problemáticas” (Entrevistado N° 2, 16 de mayo de 2019).

Las Prácticas Sociocomunitarias, en ese contexto, se piensan como parte de un proceso de aprendizaje situado, a partir del cual el conocimiento no puede estar separado de su ámbito de desenvolvimiento social. De esta forma, se convierte en un saber en acción, o un conocimiento situado. De acuerdo con la responsable de las prácticas, Amancay Romero Trucco:

“Para nuestra universidad, es un orgullo formar parte de las primeras universidades de nuestro país y también de Latinoamérica en reglamentar este tipo de práctica. Si bien son prácticas académicas, y por supuesto profesionales, también están relacionadas a lo comunitario que tiene que ver con la posibilidad de entrar en diálogo con el territorio y con las organizaciones que forman parte de esos territorios” (MDP, 2022).

Las PSC están fundamentadas conceptualmente en la metodología del “aprendizaje-servicio”, que se define a partir de un enfoque basado en el servicio solidario que llevan adelante estudiantes con la finalidad de atender a las necesidades de la comunidad, e integrando aspectos centrales de los trayectos formativos de los alumnos. De acuerdo con un docente e investigador de la UNMDP de extensa trayectoria en formar alumnos en PSC, hay una vinculación muy

fuerte entre la metodología que sustenta a estas prácticas y la que subyace a la extensión crítica. En relación con esto, comentaba:

“Cuando hablamos de extensión crítica, hablamos de cuatro o cinco cosas centrales. La primera son prácticas integrales donde haya integración de la docencia y la extensión y vayan de la mano en la misma intervención. La segunda es la interdisciplina. La tercera es que las prácticas no están vinculadas a la filantropía, sino que son prácticas de enseñar y de aprender, de tensionar, de problematizar, de discutir, de entrar en diálogo con otros actores sociales. Es muy importante para nosotros el diálogo de saberes. Nosotros no vamos solamente con lo que sabemos, sino que vamos a aprender y a escuchar. En cuarto lugar, evitar las prácticas asistencialistas y, por último, evitar las prácticas espasmódicas, porque quitan credibilidad” (Entrevistado N° 3, comunicación personal, 25 de octubre de 2019).

Las PSC, a partir de su universalización en los espacios curriculares de cada facultad y cada carrera, se convirtieron en una vía central que tiene la universidad para incorporar en sus alumnos visiones consustanciadas con el desarrollo local o regional, el compromiso social y el diálogo con actores extraacadémicos. El hecho de que este tipo de programas haya logrado mantenerse en el tiempo, y que se haya institucionalizado, ha permitido que las PSC hayan podido instalarse como un espacio formativo muy sustantivo para las prácticas de extensión, y para la generación de una gran cantidad de marcos interactivos entre la universidad y actores del entorno.

Recapitulando

En las últimas dos décadas, la UNMDP ha ido profundizando fuertemente su compromiso de intervención en el entorno, tanto con su experticia en transferencia de conocimiento tecnológico, lo cual constituye una instancia más clásica de vinculación con el medio, como con darle más volumen a su función de extensión, a partir de desplegar un gran abanico de políticas institucionales, instrumentos y proyectos. Este compromiso con las actividades de “tercera misión” se ve reflejado a través de la importancia que la universidad les concede a tres líneas de trabajo centrales: la jerarquización de la extensión, la formación de equipos y recursos humanos y la vinculación comunitaria.

En cuanto a la jerarquización de la extensión, la misma se llevó adelante mediante el reconocimiento en los concursos de carrera docente y la afectación de horas para las designaciones superiores a la dedicación simple. A la par, se habilitó que docentes, graduados, personal universitario y alumnos, pudieran presentar actividades de extensión, lo cual amplió el universo de personas que realizaban estas tareas. En el año 2019, se llevaron a cabo alrededor de 80 proyectos de extensión, y 100 acciones de extensión; en total, involucraron a cerca de 500 organizaciones comunitarias. Por otro lado, la UNMDP priorizó a las PSCs, logrando que para el año 2019 se aprobaran más de 17 iniciativas, en las cuales participaron las facultades de Ingeniería, Exactas y Naturales, Económicas y Sociales, Ciencias de la Salud y Trabajo Social, Humanidades, Arquitectura Urbanismo y Diseño.

En lo que respecta a formación de equipos y recursos humanos en extensión, desde Rectorado se promueven activamente espacios para quienes forman parte de los equipos de extensión, tanto a miembros de programas y centros de extensión, como a extensionistas universitarios o actores generales de la sociedad civil. En el año 2019, se llevaron a cabo 30 cursos de capacitación, en los cuales participaron 1000 personas y 30 estudiantes obtuvieron becas.

La tercera línea de trabajo, la de vinculación comunitaria, es la que se materializa a partir de los Centros de Extensión, que son el “brazo” mediante el cual la universidad intenta llegar a zonas más alejadas, dentro de la región que la misma UNMDP considera como su entorno de actuación. Estos centros, como se mencionó anteriormente, buscan relevar demandas territoriales y coconstruir posibles soluciones con actores de la sociedad. En este caso, los centros de extensión congregaron a cerca de 10 mil participantes en 2019, con una llegada a 300 acciones comunitarias y 200 acciones directas en cada sede.

Como se ha visto a lo largo del capítulo, la UNMDP es una institución que ha tomado acciones decisivas para intervenir en el desarrollo económico y social de la región donde se inserta. Esta voluntad se expresa en una serie de políticas e instrumentos que han tenido una gran continuidad en las últimas décadas. Esto la ha convertido en un caso destacable, dentro del concierto universitario nacional, en cuanto al volumen que ha cobrado esta voluntad de intervenir en su medio de inserción social y espacial. La universidad ha ido complejizando y sofisticando sus instrumentos de intervención, aunque con suerte dispar, lo cual abre la posibilidad de repensar estas prácticas, sus alcances, sus resultados, y la medida en que esto

permite pensar, en términos más generales, las modalidades en las cuales las universidades se vinculan con sus entornos, en un contexto de tanta complejidad como el argentino.

Capítulo 3: La unidad demostrativa para la producción de biogás en Los Pinos

Introducción

En este capítulo, se estudia a un grupo de investigación de la Universidad Nacional de Mar del Plata, involucrado en la construcción de una Unidad Demostrativa para la producción de biogás, en un pueblo rural de la Provincia de Buenos Aires llamado Los Pinos. El caso analizado consiste en un proyecto de investigación y extensión, llevado a cabo por un grupo de investigación (en adelante GI) de la Facultad de Ciencias Agrarias. El mismo está radicado en el Laboratorio de Biomasa y Bioenergía (UIB), el cual forma parte del Instituto de Innovación para la Producción Agropecuaria y el Desarrollo Sostenible (IPADS), dependiente del INTA y del CONICET.

El análisis se realiza desde un enfoque situacional, con el propósito de indagar las formas en las cuales la acción social es territorializada. El objetivo es comprender el modo en el cual los saberes, conocimientos, habilidades y percepciones del espacio, se articulan y modifican en el marco de situaciones interactivas, donde confluyen las trayectorias de vecinos y académicos. En este sentido, la pregunta central que se busca responder con este capítulo es: ¿en qué medida la situación de interacción, generada a partir de una práctica de extensión territorializada de la universidad, afectó las dinámicas espaciales del territorio donde se implantó, y de qué forma?

Los distintos abordajes teórico-conceptuales presentados en los capítulos precedentes muestran que la capacidad de generar conocimientos, movilizarlos y ponerlos en uso, está estrechamente ligada a la espacialidad. En el caso que presentamos a continuación mostraremos de qué forma se despliegan estos procesos, a partir de la irrupción de un proyecto universitario en una pequeña comunidad rural de la Provincia de Buenos Aires.

Los Pinos: características y principales problemáticas socioespaciales

El pueblo de Los Pinos surgió en el año 1900 al iniciarse la actividad productiva en una cantera aledaña que producía minerales para la construcción. Desde ese momento, se comenzaron a lotear terrenos para la radicación de viviendas. En el año 1907, se inauguró una estación de ferrocarril, que se utilizaba para el transporte de cereales, ganado y pasajeros, lo cual ayudó a dinamizar la economía y demografía del pueblo. Para mediados del siglo XX, Los Pinos contaba con cerca de 5000 habitantes. A partir del cierre de la cantera, que era la principal fuente de trabajo de la región, y del levantamiento del ferrocarril en los años 1990, comenzó un proceso de despoblamiento significativo.

En la actualidad, esta localidad cuenta con una población de 337 personas (INDEC, 2010). Está constituida por un conjunto de casas, intercaladas con algunos terrenos dentro del mismo ejido urbano del pueblo, en los cuales algunos vecinos realizan actividades de subsistencia como la cría de animales, específicamente cerdos y aves. En sus proximidades, cuenta con una producción agroindustrial importante, sobre todo de ganadería porcina y avícola, que constituye una de las principales fuentes de empleo de la región.

Estos establecimientos agroindustriales, en su mayoría propiedad de residentes de la ciudad de Balcarce, generan un conjunto de problemáticas sanitario-ambientales bastante importantes, vinculadas con la disposición final de los residuos de sus procesos industriales; con la generación de malos olores, producto de esta disposición ineficiente; y con una gran proliferación de insectos, particularmente moscas, por toda la localidad. Estos residuos, sin embargo, habilitan una muy alta disponibilidad de biomasa, lo cual a su vez constituye un insumo potencial para la generación de bioenergía, que hasta el momento había sido desaprovechada. Esto resulta paradójico, dado que uno de los principales problemas de servicios públicos del pueblo es el acceso al gas natural.

Los Pinos no cuenta con tendido de red de gas domiciliaria, lo cual constituye un anhelo de los vecinos que nunca fue atendido por las autoridades locales ni provinciales.

El problema que tenemos es el problema del gas, que no tenemos. Tenemos tubos, garrafas y leña. Yo tengo el tubo para el termotanque y la cocina y después tengo la salamandra con leña, pero es todo un sacrificio, porque si no tenemos alguien en Los Pinos que nos venda leña, tenemos que ir a Balcarce a comprarla o tenés que llamar a alguien que te la traiga. El flete cuesta muchísimo así que si pudiéramos empezar con el biogás por lo menos para calefacción sería lo ideal (Entrevista N.º 4, comunicación personal, 15 de enero de 2019).

Retomando el concepto de Soldano (2011) de territorios en insularización, entendido como los espacios que tienen problemas extendidos de empleo, de acceso a bienes y servicios básicos, y a infraestructura de transporte asequible, podemos pensar en qué medida situaciones como las relatadas impactan en las subjetividades de los habitantes de Los Pinos. Particularmente, hacemos foco en cuáles son los espacios de socialización por los que circulan sus habitantes, y de qué forma los procesos de segregación espacial los atraviesan y condicionan en sus prácticas cotidianas.

Es importante destacar que recién a partir del año 2016, los vecinos de Los Pinos pudieron elegir a un delegado municipal que funcionase como enlace político con el Municipio de Balcarce. Fuera de este vínculo institucional, no existían en Los Pinos ningún tipo de instituciones de base, o asociaciones que agruparan a los vecinos y que permitieran encauzar las acciones colectivas para dar respuesta a las problemáticas sociales, económicas y espaciales.

Retomemos a Werlen (2017), cuando afirma que “las relaciones sociales del espacio están en condiciones generadas socio históricamente (...) en las formas y opciones para hacer frente a la espacialidad del mundo cotidiano con respecto a todas las formas de práctica social, interacción social y comunicación”. Es posible observar que en Los Pinos estas condiciones generadas actúan como un fuerte factor limitante para el desenvolvimiento de las acciones socioespaciales que permitan remediar las principales problemáticas detectadas. Es en este sentido que Los Pinos se constituye, en un contexto espacial adverso, para poder afrontar los procesos de reproducción de la vida cotidiana, particularmente por lo escaso de los capitales sociales, culturales y espaciales, con los que cuentan sus habitantes (Soldano, 2011).

El proceso de despoblamiento, sumado a la desarticulación de la economía local, conllevó también a una ruptura en las capacidades de actuar colectivamente. Si lo pensamos bajo el concepto de insularización (Soldano, 2011), podemos entender de qué forma el contexto

espacial del pueblo contribuye a entorpecer los procesos de aprendizaje colectivos. Esto ocurrió a partir de todo lo que se desencadenó luego de que el tren dejara de funcionar y el consiguiente aislamiento que esto generó. Asimismo, provocó en los habitantes del pueblo una serie de complicaciones para trasladarse de forma económica, lo cual devino en una desconexión creciente con el resto de las localidades de la zona (principalmente Balcarce, la sede del gobierno municipal), así como una profundización del aislamiento también en términos más simbólicos, al sufrir de primera mano la desidia del estado para la provisión de servicios básicos.

Quizás, y a modo de hipótesis, podría analizarse en qué grado los problemas que termina abordando la intervención desde la universidad y el INTA son en verdad los planteados inicialmente. Es decir: ¿los problemas principales son la disposición de residuos y la provisión del servicio del gas?, ¿o el conflicto, en realidad, pasa por cómo la universidad se compromete a intervenir en un territorio altamente vulnerable, en el cual debe dar cuenta de la desidia deliberada provocada por los distintos niveles del estado, que genera un proceso de insularización creciente? ¿En qué medida la universidad abandona su rol más usual, que es el de proveer conocimiento experto para resolver problemas específicos y acotados espacialmente, para convertirse en una institución estatal que tiene funciones mucho más extendidas?

Origen del proyecto para instalar una planta de biogás

El GI tiene una larga trayectoria en trabajar temas relacionados con la bioenergía. En el marco de una búsqueda de financiamiento para sus investigaciones, conocieron una convocatoria de una institución alemana, el Instituto Wuppertal, que a través de uno de sus programas subsidiaba proyectos para fomentar la aplicación de energías renovables en países de bajo desarrollo relativo. Este último se denominaba «*Sustainable Energy Project Support (SEPS). Knowledge Exchanges*» (Visions of Sustainability, s/f) y entre algunos de sus criterios principales de selección se encontraban:

- Tener por objetivo principal la creación de conocimiento, la conservación, la difusión o la creación de capacidades.

- Involucrar activamente al menos una organización con compromiso probado en el campo del acceso a la energía sustentable.
- Definir claramente las necesidades de conocimiento y de las brechas abordadas.
- Poseer relevancia en relación con el objetivo general de acceso universal a la energía y al desarrollo sustentable.

En términos generales, los financiamientos del Instituto Wuppertal tienen como público destinatario a poblaciones con un grado sustancial de vulnerabilidad socioeconómica (medida en términos de un ingreso per cápita, por debajo del promedio nacional), y con alguna problemática ambiental significativa a remediar, que requiera de algún tipo de intervención experta por parte de una institución científico-tecnológica nacional. Un aspecto para tener en cuenta es que para garantizar el éxito de largo plazo se debe aplicar mantenimiento apropiado y planes financieros y de gestión. Estos planes deben estar enfocados en la construcción de capacidades y en alcanzar las necesidades específicas locales. El objetivo del financiamiento está relacionado con:

Al fin del camino, saber si es viable la diseminación de biogás en América latina. Si no es viable por qué, por qué fracasan, cómo hacer para que esos proyectos no fracasen. Tienen seria voluntad de que las cosas funcionen, pero lo que están haciendo es evaluar si funcionan, ellos persiguen su propio objetivo (Entrevista N° 5, comunicación personal, 9 de enero de 2019).

La presentación del proyecto al Instituto Wuppertal surgió a instancias de la iniciativa personal de una investigadora INTA-CONICET, quien se enteró de la convocatoria y decidió presentar un proyecto que implicaba un desarrollo tecnológico-social en una comunidad vulnerable. Es interesante comprender por qué una investigadora, que venía trabajando con éxito en líneas de investigación académicas puras, resuelve incorporar un proyecto relacionado casi exclusivamente con la extensión.

A partir de una serie de eventos de su trayectoria personal y profesional, la directora del GI se sintió interpelada por la situación al encontrarse en una posición única. Debía reunir el conocimiento experto, y articular los medios necesarios para llevar adelante un proyecto de intervención que, a su vez, combinara sus áreas de experticia profesional con su voluntad de generar algún tipo de cambio social. De acuerdo con sus palabras:

Trabajaba en el Departamento de Física de la UBA, haciendo marcación de moléculas. Estuve como 6 o 7 años trabajando en calidad de aceite de girasol dependiendo del CONICET. Se hace un llamado del INTA porque querían impulsar el tema de la energía y se abre en el INTA Balcarce un puesto específico de dirección de proyectos en biogás y energía. Gané ese concurso y ahí tengo que empezar a pensar que líneas potables existen en la zona en producción de energía. Me mudé a Balcarce, empecé a codearme con agrónomos y todo lo que hay en INTA. Lo que más me llamó la atención de lo que escuché, lo más movilizador, fue lo que dijo el que era el Director de Agronomía de INTA: “Nuestro problema es que no existe más la población rural. Va a desaparecer”. Me quedó dando vueltas en la cabeza. Y cuando empecé a trabajar en bioenergía pensé: “tengo que hacer que la gente se vuelva a su pueblo rural” (...) Si vos me preguntás si es lo que yo soñaba con hacer de mi vida, nunca se me ocurrió que iba a estar acá pero también lo que me pasó fue que conocí el problema, veía que había una posible solución, un subsidio que respondiera a financiar una tecnología que pudiera aportar (...) Entonces conocés el problema, conocés la solución, conocés la oportunidad... no pude no hacerlo (Entrevista N° 5, comunicación personal, 9 de enero de 2019).

El GI ganó el subsidio de la línea SEPS Projects del Instituto Wuppertal para la construcción de una planta de biogás en el año 2015, con un proyecto denominado “*Biogas Demonstration Unit for the sustainable rural energy development in humid Pampas of Argentina*”. Este subsidio fue conseguido sin haber determinado previamente la localización efectiva del proyecto. Es decir, a partir de haber conseguido los fondos, se comenzó a pensar en qué comunidad rural de las inmediaciones de Balcarce (por cercanía con la ciudad de residencia y de desempeño profesional de la directora del GI) dicho proyecto podría ser desarrollado.

En vista de esta necesidad de conseguir un lugar adecuado para ejecutar el financiamiento conseguido, fue que se realizó una articulación institucional con autoridades políticas del Municipio de Balcarce, para decidir cuál iba a ser la localización óptima del proyecto a nivel municipal. En función de la sugerencia de funcionarios del Municipio, se determinó que debería llevarse adelante en la localidad de Los Pinos. La directora del GI manifestaba al respecto: “El intendente me dijo: el lugar es Los Pinos, la gente se siente abandonada, tenemos unos problemas de contaminación, el ingreso per cápita es mucho menor, andá a Los Pinos, yo te banco en Los Pinos” (Entrevista N° 5, comunicación personal, 9 de enero de 2019).

Aquí vemos que, tanto en la praxis de los decisores político, como de los miembros del sistema científico-tecnológico, se puede identificar plenamente una noción de territorio como sustrato donde se desarrollan las prácticas. No hay una reflexión previa o un acercamiento a los habitantes del pueblo para conocer sus impresiones o pareceres ante una intervención estatal. Lo que se observa es una linealidad en el planteo de la intervención que parece anular la capacidad de agencia de los potenciales beneficiarios, que obtura el reconocimiento de las capacidades locales y que solo parece valorar el conocimiento y la experticia surgidas desde la política o del sector académico. Esto se ve abonado por un conjunto de nociones que se construyen, tanto desde la política como de la academia, acerca del impacto de la vulnerabilidad que posee un territorio como factor limitante para el desenvolvimiento de acciones espaciales.

Estas nociones son tomadas por el GI. La idea de vulnerabilidad se encuentra presente en los sentidos que van a construir los investigadores sobre los actores y el territorio con los cuales se vinculan. La caracterización del espacio surge así a partir de saberes, trayectorias, habilidades y competencias, que fueron generados por tránsitos en espacios heterogéneos (burocráticos, académicos, profesionales), mas no así en un proceso de intercambio con esos mismos actores barriales.

La sensación de abandono y aislamiento, que relataba el intendente del Partido de Balcarce, se puede corroborar a la luz de lo que comenta una de las vecinas del pueblo: previo al proyecto de biogás, hubo algunas experiencias aisladas de vinculación de los vecinos de Los Pinos con instituciones como el INTA, que intervino a través del Programa ProHuerta. Sin embargo, su involucramiento y compromiso fue algo intermitente:

Había reuniones de entrega de semillas del INTA por el ProHuerta, era otro grupo, una señora que se ocupaba de eso, se hacían cursos de poda que estaban buenos, eso falta ahora (...) hacían reuniones del INTA, entregaban pollitos, semillas, hacían el curso de poda de árboles y frutales, la gente asistía. Hacían vacunación de ponedoras, te daban las pollitas y vos las tenías que vacunar y controlar, hacían visitas a las huertas, varias cosas. Pero la encargada de eso, van pasando los años y ya no se podía ocupar. Después de ella no sé si nombraron a alguien, pero quedamos en esa parte un poco aislados (Entrevista N° 4, comunicación personal, 15 de enero de 2019).

El pueblo de Los Pinos cuenta con problemáticas de larga data relacionadas con la provisión de algunos servicios básicos, específicamente con la disposición final de sus residuos y con la falta de servicio de gas natural. Ambas dificultades son comunes a buena parte de los pueblos rurales del país que, por una cuestión de escala y escasez de recursos, no cuentan con soluciones sustentables, tanto ambiental como financieramente, en la provisión de ambos servicios. A esto se suma la gestión deficiente de las administraciones públicas en sus distintos niveles, que ante territorios de estas características no promueven políticas activas de integración socioespacial y, finalmente, tanto por acción como por omisión, los dejan librados a su propia suerte. En el cruce de esas situaciones de base y contingentes, aparece entonces configurada la noción de territorio vulnerable: un espacio social en el cual hay muy limitados recursos económicos, cognitivos y simbólicos, para abordar los problemas y escasas capacidades para construir soluciones.

Primeros pasos de la Unidad Demostrativa

En el marco del contexto descrito, el GI encontró factible la operación de una planta de biogás en la localidad de Los Pinos, porque le permitía atender en simultáneo dos problemáticas centrales que se encontraban concatenadas: por un lado, la remediación de parte de la problemática ambiental, relacionada con la disposición de los residuos de la industria avícola y de ganadería porcina, y su consiguiente generación de malos olores y proliferación de insectos; y por el otro, la generación de energía renovable, con la posibilidad de otorgarle a parte de los vecinos del pueblo la provisión de gas natural, a partir del tendido de una red de gas domiciliario de baja escala.

Una de las condiciones puestas por parte del Instituto Wuppertal, para la gestión y operación de la planta que estaban financiando, consistía en que era fundamental que el proyecto construyera o fortaleciera sustantivamente las capacidades locales, especialmente en los aspectos relacionados con la gestión y operación de la planta de biogás, una vez que la misma fuera puesta en funcionamiento. Esto implicó que el GI buscara determinar, junto con los vecinos, cuál sería la modalidad de gestión adecuada para lograr que el desarrollo del proyecto constituyera un marco propicio para que estos pudieran mejorar sus capacidades de aprendizaje, construcción colectiva de soluciones y autogestión de problemáticas. Fue así como se promovió

la conformación de una cooperativa dentro del pueblo, que tuviera por objeto operar y gestionar integralmente la planta de biogás al momento de que estuviera finalizada.

En una localidad como Los Pinos, que no contaba con un historial muy dilatado de organización comunitaria, particularmente luego de la debacle económica y demográfica que se produjo a partir de los años 90, la idea de crear una cooperativa parecía atractiva desde el GI, porque sería una forma de “institucionalizar” los vínculos entre los vecinos. La cooperativa se convertiría en el vehículo ideal para desplegar la situación de interacción que se proponía desde el GI; particularmente, entendiendo que las relaciones de copresencia afectaban la socialización, las situaciones de aprendizaje, y generaban nuevas espacialidades (Werlen, 2017:48). A su vez, podría constituirse en un interlocutor de legitimidad que enrole a la mayor cantidad de vecinos posibles, para poder dialogar con la misma universidad y con otros actores estatales o privados involucrados en el proyecto.

Sin embargo, desde su misma creación se generaron ciertas dudas en los vecinos, tal como puede observarse en la siguiente cita:

La gente que la forma es grande, no es una comunidad pujante. No es casualidad que a Los Pinos le pase lo que le pasa, es gente temerosa. Hay 3 o 4 que se han encargado de la cooperativa, chicas más jóvenes, con otra cabeza... pero arrastran un camión de 24 personas, es mucha responsabilidad” (Entrevista N° 5, comunicación personal, 9 de enero de 2019).

En la situación de interacción, que se da entre el GI y los habitantes del pueblo, se produce, una asimetría de recursos cognitivos, económicos y simbólicos, bastante significativa, que se pone en juego ante cada encuentro y ante cada decisión que debe tomarse. En ese marco, el devenir de la acción espacial en Los Pinos no se puede pensar sin el cruce de las trayectorias de los miembros del GI, de los funcionarios municipales, y de los vecinos que demandaban del estado, en sus distintas instancias, un conjunto de soluciones sociales, económicas y tecnológicas.

Es así como el proyecto se ve atravesado por lo complejo que resulta articular lógicas y trayectorias tan diversas. Los actores involucrados tienen intereses diferenciados que se ven cruzados por factores institucionales, sociales, tecnológicos, académicos y cognitivos. A esto se le suma la complejidad de las relaciones intervecinales, que, con sus propias dinámicas de

conflicto, permiten distinguir la emergencia de dos grupos principales, de acuerdo con su grado de involucramiento socioespacial para la revolución de problemáticas.

¿Por qué tenemos que apropiarnos de un biodigestor?

A partir de que el financiamiento fue efectivizado por parte del Instituto Wuppertal, se comenzaron a realizar una serie de reuniones en Los Pinos para presentar el proyecto y contar con la aprobación de la comunidad. A la par de esto, se propuso públicamente la conformación de la cooperativa, en la cual 20 vecinos se convirtieron oficialmente en sus socios fundadores. Es importante destacar que la dimensión productiva de la unidad propuesta de biogás solo alcanzaría para brindarle gas a 20 unidades habitacionales, las cuales constituían cerca del 25% de las casas habitadas del pueblo. Esto llevó a que se involucraran en la conformación y gestión de la cooperativa solo los vecinos que efectivamente podrían verse beneficiados por el tendido eventual de la red de gas.

A fin de poder impulsar el desarrollo de la cooperativa, formada ad-hoc para gestionar la futura planta de biogás, se llegó a un acuerdo con un grupo de extensión de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UNMDP, especializado en cooperativismo y economía social. El propósito de esta iniciativa fue llevar a Los Pinos distintos grupos de extensionistas que trabajaban en proyectos, especializados en economía social y cooperativismo, para que se dedicaran a formar y acompañar en los primeros pasos de la cooperativa. Al respecto de esto, una investigadora del GI comentaba:

Empezamos con talleres, porque cuando decidimos hacer la cooperativa estábamos un poco asustados, porque no teníamos idea de lo que era. Porque acá en Los Pinos no había, así que dijeron bueno, vamos a traer alguien que los ayude, que les enseñe. Tuvimos que hacer un curso de cooperativa y nos dieron un certificado que teníamos que presentar en el INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) para que nos inscriban. El que no tenía ese certificado no podía entrar en la cooperativa (Entrevista N° 6, comunicación personal, 15 de enero de 2019).

A partir de una serie de talleres y encuentros, entre el GI y los vecinos, se decidió que la cooperativa incluyera también actividades no vinculadas estrictamente a la operación futura de la planta de biogás. Estas incluían acciones tales como: educación ambiental y recaudación de

fondos para que la cooperativa se autofinancie, hasta que finalmente la planta se encuentre en operación. Este pasaje de ser una cooperativa exclusivamente dedicada a la gestión y mantenimiento de la planta de biogás, a comenzar a tener un espíritu más “fomentista”, no estuvo exento de controversias, tanto en el GI como entre los mismos vecinos:

Yo la verdad que no me atrevo, creo que ya le hemos pedido tanto... Vivían tranquilos cada uno en su casa y entramos nosotros con esta intervención, movimos el avispero de una manera... encima ahora decirles que generen plata, yo no quiero pedirle plata a la gente de Los Pinos... Si la generan que la inviertan en parquear la plaza... no sé. Siento como cierta culpa, será porque alguien me acercó el comentario de que alguien de los pinos dijo: "¿nosotros pedimos un biodigestor?, ¿por qué tenemos que apropiarnos de un biodigestor?"... una pregunta fuerte (Entrevista N°5, comunicación personal, 9 de enero de 2019).

Esta última pregunta de la entrevistada revela, en cierto grado, que la dinámica de organización social, que se puso en marcha a partir del proyecto, estuvo muy dirigida desde el GI. Esto se produjo a partir de una serie de estrategias de lo que Callon (1995) denomina como "procesos de transducción", a partir de los cuales "se negocia la identidad de los actores, sus posibilidades de acción y sus márgenes de maniobra, se interpreta lo que son y lo que quieren los actores, las entidades a enrolar, y el resto de las entidades con las cuales están asociados, intentando interrumpir todas las potenciales asociaciones con las cuales compite para edificar un sistema de alianzas".

A través de la traducción, se busca "convertirse en un punto de paso obligado, conseguir imponer a los otros tu propia perspectiva o convencerlos de que sus problemas sólo se podrían resolver si pasan a través de ti" (Callon, 1995). Para ello, se articularon una serie de estrategias e intervenciones, como por ejemplo propiciar el involucramiento de otros proyectos de extensión de la UNMDP, particularmente de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, con el objetivo de colaborar en la gestión de la cooperativa y en la formación de sus integrantes, en temáticas relacionadas con el cooperativismo.

Desde el GI, entonces, se vio la necesidad de realizar un proceso de mediación, de creación de lazos para convencer que la manera en la que se proponían hacer las cosas era la adecuada. Estas acciones tenían por objetivo garantizar que el proyecto pudiera ser llevado a cabo con un

grado de legitimidad alto por parte de los futuros usuarios de la intervención. Para esto, es importante destacar que la adopción o apropiación del conocimiento científico depende directamente de la credibilidad y la confianza que generen los científicos o investigadores. El grado de esta confianza no es un valor dado, sino que es contingente a las relaciones socioespaciales presentes en el territorio (Wynne, 1992).

De esta forma, vemos hasta qué punto la creación de la cooperativa puede analizarse a la luz de lo que Werlen (1993) denomina "espacialización de la acción": los esquemas interpretativos de quienes participan de las situaciones de interacción se nutren de elementos normativos, materiales, pero también simbólicos. Esto les permite, a su vez, adoptar nuevas disposiciones y encontrar nuevos sentidos para la acción. Como señala una de las cooperativistas: "Tenemos mucho para trabajar en Los Pinos, la idea de la cooperativa no es solamente lo del biogás, hay que poner en orden muchas cosas, hay que ver que la gente se interese en arreglar problemas" (Entrevista N°6, comunicación personal, 15 de enero de 2019). Quien ocupa la presidencia de la cooperativa, representa a este segundo grupo de vecinos emprendedores: "En Los Pinos siempre participé de todo: escuela, jardín, unidad sanitaria, en la capilla. Pero esto te abre la cabeza para otras cosas. Estar en una cooperativa nunca se había hecho acá en Los Pinos, es distinto" (Entrevista N°4, comunicación personal, 16 de enero de 2019).

La creación de una cooperativa, en un espacio de las características de Los Pinos, implicó la reorganización de buena parte de las relaciones sociales del pueblo y de las modalidades que asumían las acciones espaciales. A su vez, modificó las formas en las cuales se tomaban decisiones en algunos ámbitos, generó un espacio nuevo de relación interpersonal entre los cooperativistas y, fundamentalmente, reestructuró la manera en la cual se abordaban los problemas y se construían de forma colectiva sus posibles soluciones.

Posicionamientos vecinales y nuevas disposiciones espaciales

En el marco de una sociedad como la de Los Pinos, que no contaba con instituciones donde se produjera una interacción intervecinal, la conformación de la cooperativa supuso la emergencia de dos grupos de vecinos, de acuerdo con sus disposiciones para la acción: los "tradicionales o conservadores", con mayor aversión al cambio y muy escasa participación en la vida social del pueblo; y los "reformistas o emprendedores", con voluntad de impulsar acciones

socioespaciales, tales como mejorar el ordenamiento territorial, promover la gestión y educación ambiental, abordar la problemática de la disposición de los residuos y fomentar el desarrollo económico.

La situación de interacción, que se desencadenó a partir de la intervención del GI y de la posterior conformación de la cooperativa, impactó de manera significativa en los posicionamientos espaciales de los actores territoriales. El grupo reformista buscó dinamizar intervenciones a partir de objetivos como el de “desarrollo sustentable”, mientras que el grupo más “conservador” se aferró a prácticas productivas “tradicionales”, que suelen ser contaminantes y poco eficientes, que se sostienen en sus experiencias pasadas y en el cúmulo de saberes y habilidades generados a lo largo del tiempo. Este conflicto, que se expresa a priori en una consideración sobre cuáles son los modos de vida válidos y constructivos para la comunidad, se puede observar en el siguiente fragmento de una entrevista realizada a una vecina:

Ahora estamos armando una carta desde la cooperativa para la municipalidad, que ya no podemos vivir así, porque cada vez hay más (producción de animales para el autoconsumo). Como no hay reglamento ni orden acá unos vecinos trajeron 60 ovejas por allá, 15 cerdos por allá y esto va creciendo... pronto vamos a ser más animales que personas, no puede ser. Acá enfrente hay un criadero de cerdos y cuando el viento sopla para este lado, viene todo el olor a nuestra vereda. Pedimos que lo saquen, pero vas a hablar con el dueño y te dice que la pensión no le alcanza y se tiene que dedicar a eso. Los que no tengan nada que ver con el criadero van a firmar seguro, el resto, por miedo, o porque tienen amigos que tienen animales, no lo van a firmar. Así pasa con todo si no salimos a hablar y poner un poco de orden (Entrevista N° 4, Comunicación personal, 16 de enero de 2019).

Uno de los aspectos que parece destacarse es cómo, a partir de la vinculación de parte de los vecinos con el GI, surgen nuevas disposiciones espaciales. Particularmente, algunos cooperativistas comienzan a intentar articular su trabajo con problemáticas que exceden a la planta de biogás, cómo la idea de conciliar los emprendimientos familiares con ciertas lógicas de ordenamiento urbano.

Por otro lado, la visión desde el GI solo pareciera hacer foco en lo que sucede dentro de la cooperativa, a la par de que se soslaya el conflicto de base que atraviesa a los vecinos que están dentro y fuera de la cooperativa.

Cuando llegamos había conflictos transversales, estaba la pelea entre nuevos y viejos vecinos, dentro de la cooperativa eso no existe más. Estaba la pelea entre los pro y los contra animales, mucha gente cría animales en el fondo de la casa. Hay gente que quiere terminar con eso y otros que dicen, toda la vida Los Pinos fue un pueblo donde la gente tenía un gallinero, el chiquero en el patio. Tenés pro y contra en todo, pero en la cooperativa todo eso se zanjó, el nuevo y el viejo vecino son amigos, porque venimos laburando y encontraron que en algunas cosas están de acuerdo y en otras en desacuerdo, pero reman todos para el mismo lado (Entrevista n°5, comunicación personal, 9 de enero de 2019).

Por su parte, el grupo “tradicional” o “conservador” sostiene sus posturas en experiencias pasadas de vinculación fallida con instituciones como el INTA y la UNMDP. Esto generó desconfianza hacia las iniciativas que provenían del mundo académico, y fundamentaba un posicionamiento crítico acerca de la pertinencia de avanzar con una iniciativa que les resultaba ajena y exógena a Los Pinos. En palabras de una vecina y cooperativista:

En Los Pinos, están los nativos pinenses y los forasteros. Te dicen que vos no sos de Los Pinos. Generalmente, los forasteros somos los que movilizamos y no tenemos reparo en decir las cosas como son. Tratamos de hacerles ver que pueden denunciar, que el que está en falta es el que tiene animales de granja en su jardín y contamina con su suciedad perjudicando a todos. Los animamos a que hablen con sus parientes que lo hacen, y les adviertan que los pueden denunciar. Pero se sienten culpables, es el mundo del revés (Entrevista N° 7, comunicación personal, 16 de enero de 2019).

Es posible interpretar, de modo hipotético, que en el caso de los vecinos con posturas “tradicionales” o “conservadoras”, las situaciones de copresencia propuestas por el GI, en el marco de la cooperativa, no logran interpelar su voluntad de acción. Ellos entienden que la propuesta de anular el distanciamiento físico no elimina el enorme distanciamiento social, cognitivo y espacial que existe entre los actores académicos y los vecinos del pueblo (Lussault, 2015).

Retomando el planteo de Lussault (2015), acerca de que la ideología territorial genera modos de consolidar legitimidad que permiten regular el ordenamiento espacial, se puede observar cómo la cooperativa, pensada como dispositivo institucional, se constituyó en un espacio que otorgó a sus integrantes, los vecinos “reformistas” o “empreendedores”, mayores grados de legitimidad para la toma de decisiones. A su vez, les brindó un estatus diferencial para con sus pares/vecinos, que los comprometió a involucrarse, de una manera más profunda, en la resolución de las problemáticas del pueblo.

La adquisición de nuevas posiciones, a partir de la vinculación con el GI, convirtió a los vecinos en interlocutores tanto de las instituciones del sistema científico, que promovieron el proyecto del biogás, como del Municipio de Balcarce, ante quien desplegaron una serie de iniciativas para motorizar la resolución de problemáticas locales. El proceso se podría analizar de acuerdo con lo que Lussault (2015) denomina como “capital espacial”, entendiéndolo como un conjunto interiorizado de modos de relación, tanto intelectuales como prácticos, de un individuo con el espacio o los recursos.

Es importante destacar que los conocimientos nuevos, que movilizan capacidades para la acción (Stehr, 1994), se adquieren sobre la base de las experiencias previas de los actores locales (Schutz, 2003; Bourdieu, 2011), pero también en el marco de relaciones espaciales de copresencia con el GI de la universidad (Goffman 2001; Giddens 2006). Las nuevas posiciones que asumen este grupo de vecinos pueden pensarse como parte de un proceso significativo de construcción de capital social, y que funciona como un paso necesario para congregarse una mayor legitimidad en el entorno local.

Entonces, el capital espacial pasa a formar parte del capital social (Bourdieu, 2011) de cada uno y es instituyente de la práctica espacial, al tiempo que es instituido por ella. Esto se puede observar en el caso de la creación de la cooperativa, que modifica el rango de las prácticas espaciales que puede llevar adelante la comunidad, al tiempo que genera un proceso de empoderamiento ciudadano y circunscribe las acciones posibles a un determinado espectro de intervenciones. Comenta uno de los miembros de la cooperativa:

Ellos nos dicen acá la cosa es que esto sea administrado por la misma comunidad, por un grupo de vecinos. Nunca va a ser ni estatal ni privado, va a ser de ustedes. Se tienen que organizar de una manera para poder administrarlo y que funcione. Si no funciona la culpa

es de ustedes, yo ya hago mi parte (Entrevista N°6, comunicación personal, 16 de enero de 2019).

El carácter de interfase inherente a la cooperativa, que le permite dialogar con distintos actores y culturas, junto con el fuerte componente de copresencia que implica su funcionamiento, generan un nuevo marco institucional en Los Pinos, a partir del cual emergen o se resignifican un conjunto de conocimientos, recursos, y habilidades. Estas van a afectar de manera determinante el modo en el cual sus integrantes perciban al espacio y motoricen sus acciones a partir de él.

Como comenta un entrevistado: “El grupo técnico es el que no nos deja caer. Están, nos apoyan. Sin ellos, no sabíamos qué hacer. Nos incentivaron a que nos reuniéramos solos para que salieran nuestras propias inquietudes. Lo hicimos y no sabíamos de qué hablar, nos reíamos” (Entrevista n°5, comunicación personal, 15 de enero de 2019). En algún punto, sería esperable que una intervención de esta envergadura implique un proceso de apropiación de saberes y habilidades a tal nivel que tanto la cooperativa como los vecinos logren autonomizarse del vínculo con el GI.

Sin embargo, dada la dinámica de dependencia de los vecinos y cooperativistas hacia el GI, un interrogante que surge es cuál es el grado de apropiación de los nuevos saberes, nacidos a partir de la acción espacial del GI, que permitirían consolidar nuevos conocimientos y competencias una vez que este dejara de involucrarse al nivel que lo hacía a ese momento. A priori, parecería que la sola copresencia, o esa dinámica de «vinculación intensa», tuvo más éxito para intentar exponer o transferir un saber que para lograr un verdadero proceso de apropiación, a partir de la construcción de prácticas que tendieran a la autonomía.

Construcción del biodigestor y estrategias de utilidad del conocimiento

Una vez cumplimentadas las primeras etapas del proyecto propuesto por el Instituto Wuppertal, se efectivizó el financiamiento y la construcción de la planta de biogás, en un terreno que fue conseguido a partir de una gestión realizada ante el organismo que disponía la administración de los bienes del estado. La construcción avanzó con lo que se denominó formalmente como:

“Unidad Demostrativa de Producción de Biogás”. La misma contó con una superficie cubierta de poco más de 90 metros cuadrados, y semicubierta de casi 11 metros cuadrados.

En relación con la conformación de la cooperativa y la instalación de la planta, parece interesante analizar las distintas estrategias que llevó adelante el GI para traducir su capital académico y cognitivo en un conjunto de saberes prácticos que permitieran una relación de relativa horizontalidad con los vecinos/cooperativistas, y así garantizar que la intervención sea exitosa. Esto nos remite a las discusiones acerca de las estrategias que llevan adelante los investigadores para lograr que los conocimientos que generan adquieran utilidad social.

Las estrategias implicaron no solo formas de dotar de sentido al uso de los conocimientos (Vaccarezza y Zabala, 2002), sino también modificaciones en las concepciones del espacio por parte de todos los actores involucrados. Los miembros del GI salieron de sus ámbitos de trabajo cotidianos, para involucrarse en la resolución de una problemática socioespacial que los convocaba en un territorio vulnerable, y los vecinos, a partir de la interacción con el GI, se fueron conformando en cooperativistas y adquirieron una serie de capacidades que les permitió ejercer roles más activos en la comunidad.

La construcción de la utilidad social, en derredor de este caso, supuso crear una serie de estrategias discursivas, en las cuales es importante considerar lo que se dice, pero también lo que se deja de decir. Como se observa en el siguiente extracto de una integrante del GI:

Si le decíamos a los vecinos en Los Pinos, que tenés electricidad más o menos mala, no tenés red de gas y no la vas a tener, estás comprando la garrafa carísima, y te dicen que te podés autogenerar gas y usarlo, a nosotros nos pareció que era más cautivante y atractivo para la gente (Entrevista N°5, comunicación personal, 9 de enero de 2019).

La observación participante nos permitió asimismo acceder a las “bambalinas” (*back region* en términos de Goffman, 1981) de la actuación del GI en una asamblea de la cooperativa. El siguiente fragmento de las notas de campo muestran la cuidadosa selección de los términos y modos de comunicar que emplea el GI, con el propósito de mantener el interés en el proyecto por parte de los vecinos.

Investigadora 1: ¿Por qué les vas a decir eso?

Investigadora 2: No hay que ser tan crudo. ¡Lo estoy diciendo acá porque nosotros lo entendemos! Es lo que dijiste antes, decirles a ellos que junten plata para el biodigestor no sirve.

Investigadora 1: Por eso, no se los digas. Podemos decirles que ya están en condiciones de empezar a crecer como cooperativa, que de todas las acciones que sabemos que han estado discutiendo, proponiendo, que nos pidan ayuda para poder pasar a la acción, que va a ser la única manera de que empiecen a ver lo beneficioso de tener una cooperativa, que con los papeles en regla pueden tener acceso a dineros que nosotros desconocemos (Registro de campo, reunión del grupo de investigación, 10 de febrero de 2019).

A partir de las entrevistas realizadas a los distintos actores involucrados (investigadores, extensionistas, vecinos/cooperativistas), uno de los aspectos a rescatar es la importancia que tuvo para el GI el establecimiento de lazos de confianza con los vecinos de Los Pinos, que garantizaran una correcta comunicación y flujo de información entre ambos sectores. Vale aclarar que la percepción pública de la ciencia se relaciona directamente con el grado de credibilidad que el público les asigna a las instituciones, mucho más que con la capacidad que tiene para comprender las cuestiones más técnicas específicas (Wynne, 1992).

Esto se verifica en Los Pinos, dado que se crearon lazos de confianza entre el GI y los vecinos, que fueron previos y sentaron las bases a la formación más técnica, tanto en cooperativismo y organización productiva como a cuestiones bien específicas del funcionamiento técnico del biodigestor. A partir de allí, se consolidó una dinámica de trabajo bastante fluida. Sin embargo, parecería haberse producido una circulación de saberes algo unidireccional desde el GI hacia los vecinos, con un grado de apropiación de la toma de decisiones por parte de este último algo intermitente.

Estuve dialogando (...) y tratando de plantear que el biodigestor es para ustedes, nosotros pedimos el subsidio, lo plantamos, lo dejamos andando. Necesitamos que ustedes se apropien del biodigestor, si les interesa, y si no les interesa lo hacemos igual y vendrá otro a hacerse cargo (Entrevista N°5, comunicación personal, 9 de enero de 2019).

Se observa una cierta contradicción dentro de lo que el GI propone hacer en cuanto a la creación de legitimidad y vínculos de confianza, por un lado, y a la necesidad de avanzar con celeridad

en un proyecto cuyo financiamiento ya había sido aprobado, por el otro. A pesar de esto, la comunidad de Los Pinos se mostró interesada y participó activamente.

Cuando arrancamos, éramos nosotros explicando con un *powerpoint*, pero ya a lo último estaba la gente de Los Pinos dando clases de biogás en los colegios, la gente aprendió. Después de una encuesta que hicimos, preguntando cuánto sabían sobre bioenergía y biogás, la respuesta fue poco, y de biogás ahora saben mucho. Los que participaron hicieron un cambio de cabeza super importante, al igual que nosotros: aprendimos mucho cómo tratar de acercar una solución tecnológica a una situación social que no nos imaginábamos que tenía esta complejidad (Entrevista N°5, comunicación personal, 9 de enero de 2019).

Las dos citas anteriores nos llevan a pensar en el despliegue de ciertas tendencias tecnocráticas, que aún hoy se encuentran presentes en las instituciones de ciencia y tecnología del país, y en la influencia que ejercen sobre la formación de sus profesionales. Estas concepciones remiten a pensar que las soluciones a los problemas sociales son exclusivamente tecnológicas, y que provienen desde actores que las diseñan, restringiendo el rol de los potenciales beneficiarios a usuarios que deben o podrían adoptarlas.

Esto nos lleva a discusiones extendidas que han tenido lugar en los Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, donde autores como Feenberg (2005) van a plantear que la tecnología contemporánea no es neutral, sino que favorece ciertos fines al tiempo que obstruye otros. Es así como se puede pensar no solo en limitaciones a las soluciones tecnológicas que parten de deficiencias en su diseño, sino también en las estructuras socioespaciales que sesgan el conocimiento y sus potenciales aplicaciones. Cuando la entrevistada N°1 menciona la complejidad que surge ante una solución tecnológica que “acercan” al territorio, lo que está revelando son las limitaciones que tienen estos enfoques tecnocráticos al reducir una problemática social compleja a una exclusivamente tecnológico-artefactual.

Ante las reticencias que se enfrentaron dentro del pueblo para llevar adelante el proyecto, GI tomó una serie de decisiones en cuanto al diseño de la tecnología a implementar en la planta de biogás. Particularmente, se abordó la cuestión de la escala del proyecto, como una cuestión tomada en cuenta al momento de seleccionar la tecnología más adecuada a ser implementada. Una de las opciones en carpeta era construir un biodigestor de plástico (o biodigestor “salchicha”). Sin embargo, a efectos de lograr el involucramiento de la población local, se optó

por una solución más costosa a nivel constructivo, pero con un mayor potencial de atracción al ser percibida como más “robusta y confiable” (Entrevista N°5, Comunicación personal, 9 de enero de 2019).

Fotografía N° 3: Biodigestor en construcción



Fuente: Citecus, 2019.

Esa apelación a una tecnología más “vistosa”, está directamente relacionada con una intención del GI por asociar la construcción del biodigestor a la constitución de un hito o emblema espacial. Este elemento desempeña un papel significativo al “espacializar los valores sociales”, a partir de generar efectos de eficacia simbólica que trascienden su materialidad concreta (Lussault, 2015). De esta manera, se buscó que la planta de biogás proyectara una imagen de mayor credibilidad, a fines de movilizar a los actores vecinales, y así dar nacimiento a nuevos discursos y subjetividades.

Conocimiento y espacialidad, una vinculación compleja

La gestión de los recursos humanos involucrados en el proyecto resultó problemática, a su vez, dada la poca cantidad de miembros del GI que tenían una dedicación completa. El grueso de

los involucrados desde las instituciones públicas de investigación (INTA, INTI, UNMDP) participaron “vocacionalmente” o con dedicaciones muy parciales. La falta de trayectoria del GI en la gestión de proyectos complejos de vinculación en los territorios vulnerables, en los cuales intervenían variables y desafíos tecnológicos que estaban fuera de su alcance, se pueden vislumbrar a partir del siguiente fragmento:

No tenemos capacidad técnica en Balcarce para encarar esto que encaramos, tuvimos que buscar socios por fuera. Los socios que están lejos no tienen la motivación que tiene uno que va a Los Pinos dos veces por semana. Tenemos gente que vive en Mar del Plata y se termina cansando. Los pibes de INTI tienen un montón de proyectos en los que participan, en este ni siquiera les podemos pagar, lo hacen de onda, pero le dedican el tiempo que pueden. Hicieron todo el diseño ellos, vinieron más de una vez acá, a ver en qué estado estamos, pero el resto es remar (...) necesitaríamos un ingeniero permanente que esté involucrado en el proyecto, pero bueno, no lo tenemos (Entrevista N°5, comunicación personal, 9 de enero de 2019).

La complejidad del proyecto también minó, a lo largo del tiempo, el grado de involucramiento y dedicación que muchos participantes habían puesto desde un principio. Sobre todo, porque a lo largo de su desarrollo se fueron produciendo una serie de trabas a raíz de algunos errores en la formulación técnica. Específicamente, no se presupuestaron adecuadamente muchos componentes técnicos y de infraestructura, que luego resultarían vitales para que el proyecto efectivamente se pudiera poner en funcionamiento: desde materiales eléctricos, hasta componentes como bombas y pequeños motores.

A partir de las demoras que fue atravesando la construcción del biodigestor, el equipo responsable cada vez se reducía más en cantidad de integrantes. De acuerdo con una entrevistada:

Estamos manejando desde los albañiles, hablando con el ingeniero, por eso digo que estamos en un momento... Un poco porque nos quedamos sin recursos económicos, otro porque cada cual tiene sus responsabilidades (...) somos efectivamente cuatro personas laburando para un carro muy grande (Entrevista N°5, comunicación personal, 9 de enero de 2019).

Esta reflexión lleva a cuestionarse cuáles son los límites de la intervención y en qué medida las interacciones, que se propician de la universidad, dimensionan adecuadamente las implicancias de llevar adelante un proyecto de este grado de complejidad. Se trata de compromisos que conllevan gran cantidad de recursos públicos (recursos humanos, horas de trabajo, compromisos de financiamientos de diversa índole), y que deberían plantearse, si son el resultado de un trabajo territorial de larga data, cómo incluir en el análisis todas las variables implicadas.

¿De qué manera la espacialidad y la temporalidad son abordadas cuando se plantea llevar adelante una intervención territorial de vinculación socioproductiva? Suelen soslayarse algunas cuestiones relacionadas con la dimensión espacial de las realidades socioculturales (Meusberger y Werlen, 2017). En primer lugar, un elemento que no se toma en cuenta es la disparidad no solo social sino también espacial, es decir, el nivel diferenciado de capital espacial con el que cuentan los distintos interlocutores del proceso. En segundo término, se suelen soslayar las estructuras de poder en el espacio, las cuales permiten entender, de un modo más acabado, las maneras en las cuales el conocimiento y el poder establecen jerarquías espaciales.

En el caso particular de Los Pinos, la cuestión de las vinculaciones entre las esferas del poder y el espacio se puede observar con claridad cuando analizamos la forma en la que el Municipio de Balcarce delegó en un GI de la universidad el abordaje de una problemática social compleja, en un territorio que venía arrastrando una crisis económica y social extendida desde hace varias décadas. Dicha problemática no solo estaba dada por la falta de trabajo, oportunidades o desarrollo social, sino también por cuestiones más puntuales, como la ausencia de controles ambientales a las actividades productivas locales, lo cual conllevó una constante externalización de los pasivos ambientales (residuos de la actividad avícola y ganadera), por parte de las agroindustrias de la zona que generaban situaciones de contaminación que volvían insostenible la vida en el pueblo.

Ante este escenario de gran complejidad, las posibilidades de que un proyecto de este tipo pueda resolver, aunque sea en parte, las problemáticas que intenta abordar parecen remotas. Desde el GI, se muestran conscientes de ello, al plantear que la planta de biogás es una “unidad demostrativa”, y que, en el caso de resultar exitosa, puede ser escalada o replicada. Sin embargo, una vez lanzada una iniciativa de esta índole, que congrega a actores de diversa naturaleza y

con varios de ellos en situación de vulnerabilidad, inevitablemente se generan expectativas que luego son difíciles de acotar o circunscribir.

Específicamente, porque la universidad como institución está investida de una valoración pública que conlleva una serie de expectativas acerca de su potencialidad como agente de transformación social (Di Bello, 2013). En ese marco, se entrecruzan dimensiones sociales, simbólicas, cognitivas e ideológicas, que conforman un abanico de expectativas en relación con los conocimientos que se ponen en juego, y con la potencialidad que éste tiene para modificar situaciones de vulnerabilidad en el pueblo.

Esta situación de interacción intensa con los vecinos terminó generando una suerte de sobrecarga laboral, y hasta emocional, sobre el GI, que se consideró responsable de todo el proceso al haber iniciado la intervención. En palabras de un integrante del GI:

Este proyecto es un grupo de investigadores que está a punto de lograr dar un servicio público. Ya no son investigadores en un proyecto universitario, están haciendo lo que el estado no hizo. Y cuando ves que se está haciendo, te cuestionás: ¿cómo puede ser que esté pasando esto? No tiene lógica desde el estado. La municipalidad no pensaba dar el gas, aparece una investigadora, lo genera, lo impulsa y lo lleva adelante y la municipalidad va a ir a cortar la cinta (...) Nosotros desde el conocimiento no tenemos límite, pero necesitamos a los organismos estatales para que hagan lo que deberían hacer, porque saben cómo hacerlo y tienen las herramientas... Y no tener a los investigadores viendo cómo se gestiona algo en qué organismo (Entrevistado N°8, comunicación personal, 15 de enero de 2019).

Una vez creado el proyecto, y con el mismo ya en ejecución, lo que desde el GI era conceptualizado como un problema “objetivo”, pasible de ser atendido desde las capacidades internas del grupo, se convierte en un problema público, el cual se ve atravesado por un conjunto de factores culturales, axiomáticos, políticos, ideológicos y espaciales, que van a tener una incidencia decisiva en su desenvolvimiento y posterior resultado.

Esto nos lleva a retomar lo que Werlen (2017) plantea con respecto a cómo se entrelazan los conocimientos, la acción y el espacio. Se podría pensar en una relación dialéctica entre las tres esferas que se coconstituyen. Es así como cualquier acción que implique modificar las formas en las que determinados actores crean y utilizan el conocimiento, necesariamente requiere

trabajar también desde la dimensión espacial, reconociendo las disparidades en relación con ese conocimiento, y analizando, de una manera más profunda, cómo se estructuran las relaciones de poder en el espacio, las cuales actúan como factores condicionantes para el despliegue de la acción.

Recapitulando

A partir del caso de la Planta Demostrativa de Biogás en Los Pinos, se observa cómo un proyecto, que en principio era viable desde lo cognitivo, lo técnico, lo productivo y lo financiero, se inscribió en una dinámica espacial. Esta tenía un grado de complejidad tal que obligó al GI a profundizar su involucramiento más de lo planificado, tanto en la dedicación temporal como en la profundización de aspectos del proyecto relacionados con la formación en cooperativismo, así como con la resolución de problemáticas interpersonales dentro del grupo. Desde su formulación, y para cumplir con uno de los objetivos del financiamiento externo, se debía promover el empoderamiento de la sociedad civil a partir de un involucramiento completo en la gestión de la planta de biogás a ser construida.

Haber adoptado el formato social de cooperativa, para cumplir con ese requisito externo, implicó que, a la par de la complejidad constructiva y de gestión productiva de la planta, se le sumara la de la tecnología social requerida para crear desde cero una cooperativa, en un espacio social que no contaba con instituciones de base que permitieran encauzar las acciones colectivas para dar respuesta a las problemáticas del pueblo. Las especificidades del espacio, donde el GI llevó adelante su intervención, tuvieron un grado de influencia decisivo en la evolución y desarrollo del proyecto, llegando a imprimir un sello local a la práctica. La forma en la cual se movilizaron los conocimientos, y cómo se pusieron en uso, estuvo estrechamente ligada a la espacialidad propia de donde se desarrollaron las prácticas (Werlen, 2017).

Por otra parte, podríamos considerar que los participantes que tienen como pertenencia institucional el INTA abordan la intervención desde una mirada más consustanciada con los territorios y las problemáticas socioespaciales. Sin embargo, quienes son académicos “puros”, en su mayoría investigadores de la UNMDP, tienen un tipo de relación con el espacio predominantemente técnica o cognitiva. Los funcionarios e interlocutores que pertenecen al Instituto Wuppertal, por su parte, tienen objetivos también técnicos, pero vinculados a la

creación de capacidades, la reducción de asimetrías económicas y sociales, y el testeo de proyectos de energía en entornos vulnerables, con la finalidad de analizar la viabilidad de implementación de los mismos. Por último, los funcionarios municipales de Balcarce están enmarcados en normas o valores relativos a la gestión de gobierno y generan relaciones espaciales más vinculadas con el control y la incidencia política en el territorio.

El análisis del caso muestra que las modalidades de interacción con el espacio se asocian, de forma bastante directa, con el origen o la pertenencia institucional. Así, los vecinos, que tienen una relación “vivencial” con el espacio, lo apprehenden de un modo práctico, en íntima interrelación con sus experiencias cotidianas.

Lo anterior nos lleva a reflexionar acerca de la manera en las cuales se abordan, desde las universidades, los procesos de vinculación con los territorios. Existen concepciones muy arraigadas en las instituciones universitarias y de investigación de que la resolución de problemas sociales complejos está vinculada exclusivamente a un problema de conocimiento, de carencia de habilidades o de experticias.

La construcción de problemas, desde la academia y la formulación de sus posibles respuestas, está relacionada casi exclusivamente con la idea de formar a las personas para transferirles conocimientos. Esto se vincula con una herencia del modelo lineal, que en gran parte moldeó a las instituciones de ciencia y tecnología a lo largo del mundo, y que las impregnó en la concepción de que, a partir de inversión en ciencia básica, se produce la difusión y aplicación del conocimiento generado y, desde allí, se genera un beneficio social determinado (Mitcham y Briggles, 2007).

Si nos referimos específicamente a la cuestión de la extensión, se presentan dos modelos encontrados para las relaciones de la universidad y la sociedad: el difusionista-transferencista y el modelo de la extensión crítica (Tommasino y Cano, 2016), siendo el primer modelo el que predomina en estas relaciones. La UNMDP no fue ajena a este proceso a partir del cual muchas de sus experiencias de vinculación siguen pensando al entorno como los actores a donde se les va a llevar conocimiento.

Si bien desde la página web de la universidad, en su apartado de extensión, se va a plantear un diálogo constante entre la institución y su entorno (y lo bidireccional de esta relación), en

muchas de las experiencias relevadas, el principal escollo parece ser la falta de formación en trabajo interdisciplinario por parte de los principales actores académicos que llevan adelante sus prácticas. Esto se ve especialmente en quienes realizan estas iniciativas por primera vez y deben así enfrentarse a problemáticas sociales complejas, sin contar con un apoyo sistemático por parte de las áreas encargadas de la vinculación con el entorno. Se detecta una falta de comprensión acerca de cómo las especificidades del territorio influyen y llegan a imprimirle un sello a la práctica misma, en la medida en que se constituye en materialización de memorias individuales y colectivas que contribuyen a configurar las identidades de los sujetos, pero también sus cursos de acción en el espacio (Lindón, 2012).

En el caso de Los Pinos, esta herencia del modelo lineal-difusionista pronto reveló sus limitaciones. Los investigadores a cargo del GI debieron suplir los déficits en sus metodologías de abordaje territorial, con una intensidad de interacción mucho mayor a la prevista originalmente. Esto conllevó a que, al comienzo del proyecto, el GI tuviera que dedicar más tiempo a la resolución de problemáticas de la interacción con los vecinos y de la gestión burocrática ante distintas instituciones, que a la misma construcción del biodigestor.

Una vez desentrañado el nudo problemático, constituido por el hecho de que el proyecto no surgió a partir de una demanda del propio pueblo y de que era complejo tecnológica y burocráticamente, el proyecto generó una situación de interacción que logró cambios significativos en las relaciones sociales de los vecinos. Fundamentalmente, porque el GI logró enrolar las voluntades de vecinos, instituciones y otros actores, pudo encauzar acciones para llevar adelante la interacción y puso en juego saberes que tienen una vinculación estrecha con el espacio. Es en este sentido que la situación propuesta por el GI promovió modificaciones importantes y generó nuevos recursos y habilidades para que puedan gestionar sus capitales socioespaciales.

Capítulo 4: El Programa Hábitat y Ciudadanía

Introducción

En este capítulo, se analiza un programa de investigación de la UNMDP denominado Programa Hábitat y Ciudadanía (en adelante PHyC), perteneciente a la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Este trabaja desde el año 2004, en distintos barrios populares de la ciudad de Mar del Plata, llevando adelante una variedad de actividades de vinculación y transferencia. El programa está dirigido por un arquitecto e investigador del CONICET, quien cuenta con una larga trayectoria de intervención en entornos territoriales altamente vulnerables, a partir de la formación de alianzas entre agentes públicos y privados presentes o con vinculación en el territorio. A fin de mantener el anonimato, usaremos el nombre de fantasía de Carlos González.

El PHyC fue institucionalizado por la Universidad Nacional de Mar del Plata en el año 2014, a partir de la Ordenanza del Consejo Académico N° 992. A lo largo de los últimos años, el grupo que hoy conforma el PHyC ha desarrollado tareas relacionadas fundamentalmente con el hábitat y la provisión de servicios públicos en los barrios Monte Terrabusi, Alto Camet, Santa Rosa del Mar, Nuevo Golf, Autódromo, Las Heras, Juramento, La Herradura y el Caribe, todos con elevados niveles de vulnerabilidad socioespacial (Lucero *et al*, 2015).

El objetivo de las intervenciones que lleva adelante el PHyC es promover “procesos comunitarios de construcción y mejoramiento de viviendas” a partir de la asistencia técnica para la autoconstrucción, la provisión de servicios básicos, así como la promoción de distintos emprendimientos productivos en los barrios. El grupo trabaja generando dinámicas territoriales que conciben como “redes de gestión”, las cuales implican la articulación de distintos grupos que se encuentran en un territorio específico, y que tienen por finalidad generar una vinculación horizontal que lleve al empoderamiento de los habitantes del barrio.

Se promueve que la gestión de las soluciones sea codiseñada y liderada por los actores territoriales relevantes identificados en cada lugar, en una dinámica que busca rescatar sus saberes y su cultura material para coconstruir las soluciones a través de la participación de la

universidad, distintas instancias estatales, así como de otros actores presentes en el territorio. En palabras de González:

“Ante la ausencia del estado, nosotros le damos un rol central a los que llamamos los actores territoriales relevantes, que son los que de alguna manera tienen una actitud y una capacidad de llevar adelante un desarrollo, motorizar. Donde los vemos, empezamos a construir vínculos, porque tenemos esa visión de que el desarrollo territorial tiene que funcionar con redes propias, nosotros tenemos muy claro, eso requiere saberes” (Entrevistado N°9, comunicación personal, 5 de septiembre de 2022).

Estos procesos de gestión conjunta suponen que el PHyC aporta su experticia técnica para conseguir y gestionar financiamientos de distinta envergadura (locales, provinciales y nacionales). A la par, provee recursos humanos altamente formados en arquitectura, ingeniería y gestión urbana. Los proyectos se llevan a cabo de forma muy estrecha con los mismos actores territoriales que serán los beneficiarios de dicha intervención (vecinos de distintos barrios populares de la ciudad). A estas redes también se suman instituciones del tercer sector (ONG, fundaciones), actores gubernamentales, empresas productivas locales y empresas de provisión de servicios públicos.

Resulta importante indagar de qué forma se vieron afectados los esquemas interpretativos de los actores que participaron de la interacción. En este caso, los vecinos venían de una situación de vulnerabilidad laboral y a partir de dicha intervención lograron insertarse en el mercado laboral fabricando un bien. En función de lo anterior, a lo largo del capítulo se estudia en qué medida la interacción permitió generar un marco para que se incorporaran conocimientos, capitales sociales y nuevas disposiciones espaciales, en los distintos actores participantes de la situación de interacción.

La vulnerabilidad y las formas de abordarla desde el PHyC

En la concepción de los miembros del PHyC, el trabajo se articula a partir de “redes de gestión”, las cuales son el vehículo necesario para identificar las problemáticas, tensiones y disputas propias de cada territorio. A la vez, constituyen el canal desde el cual originó interacciones sinérgicas y alianzas con actores que previamente no encontraban una vía adecuada y sostenible en el tiempo para vincularse. De esta manera, lo característico de este caso es que la circulación

de saberes y la cogestión de los distintos problemas y soluciones implicaron una participación de los distintos actores involucrados. Esto buscó generar que la identificación de problemas, junto con las propuestas de soluciones, fueran codiseñadas y cogestionadas entre los expertos acreditados en conjunto y los actores relevantes del entorno territorial.

Las redes de gestión, entonces, parten del reconocimiento de las distintas intencionalidades y estrategias de poder presentes en los territorios. Además, buscan darle participación a lo que González denomina “actores territoriales relevantes (...) que tienen capacidad de llevar adelante un desarrollo, motorizar: donde los vemos empezamos a construir vínculos” (Entrevistado N°9, comunicación personal, 5 de septiembre de 2022). En palabras de un investigador del programa: “Se trata de la construcción de soluciones para situaciones socioproblemáticas. Hay que construir un sistema de soluciones para atacar a ese sistema de problemas... se labura con extrema pobreza, en lugares vulnerables, colapsados” (Entrevistado N°10, comunicación personal, 6 de septiembre de 2022).

Una de las principales intervenciones que llevan adelante consiste en procesos de mejora del hábitat, promoviendo iniciativas como la llamada “pequeñas dosis”, mediante la cual se les otorga a distintas familias asesoramiento, materiales constructivos y capacitación para que puedan mejorar sus viviendas de forma progresiva. Este programa no busca la provisión de una vivienda integral, sino que se generen condiciones materiales mínimas para el habitar, y que se promuevan la apropiación del conocimiento y la autogestión de la vivienda.

En este caso, el habitar, según González: “tiene que ver con el ser, con la posibilidad de la libertad, con la posibilidad de apropiación, con la posibilidad de decidir (...) El concepto de habitar es el que mejor tensiona la disciplina a una visión más democrática, más abierta, más humana en la construcción del territorio” (Entrevistado N°9, comunicación personal, 5 de septiembre de 2022). Desde esta afirmación, se observa la ambición que tiene el programa de intervenir en el entorno, poniendo en juego la experticia que proviene no solo de la disciplina de forma más directa o instrumental, sino también de los conocimientos incrementales que el grupo fue produciendo a la par que desarrollaron intervenciones, y a medida que sus acciones se vieron espacializadas.

Cuando hablamos de vulnerabilidad, entendemos que ésta es más elevada cuanto menor capacidad de respuesta tienen las comunidades, los grupos, las familias, y los individuos. Los

sujetos que viven en estos territorios relegados tienen capitales sociales, culturales y espaciales muy escasos para afrontar procesos de reproducción ampliada de la vida cotidiana. Esto se suma a un contexto espacial que presenta estructuras de oportunidad muy adversas (Soldano, 2011).

Las intervenciones en entornos altamente vulnerables que lleva adelante la universidad no han sido objeto de mayores estudios por parte de la academia. En términos generales, y como ya ha sido mencionado al comienzo de esta tesis, ésta ha priorizado el análisis sobre los procesos de innovación que tienen objetivos de impacto económico de mayor rentabilidad. Sin embargo, muchas veces se soslayan dichos impactos indirectos, que tienen iniciativas de desarrollo social como las que aquí estudiamos, a partir de las cuales vecinos de un territorio vulnerable ven mejorada su calidad de vida, así como sus posibilidades de dedicar sus esfuerzos vitales a otras cuestiones por fuera de la mera supervivencia, mediante la irrupción de un actor como la universidad que plantea una intervención en múltiples dimensiones.

En este caso la espacialidad es un aspecto central. El programa incorpora esta dimensión en la concepción que utilizan de la tecnología, a partir de lo que denomina como “implicancias territoriales urbanas más complejas”. Estas son fruto de entramados socio-urbanos donde se encuentran situaciones de extrema vulnerabilidad, pobreza, narcotráfico, desempleo, precarización laboral, déficits habitacionales, falta de acceso a servicios básicos, entre otros. El PHyC desarrolla estas conceptualizaciones a partir de experiencias previas de trabajo en espacios vulnerables: cada una de ellas mostró que los escenarios complejos que se generan en este tipo de entornos no podían ser abordados a partir de estrategias lineales.

Estos procesos de urbanización popular distan de ser lineales. Cada caso logra avanzar en la generación de los soportes de la urbanización (acceso a servicios básicos, redes de transporte, infraestructura urbana, entre otros), de acuerdo con el grado de comportamiento de los actores involucrados, de los apoyos que logran congregarse, y de las alianzas que conforman. La urbanización popular, a diferencia de la “formal”, se suele dar en la periferia de las ciudades, y producir a partir de la toma de tierras, tanto fiscales como privadas, o de loteos irregulares. Estos terrenos, por lo general, no cuentan con infraestructuras ni servicios. Es recién a partir de la ocupación del suelo que luego se intentan generar los soportes de la urbanización (Pirez, 2013).

En este sentido, aparece con centralidad el rol que juega el conocimiento en el despliegue de estas nuevas tramas de urbanización, y las distintas formas que se desplegará en las relaciones de poder nacientes dentro de los espacios por conformarse. A la par, estas acciones inciden necesariamente en la dimensión espacial, tanto en los términos más concretos de la disposición de nuevos elementos y relaciones, como en la (re)estructuración de relaciones de poder en el espacio (Werlen, 2017).

La vulnerabilidad, en estos espacios, adquiere una apariencia de “territorio en insularización” (Soldano, 2011), el cual cuenta con características peculiares. Sus habitantes tienen problemas extendidos de acceso a empleos de calidad, y por ende a la generación de ingresos. Además, poseen una capacidad disminuida para acceder a bienes básicos y cuentan con problemáticas para movilizarse a otros barrios o sectores de la ciudad, aspecto que les da esta característica de estar insularizados, o aislados. Por todo lo anterior podemos señalar que tienen una capacidad muy baja para acceder a servicios sanitarios y educativos (Soldano, 2011). Estos espacios con carácter de insularización, a su vez, generan en sus habitantes fuertes condicionamientos en sus formas de sociabilidad, y por ende en la circulación de conocimiento y la capacidad de generar nuevas disposiciones de uso del espacio.

Entender estos procesos de insularización es una vía de entrada para comprender la dimensión más subjetiva de la segregación espacial, en función de estudiar las representaciones sobre el territorio, el lugar social que ocupan los sujetos y el carácter de los espacios de socialización en los cuales circulan los distintos actores (Soldano, 2011). A partir del trabajo de campo, resulta interesante pensar en dos prácticas que suelen ir en paralelo e intentan romper con estos procesos de insularización: por un lado, la vinculación de actores barriales con sectores académicos -en este caso el PHyC-; y por el otro lado, los espacios de militancia política. Ambas prácticas y vinculaciones permiten recomponer el capital social, generar procesos de aprendizaje, construir nuevos espacios de socialización y generar formas novedosas de apropiarse, usar y circular en el espacio social.

Lo anterior nos lleva a plantearnos algunos interrogantes: ¿De qué manera se abordan las prácticas universitarias de vinculación en estos contextos? ¿Qué implicancias tienen las intervenciones universitarias en territorios altamente vulnerables? ¿Hay un límite para las intervenciones universitarias de vinculación? ¿Qué implica, para un grupo de vinculación de la universidad, hacerse cargo -o ser partícipe- de la provisión de un servicio básico?

Trayectoria del director del grupo

En el proceso de consolidación académica del PHyC, y en las estrategias de intervención territorial que de allí surgen, juega un rol importante la trayectoria de su director, el Arq. Fernando González. Su formación de base es la arquitectura, que ejerció principalmente a partir de su dedicación como profesor titular en la materia Teoría y Crítica de la Arquitectura y el Urbanismo desde mediados de los años 80, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNMDP, y como investigador independiente del CONICET, institución a la que ingresó en el año 1997. A mediados de los años 90, se formó en una Maestría en Historia, y comenzó a publicar en temáticas relacionadas con el urbanismo y la historia urbana de Mar del Plata.

A partir de los años 2000, hizo un giro, tanto en su trayectoria como en los temas que investigaba, incorporando una línea sobre la problemática de la extensión universitaria. Ya a partir de la década del 2010, en paralelo con un despliegue importante de proyectos de extensión, comenzó a investigar acerca de tecnologías sociales, resolución de problemáticas habitacionales, e incorporó fuertemente el abordaje de la gestión habitacional y urbana en territorios vulnerables.

El liderazgo carismático de González, que en su caso descansa en una forma de carácter muy particular: genera entusiasmo y confianza personal en su capacidad de liderazgo tanto técnicamente como en cuanto a su capacidad de fomentar buenas relaciones interpersonales. Su figura académica se podría asimilar a la noción de “star scientist” (científico estrella), asignada a académicos altamente calificados, quienes a partir de su vasta trayectoria y reconocimiento logran acumular una gran cantidad de capital académico, social y espacial. El involucramiento de este tipo de científicos en actividades de transferencia de conocimiento ha probado tener un impacto particularmente positivo (Zucker y Darby, 2006), especialmente en procesos de innovación tecnológica.

Los científicos estrella tienen un gran potencial para convertirse en agentes de difusión de conocimiento (knowledge spillover agents), porque cuentan con recursos cognitivos y capitales muy particulares y desarrollados (Schiller y Revilla Diez, 2008). Usualmente, suele pensarse a los procesos de vinculación a partir de las lógicas propias de la academia y el conocimiento científico, en términos de la circulación de saberes, de los procesos de aprendizaje y

comunicación de la ciencia. Sin embargo, en el caso del PHyC, podemos entender en qué medida los procesos de vinculación entre actores expertos y legos muchas veces se ven atravesados también por otras dimensiones, como el carisma y las preferencias emocionales o ideológicas (Vaccarezza, 2011).

El riesgo que esto conlleva es que estos conocimientos, al ser codificados y acumulados por un individuo particular, no puedan ser luego transmitidos a grupos más grandes. Por ello, para que se cree nuevo conocimiento es preciso que estos científicos estrella puedan formar y compartir sus saberes con un grupo o una red de actores (Nonaka y Takeuchi, 1995).

Estrategias del PHyC: entre el conocimiento académico y el conocimiento empírico

La consolidación del PHyC a nivel académico-institucional depende de que los integrantes del programa puedan formarse, adoptar los conocimientos generados de forma primigenia por su director, y, a partir de allí, replicar y ampliar los logros iniciales. Esto parecería verificarse en la actualidad, donde varios de los becarios e investigadores del grupo ya se encuentran con sus tesis y trabajos avanzados, y tienen una estrategia de creación de conocimiento vinculada con la investigación/acción y con el objetivo de consolidar sus carreras académicas.

A partir de las diversas entrevistas realizadas a los miembros del grupo, se percibe que hubo un pasaje desde una autopercepción que los asimilaba a pensarse como figuras de investigadores clásicos, hacia una modalidad más híbrida en la cual comenzaron a pensarse como investigadores/extensionistas. Este cambio fue de la mano de toda una serie de debates internos acerca de cómo lograr prosperar en el sistema científico-universitario, considerando que tradicionalmente las trayectorias más volcadas a la extensión siempre tuvieron un lugar de menor consideración frente a las trayectorias volcadas a la investigación “pura”.

Estos debates internos se produjeron, en mayor medida, a partir de la incorporación de una camada importante de becarios doctorales y de investigación a partir de 2018, que contó con siete nuevos integrantes: seis becarios de CONICET y un becario de la UNMDP. Estas discusiones se vieron favorecidas por un nuevo contexto que surgió en los últimos años en las principales instituciones científico-tecnológicas del país, (sobre todo a partir de la influencia

que tuvieron las administraciones kirchneristas en el entramado de políticas científicas nacionales), y que comenzó a dar mayor peso a la investigación aplicada y a la extensión en la evaluación de las trayectorias del personal científico tecnológico (Gordon, 2011; Rovelli, 2015; Sánchez Macchioli, 2020; Unzué y Emiliozzi 2017). Esto alivió, en parte, la presión de tener que ser evaluados solamente por su producción científica, y abrió la posibilidad de que las evaluaciones ponderen también desarrollos de tecnologías sociales relacionadas con el hábitat popular.

El PHyC cuenta, por un lado, con dos investigadores de edades más avanzadas, quienes se encuentran muy consolidados en sus profesiones, y, por otro lado, con un grupo grande de becarios doctorales, estudiantes y personas que recién comienzan sus carreras académicas. Para que el programa pueda consolidarse en el tiempo, han trazado una estrategia colectiva. La idea es trabajar en paralelo la gestión territorial con la publicación colectiva de trabajos para la futura inserción profesional en el campo académico del grupo más joven. Es importante destacar que el conocimiento nuevo y el desarrollo tecnológico no surgen de forma anónima e independiente, sino que dependen de individuos específicos que previamente han generado un proceso de acumulación considerable de conocimiento en su campo de experticia (Hess y Rothaermel, 2011).

Dentro del PHyC, resulta interesante pensar en qué medida sus prácticas de investigación y de vinculación con los territorios se vieron modificadas a partir de la interacción con los vecinos de los barrios donde llevaban adelante sus proyectos. A partir de las entrevistas realizadas con miembros del programa (Entrevistados N° 10 y 11, comunicación personal del día 22 de octubre de 2022), puede observarse como se pone en tensión la necesidad de tener una estrategia sólida, relacionada con la evolución de las trayectorias individuales de los investigadores dentro del campo académico, con la necesidad de dedicar una ingente cantidad de tiempo a las situaciones emergentes que surgen en la interacción.

Aquí se puede trazar una diferenciación entre conocimiento profesional y conocimiento experiencial o empírico. Este último es en mayor medida pragmático, está orientado a la acción inmediata, más que a un desarrollo de largo plazo que implique un conocimiento sistemático, y tiende a ser más holístico que segmentado (Borkman, 1976). En lugar de partir de la teoría para después ir hacia el territorio, ya se formaron” en el territorio, en relaciones de copresencia

muy intensas, y con dedicación personal, de horarios y de disponibilidad, tanto virtual como física.

A partir de esto, la creación de conocimiento de estos miembros del PHyC se produjo, fundamentalmente, a través de estudios de casos que se desarrollaron tras iniciativas de intervención territorial (tendido de una red de agua, realización de conexiones seguras de electricidad, entre otras). En ellas se recaban datos que luego eran analizados y convertidos en artículos, ponencias y otras producciones académicas. Los artículos trataban mayormente de dos temáticas “troncales”: por un lado, ensayos técnicos sobre materiales constructivos, su aplicabilidad, uso, y potencialidad en territorios vulnerables; por el otro, tecnologías sociales y de gestión de hábitat en contextos altamente vulnerables.

Redes de gestión y coproducción

Cuando se trabaja en territorios altamente vulnerables, se tiene que atender al contexto espacial donde se van a desplegar las interacciones. Resulta insoslayable atender las peculiaridades que tienen los procesos de vulnerabilidad y cómo se construyen o condicionan las prácticas y subjetividades de los actores presentes. En ese sentido, es imposible pensar los procesos de desarrollo tecnológico y social por fuera de los “emergentes espaciales”, categoría desarrollada por el equipo de investigadores del PHyC. Estos emergentes surgen de situaciones que dan forma a la acción, y son propias y específicas de cada lugar. Ante esto, desde el programa se menciona la metáfora médica del “stent”: pensar las intervenciones territoriales como dispositivos de tecnología social que permitan apuntalar y subsanar daños en el tejido socioespacial.

De acuerdo con uno de los miembros del programa: “Estamos en una situación de poder en la que tenemos que dar soluciones, es un compromiso construir soluciones. Si no lo hacemos con la gente que está con el problema, no sirve. Si las propuestas están desterritorializadas, están vacías” (Entrevistado N°10, comunicación personal, 6 de septiembre de 2022). Según un investigador del PHyC, incluso dentro de cada barrio se pueden presentar particularidades que deben atenderse al momento de pensar en una estrategia tecnológica de gestión de hábitat popular. En línea con esto, el grupo tiene una visión del territorio como relación, como un

“campo de combate” donde se entrecruzan diferentes actores, artefactos y estrategias de intervención.

Estos sentidos que se construyen desde el PHyC parecen ser el fruto de una trayectoria de acumulación de aprendizajes, en los casi veinte años de trayectoria, que les permitieron ir desde un marco conceptual muy trabajado hacia el territorio, y luego volver desde el territorio para reelaborar y ajustar ese mismo marco conceptual a partir de la experiencia empírica. El objetivo, en última instancia, consiste en romper con los determinismos tecnológicos y sociales a partir de concebir a la tecnología como una construcción socioespacial (Araya Ramírez, 2018). Esto permitió al grupo incluir conceptualizaciones provenientes de diferentes vertientes teóricas y conceptuales: el enfoque sociotécnico, estudios sobre hábitat popular, sociología de la ciencia, estudios urbanos, arquitectura, ingeniería, entre otros.

Este cruce, entre disciplinas y marcos conceptuales diversos, incidió de forma directa en la conceptualización con la que el grupo aborda la construcción de los problemas. De acuerdo con un investigador del PHyC: “nosotros no llevamos el problema al campo, este se construye colectivamente y es un emergente de una situación territorial determinada” (Entrevistado N° 11, comunicación personal, 20 de octubre de 2022). Es así como el grupo creó una metodología de abordaje territorial que surgió y fue construida a partir de las características inherentes del problema identificado, en conjunción con los actores implicados.

Es mediante la noción de habitar que se produce un cruce entre la visión disciplinar del PHyC y las necesidades o demandas surgidas del territorio, que genera una necesidad por pensar en modelos alternativos de vinculación y de coconstrucción de potenciales soluciones. Estas se construyen en redes de gestión que el grupo denomina “experiencias sistemáticas o modelos”, dado que permiten erigir teorías de transformación territoriales en base a transformaciones concretas de pequeña escala. Las mismas parten de reconocer la “cultura material” de los actores involucrados, lo cual implica un conjunto de ciertos saberes técnicos y un determinado uso de materiales instalados en los grupos y en su uso cotidiano. En palabras del director:

“Nosotros aprendimos que no es que la gente quiere vivir en latas, pero a la vez que el sistema constructivo tiene que ser simple, práctico y efectivo. En un proceso de producción de 10 pasos, ellos van a elegir hacerlo en 3 pasos. Por eso el bloque de tierra comprimida no fue exitoso, no se pudo sostener. Porque tiene un proceso en que hay que curarlo, hay

que taparlo, es un proceso medio largo. En cambio, el cementicio se hace porque se autoelabora y tiene menos cuidados. Entonces hay que ir observando qué técnicas son las que se sostienen y las que impactan que tienen que ver con la practicidad, economía y rapidez de ejecución” (Entrevistado N°9, comunicación personal, 5 de septiembre de 2022).

A partir del reconocimiento de la cultura material, y de las capacidades técnicas que poseen los actores vinculados, el grupo busca coger innovaciones constructivas y organizacionales que permitan mejorar desde las viviendas hasta las posibilidades de inserción laboral de los habitantes de cada barrio. Luego, estas innovaciones y procesos de desarrollo territorial deben enfrentar los emergentes espaciales que se mencionaron con anterioridad: situaciones conflictivas, entorpecimientos burocráticos, problemáticas en la gestión, disputas barriales, entre otros.

El rol de la universidad en los procesos de vinculación con los entornos

Para avanzar con las respuestas a uno de los interrogantes planteados, en relación al rol de la universidad para fomentar procesos de vinculación, resulta preciso adentrarse en las conceptualizaciones e impresiones que manejan los miembros del equipo en relación a la incidencia que tienen las políticas universitarias en su trabajo desde el PHyC. Si bien la UNMDP, en términos generales, tiene una visión institucional orientada a la resolución de las problemáticas regionales, y cuenta con diversos recursos, volcados a las instancias de extensión y vinculación en proyectos como los llevados adelante por el PHyC (que tienen características híbridas entre investigación y extensión), esta impronta queda algo desdibujada.

En palabras de uno de los miembros del PHyC:

“Hay una vinculación muy fuerte con la teoría: si no lo llevás a cabo no podés decir cómo se hace. La explicación de cómo se hace por otros hay que analizarla y estudiarla, pero hace falta investigar en el territorio, hacer desarrollo urbano en territorio vulnerables para saber cómo se hace. Pero no hay una secretaría de investigación-acción, es solo de investigación. En la de extensión no hay espacio para investigar. Queremos investigar y

que dentro de eso esté la extensión, y meter el territorio en la investigación” (Entrevistado N°10, comunicación personal, 6 de septiembre de 2022).

La cita anterior da cuenta del déficit que se observa desde el Programa, a partir de su praxis territorial, acerca de las capacidades que tiene la universidad para gestionar interacciones donde operan tanto la esfera de producción de conocimiento como la de la intervención territorial más concreta, y que va de la mano de la creación de redes de gestión en los territorios. En esas situaciones de interacción híbridas, donde el conocimiento moldea la intervención, que es materia prima del conocimiento, se revela la necesidad de contar con espacios organizacionales algo más flexibles, menos burocráticos, y más permeables a dar cuenta de situaciones emergentes. Esto se ve luego reflejado en la evaluación positiva del personal científico que forma parte de la universidad y que realiza este tipo de intervenciones.

La relación algo ambivalente entre el PHyC y la universidad terminó modelando una manera de abordar la vinculación y la territorialización de las actividades del programa con el entorno. A su vez, propició un cierto grado de autonomía del programa respecto de la universidad. Ante la falta de un apoyo institucional ágil y concreto a la gestión de las distintas iniciativas puestas en marcha, el grupo definió armar su propia estructura de gestión territorial. La principal estrategia implicó, entonces, la creación de una fundación propia (Fundación Soporte - Yo soy porque nosotros somos) para gestionar los fondos, los convenios con terceras partes, y las alianzas con los actores territoriales.

En cuanto a la Universidad Nacional de Mar del Plata, como se vio en el segundo capítulo de esta tesis, desde su creación tuvo una vocación por atender las problemáticas del entorno, que no siempre fue de la mano con los instrumentos adecuados para llevar adelante tales cometidos. En relación con esto, uno de los entrevistados señalaba (Entrevistado N°2, comunicación personal, 20 de octubre de 2022): “En los últimos años, se desplegó un conjunto importante de políticas y dispositivos institucionales que buscaron generar los espacios de interfase para vincular de forma exitosa a la universidad con sus entornos; la suerte de estos dispositivos, sin embargo, fue dispar y algo acotada”.

De esta manera, y volviendo a las metáforas médicas, se generó una suerte de “bypass” desde el programa que permitió agilizar los convenios con terceros que estuvieron orientados a generar recursos económicos. De haber continuado dentro de la burocracia universitaria,

probablemente las iniciativas no hubieran podido ejecutarse en los mismos plazos. Esto considerando que los tiempos institucionales de la universidad muchas veces no son compatibles con actividades que buscan atender situaciones emergentes, y que requieren una velocidad de intervención mayor para abordar problemáticas urgentes.

Es así como se detectan dos problemas principales relacionados con la universidad: en primer lugar, la falta de agilidad burocrática y administrativa, para gestionar proyectos en los cuales intervienen terceras partes; en segundo lugar, las disputas internas por ocupar espacios de poder en los territorios y llevar adelante una agenda política específica. Cada gestión universitaria busca imprimir su sello y “obtener crédito” de las intervenciones que lleva adelante en el entorno. Muchas veces, eso colisiona con iniciativas de actores que no están necesariamente alineados ideológica o políticamente con la gestión de turno, y que tienen una trayectoria de cierto trabajo territorial desplegado bajo lógicas de construcción de conocimiento y vinculación diferentes.

Esto lleva a que muchas iniciativas territoriales vayan en paralelo a vinculaciones existentes, en lugar de profundizar una coordinación que surja del trabajo ya realizado por alguna de las partes. Estas redundancias terminan resultando ineficientes, al duplicar gastos y esfuerzos institucionales en contextos donde la inversión es muy escasa en términos económicos y en dedicación de recursos humanos.

Generación de núcleos productivos barriales

Como se mencionó con anterioridad, uno de los objetivos del PHyC es la coconstrucción de soluciones a problemáticas urgentes relacionadas con distintas dimensiones de la vulnerabilidad: ambiental, de hábitat y de acceso a servicios básicos. De forma subsidiaria, las intervenciones que lleva a cabo el programa pueden incluir la generación de núcleos productivos barriales, a partir de la formación de vecinos para que logren romper con alguna de las problemáticas que deben enfrentar, específicamente con respecto al empleo.

En ese marco, en el año 2005, el PHyC, la Empresa Distribuidora de Energía del Atlántico SA, y el Municipio de General Pueyrredón, firmaron un convenio tripartito para trabajar en el abordaje de problemas de grupos sociales del periurbano de la ciudad, específicamente en

cuanto a la situación crítica de falta de acceso a la energía eléctrica de forma segura. Desde el año 2011, se comenzó a trabajar con un grupo asociativo liderado por un referente del barrio Las Dalias, la empresa EDEA y el PHyC.

El objetivo del convenio fue generar un emprendimiento productivo barrial dedicado a la elaboración de pilares de hormigón. Estos eran utilizados para que viviendas sin servicio se conectaran a la energía eléctrica mediante una tarifa social. Es importante destacar que se trata de un desarrollo tecnológico llevado adelante en una unidad doméstica, localizada dentro un asentamiento informal censado como Barrio Popular (Techo Argentina, 2018).

El emprendimiento familiar continuó creciendo de forma sostenida, de la mano de una demanda creciente por parte de EDEA. Para el año 2021, ya estaba produciendo unos 480 pilares de hormigón anuales, que eran utilizados por la empresa para dar el alta de servicio eléctrico a hogares de bajos ingresos, usufructuarios de tarifa social. Desde el comienzo de la producción, el emprendimiento contó con la asistencia técnica, comercial, y personal, del equipo del PHyC. Estos se encargaron de que el emprendimiento se consolidara y de generar una serie de aprendizajes continuos que luego devinieron en innovaciones para apuntalar el crecimiento del proyecto (Melián y Sánchez Macchioli, 2023).

Esa dilatada trayectoria entre la empresa y la universidad construyó vínculos de confianza que permitieron abrir canales de negociación más directos entre el PHyC y EDEA. Esto permitió que se presentara ante sus directivos el proyecto del Barrio El Caribe, que implicaba la necesidad de provisión de servicio de electricidad a un conjunto de viviendas con un nivel muy alto de vulnerabilidad social, económica y ambiental.

El problema del agua en el barrio El Caribe

Dentro de los distintos subproyectos que lleva adelante el PHyC, en este capítulo nos vamos a concentrar en el caso que se desarrolla en el barrio El Caribe de la ciudad de Mar del Plata. Aquí se encuentra ubicado en el noroeste de la ciudad de Mar del Plata, en la intersección de las calles: Leguizamón, Av. Juan B. Justo, Alvarado y Canadá, tal como se ve en la fotografía siguiente.

Fotografía N°1: Barrio el Caribe desde el aire



Fuente: Fotografía aérea del barrio El Caribe, tomada por miembros del PHyC en el año 2020.

Este barrio surgió como un asentamiento informal a partir del año 2010, tras una toma de un conjunto de terrenos de propiedad pública y privada. Apenas se instalaron las primeras dos familias, según estos primeros habitantes eran “terrenos totalmente baldíos, sin agua, luz, ni ningún tipo de servicio. De noche esto era una boca de lobo” (Comunicación personal, entrevistado N° 12, 30 de septiembre de 2022). A partir del establecimiento de estas primeras familias, otras, en situación de vulnerabilidad habitacional, comenzaron a instalarse en el barrio. Poco a poco, fueron ocupando la zona delimitada por las calles mencionadas, llegando a contar el barrio con más de 40 familias a la fecha.

Por ser desde sus orígenes un asentamiento totalmente informal, se constituyó en un espacio con un elevado nivel de vulnerabilidad en todas sus dimensiones: habitacional, de provisión de servicios básicos (luz, gas, agua, cloacas), acceso a medios transporte, tendido de calles y veredas, acceso a servicios de salud, problemáticas de empleo, seguridad, entre otras. Esto llevó a que los vecinos comenzaran a autoorganizarse para petitionar ante las autoridades.

Una de las demandas más urgentes desde sus orígenes fue contar con servicios básicos, fundamentalmente luz y agua. Desde el primer momento, el acceso al agua fue subsanado a través de la provisión que ofrecía un vecino, de su vivienda particular, quien vivía a unas 8 cuadras del barrio. Los vecinos debían caminar esa distancia con baldes de agua para contar con una mínima disponibilidad que les asegurara la subsistencia.

Luego, lograron realizar, de forma muy precaria, el tendido de una manguera que atravesó el barrio y así se logró abastecer a la creciente cantidad de vecinos que se instalaban en la zona. Esta tenía una presión de agua muy baja, por lo cual había constantes problemas de cortes de abastecimiento. A su vez, en los momentos donde había tormentas grandes y crecidas de un arroyo que atravesaba el barrio, la manguera se desconectaba y se interrumpía la llegada del agua.

A raíz de esta problemática que no terminaba de resolverse, una de las primeras intervenciones que se pensaron, desde el PHyC y con los vecinos, fue realizar gestiones para lograr la provisión del servicio de agua potable. Así se llevó adelante un acuerdo entre el PHyC, los vecinos del barrio El Caribe y la empresa Obras Sanitarias de Mar del Plata, para llevar adelante el tendido de una red de agua que conectara la zona con el tendido de agua del resto de la ciudad. La empresa, por una cuestión de simplificar la gestión de esta obra, decidió priorizar el tendido de la red en este barrio por sobre otros que también carecían del servicio, a raíz de haber establecido una vinculación con el PHyC en la cual confiaban para realizar el trabajo territorial de vinculación con los vecinos.

Tal como señaló uno de los investigadores del PHyC: “La red puede ser llevada adelante solo si hay un grupo que la coordine. Desde una de las máximas autoridades de Obras Sanitarias de Mar del Plata, se plantea: che, como ustedes tengo 10 barrios, pero al suyo se lo damos porque están ustedes porque lo coordinan y lo gestionan. Si no, no les vamos a dar el tendido a todos”.

Es decir, a partir de un reconocimiento de las capacidades de gestión territorial del PHyC, que incluye vínculos extendidos con los vecinos, es que la empresa pública decidió tercerizar la gestión efectiva del tendido e instalación de la red de agua. En algún sentido, esto también implica explicitar las limitadas capacidades internas de gestión de la empresa de obras sanitarias, así como de la escasez en las capacidades en las burocracias estatales tanto municipal como provincial, en lo que respecta a la gestión para la instalación de servicios públicos.

Tal como se observa en el tercer capítulo de esta tesis, en el caso relevado en la unidad anterior también se presenta una situación en la cual investigadores/extensionistas de la universidad se comprometen a llevar adelante proyectos de vinculación en comunidades vulnerables, pero luego terminan atendiendo problemáticas que exceden sus objetivos. Tanto en ese caso, como en el del PHyC, se abarcan desde gestiones ante diversos estamentos estatales, hasta la misma provisión de servicios públicos básicos. La universidad como actor estatal, con un mandato de un alcance sustancialmente menor al de un municipio o provincia, terminó comandando procesos de desarrollo urbano y atención a comunidades con problemáticas socio ambientales muy profundas.

El tendido e instalación de la red de agua fueron llevados adelante a partir de cuadrillas lideradas por el PHyC, que contaron con vecinos del barrio trabajando en ellas. Estos fueron formados en algunas tareas técnicas relacionadas con el mejoramiento y la extensión de las redes de agua. Este grado de involucramiento de algunos actores territoriales fue un elemento clave de la estrategia del PHyC para construir vínculos que permitieron que el trabajo se pudiera llevar adelante sin mayores inconvenientes. Los procesos de construcción de confianza se fueron generando a lo largo del tiempo, de forma incremental, y se consolidaron a partir de comentarios que los vecinos recibían de gente conocida que ya había interactuado con el PHyC.

Es importante destacar que las esferas del conocimiento, de la acción y del espacio, se vinculan al punto tal que llegan a coconstuirse. Cada acción que se despliega afecta a la manera en la cual los distintos actores crean, utilizan y se apropian del conocimiento. Esto ocurre partiendo de la base de que la adopción del conocimiento científico depende, en primera instancia, del grado de confianza y credibilidad que se les otorgue a los investigadores o instituciones científicas participantes. Es importante destacar que dicha confianza resulta contingente en función de la configuración de las relaciones sociales presentes (Wynne, 1992)

La confianza que los vecinos depositaron en el PHyC posibilitó que pudieran percibir al grupo como un aliado que los ayudaría en la provisión del servicio, con el cual podían hacer causa común. En este caso, estamos ante lo que Borkman (1976) denomina como “conocimiento experiencial”: los conocimientos que se aprenden a partir de una participación directa en una situación de interacción son verdaderos, porque los individuos suelen confiar más en su validez o autoridad cuando su surgimiento fue a partir de un fenómeno.

Al ser algunos de los mismos vecinos quienes formaban parte de estas cuadrillas, se disminuía la probabilidad de inconvenientes o disputas, ya que podrían resolverse mediante el arbitraje del PHyC. También existía la posibilidad de que los vecinos formaran parte de la construcción, aprendieran en el proceso y desactivara cualquier desconfianza que se pudiera generar hacia el proyecto

Luego se verificó que esto no resultaría como se había planificado. Al comenzar con los trabajos, se produjeron algunos conflictos entre vecinos para decidir quién accedía primero y quién después, e incluso altercados menores con miembros del PHyC, por cuestiones propias del trabajo que se llevaba adelante. Estas discusiones surgieron a raíz del número de beneficiarios totales que debían acceder a la provisión del servicio de provisión de agua. En los relevamientos, se habían contabilizado 35 viviendas para conectar a la red, pero luego, al momento de realizar el tendido, aparecieron otros vecinos que no habían participado del proceso, quienes, al ver que el mismo avanzaba, quisieron sumarse a último momento. Esto finalmente no fue posible, y algunos quedaron para una etapa siguiente.

En paralelo al tendido del agua, el PHyC comenzó una nueva gestión. A partir de lo consensuado en una serie de asambleas barriales, se detectó que el acceso al agua potable en el interior de cada domicilio era una problemática sustantiva. Fue así como el PHyC presentó en la Secretaría de Integración Socio Urbana de la Nación un proyecto para que el Barrio El Caribe pasara a formar parte del Plan Nacional de Urbanización de Barrios Populares. El objetivo de esto fue que accedieran a los servicios básicos de agua y electricidad. De esta manera, se consiguió un financiamiento para la realización de conexiones de agua domiciliarias, la colocación de tanques de reserva de 600 litros de agua por familia, y las instalaciones internas dentro de cada una de las 61 unidades familiares involucradas, tal como se puede observar en la fotografía siguiente.

Fotografía N°2: Instalación de torres para tanques de agua en el Barrio El Caribe



Fuente: Prensa de Obras Sanitarias Sociedad de Estado - Mar del Plata, septiembre de 2022.

El nivel de percepción pública de la ciencia se vincula de forma directa al grado de credibilidad asignado por las personas a las instituciones científicas, más allá de que ese público pueda comprender el marco conceptual general bajo el cual se llevan adelante las intervenciones (Wynne, 1992). Por ello, un aspecto interesante para analizar es en qué grado la adscripción a una universidad pública modeló la percepción que tenían los vecinos hacia el PHyC y la intervención que desde el mismo se proponía.

Esto, a posteriori, terminaría por generar la confianza suficiente para el desenvolvimiento de las distintas acciones desplegadas. Los recursos que aportan los científicos a las vinculaciones con otros actores van mucho más allá de la provisión de conocimiento útil, o de competencias técnicas. Muchas veces, se involucran grados de legitimación política o cultural para actuar, así como la posibilidad de un acceso expandido a distintos sectores productivos, estatales, de medios de prensa o redes profesionales (Frickel, 2004).

La percepción que tenían algunos vecinos del barrio acerca de la universidad se puede constatar en el siguiente comentario realizado por un investigador del PHyC:

“En general, en los barrios populares y en los asentamientos informales, la problemática de la vivienda es grave y los vecinos si ven que vos tenés alguna posibilidad de acceder a recursos te los van a pedir, porque sos lo más cercano al estado que ven, lo más cercano a alguien que tiene capacidad de proveer cosas y hay mucha falta de cosas básicas” (Entrevistado N° 10, comunicación personal, entrevista del día 20 de octubre de 2022).

Resulta importante señalar la responsabilidad del estado, que tanto por acción como por omisión fue un actor central en los procesos de segregación y fragmentación socioespacial. La falta de inversión en infraestructuras sociales básicas dio lugar a que se instalara a la vulnerabilidad como el marco donde se desarrollaron las experiencias vitales de buena parte de la población de este tipo de espacios (Soldano, 2011). Como consecuencia, se desataron sobre estos territorios procesos de informalidad laboral creciente, estrechamiento de las vinculaciones sociales, y exposición a situaciones riesgosas de diversa índole, como violencia o inseguridad alimentaria. Resta preguntarse si dicha retirada es producto de la mera desidia o es una praxis política deliberada, que genera situaciones de exclusión de forma sistemática, al no asumir la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de derechos básicos.

En ese marco de ausencia estatal a nivel municipal, provincial o nacional, la universidad pareció convertirse en el único agente del estado con cierta presencia en esos territorios colapsados. Esto desencadenó crecientes demandas de soluciones a problemáticas socioespaciales hacia el PHyC. Fue así como se conjugaron dos elementos principales, ante los cuales los vecinos decidieron participar de la red de gestión que se propuso desde el PHyC. En primer lugar, existía un reconocimiento de que las gestiones que ellos intentaron realizar no lograron tener el alcance que necesitaban, lo cual los llevaba a buscar de la experticia técnica y capital social provisto por el PHyC; por otro lado, la trayectoria del programa en distintos barrios había generado un efecto de transmisión “boca a boca”, que funcionó como carta de presentación y que generó la confianza necesaria como para trabajar en conjunto.

El problema de la energía en el barrio El Caribe

En cuanto a la provisión del servicio de energía eléctrica, la situación fue desde el inicio muy conflictiva, porque una de las principales problemáticas que poseía el barrio El Caribe era que la mayor parte de sus habitantes no contaban con sus propiedades regularizadas a través de escrituras. Esto les imposibilitaba solicitar el servicio de conexión eléctrica a la empresa que

proveía el suministro por una de sus políticas internas, que impedía avanzar con la conexión a menos que la vivienda estuviera regularizada. Eso implicó que, desde un primer momento, los vecinos solucionaron su acceso a la electricidad a partir de la realización de conexiones clandestinas al tendido público de electricidad.

Esto trajo aparejada toda una serie de situaciones problemáticas: en primer lugar, el acceso a la electricidad era extremadamente inseguro, tanto desde la conexión a los cables del tendido de la calle, como de las conexiones internas dentro de cada una de las viviendas; siempre estaba el riesgo latente de que se produjeran incendios o electrocuciones. Por otra parte, la empresa periódicamente hacía controles de conexiones clandestinas, y “desenganchaba” a los vecinos que no tenían medidores, dejándolos sin servicio de electricidad.

A partir de la intervención del PHyC, se identificó, en conjunto con los vecinos, que el acceso seguro y universal a la energía eléctrica era un problema prioritario para ser abordado. Los vecinos habían intentado llevar adelante gestiones con la empresa prestadora del servicio, pero siempre con resultados infructuosos. A partir de la intervención del Programa, y de las gestiones llevadas adelante ante la empresa, esta dinámica cambió por completo, debido a que los investigadores de la universidad tenían una amplia experiencia en vincularse con EDEA a partir de haber colaborado en otros proyectos de intervención territorial en la ciudad para la provisión del servicio de energía. Aquí podemos identificar en qué medida los científicos de la universidad son investidos de un grado alto de legitimidad, en función de su poder de “proporcionar conocimientos técnicos confiables, que las comunidades y/o actores estatales necesitan, pero no pueden adquirir eficientemente por su cuenta” (Frickel, 2004).

Esta gestión que aquí se ve relatada fue producto de un largo proceso de negociación colectiva entre las partes involucradas, ante lo cual, el Programa aportó experticia técnica y capacidad de negociación con actores de procedencias muy disímiles, y que contaban con capitales socioculturales muy dispares, así como intereses decididamente contrapuestos. En función de esto, se puede pensar que el PHyC asume un rol de intermediario entre actores que tienen conocimientos diversos (Cozzens y Sutz, 2012). Estos intermediarios juegan un rol central en los procesos de cambio tecnológico, al procesar información, seleccionar socios adecuados para colaborar, mediar en los intercambios de conocimiento, así como también en probar y validar tecnologías y arreglos institucionales (Dhamankar, 2011).

Algunas funciones de intermediación, tal como puede observarse en el caso del PHyC, tienen un enfoque sistémico y cumplen un rol de interfaz entre usuarios, empresas y otros actores. Su función, además de los intercambios de conocimiento, incluye la gestión integral de la red, la articulación de la demanda y la provisión de infraestructura para la toma de decisiones (Dhamankar, 2011).

Estos saberes en circulación dieron lugar a que se produjera una negociación en términos de mayor confianza y horizontalidad, y que la empresa de electricidad se comprometiera a promover el acceso seguro a la energía eléctrica en el barrio, a que se instalaran pilares de hormigón para la instalación de medidores, y a que los vecinos contaran con tarifas de interés social. Para el caso de quienes no podían pagar el servicio bajo ningún concepto, se permitió que pudieran seguir colgándose de la luz de forma irregular, solo con la condición de que no se excedieron en cierto tope del consumo mensual.

Esto demuestra la importancia de entender las estrategias que traza el PHyC en el territorio para constituirse en intermediario y así facilitar las conexiones de los actores que forman parte de la red. Esto incluye roles que van desde la recopilación, la creación y la difusión del conocimiento, hasta mediar en los diálogos, proporcionar orientaciones, permitir la identificación de recursos y crear oportunidades para utilizarlos (Howells, 2006; Klerkx y Leeuwis, 2008, como se citó en Dhamankar, 2011). Esta incorporación de habilidades, conocimientos y prácticas se puede observar a partir del siguiente comentario de un miembro del PHyC:

“La intervención pasa por los procesos comunitarios, en la apropiación, en la red, y por cosas mucho más invisibles: el tipo cambió de laburo, se hizo monotributo. Que a partir de una tecnología se generen redes de vinculación comunitaria. Que el vecino de la esquina, éste, éste y éste (sic) se vinculen y logren solucionar problemas. Colocar un caño bajo tierra, de manera que circule el agua, o enderezar y sacar ese basural. Y todo a partir de una red de vinculación” (Entrevistado N°11, comunicación personal, 5 de septiembre de 2022).

Los saberes acumulados en otros procesos de vinculación que llevó adelante el programa en otros barrios de la ciudad de Mar del Plata fueron puestos en juego en esta situación de interacción que contaba con desafíos importantes. Se trataba de un barrio no consolidado, en

expansión, con elevados niveles de vulnerabilidad que, como se mencionó anteriormente, incluía la carencia de acceso a todo tipo de servicios.

El rol de las trayectorias en las situaciones de interacción

Desde los actores barriales de mayor peso, en cuanto a dedicación y liderazgo personal, uno de los principales elementos que se pueden identificar en la situación de interacción es la importancia que tuvieron las trayectorias personales previas de militancia a la hora de generar comunicación e interacción social con el resto de los vecinos. Algunos de los vecinos/actores barriales que motorizaron estas vinculaciones con la universidad y la empresa de energía eléctrica tenían una dilatada trayectoria de militancia política en diversas organizaciones, como Barrios de Pie, MTR, Polo Obrero, entre otras.

Los aprendizajes que cultivaron en estas organizaciones jugaron un rol fundamental a la hora de iniciar procesos de negociación con actores extra barriales. Este capital social generado a partir de la militancia estuvo vinculado principalmente a internalizar modos de acción específicos que, partiendo desde situaciones de vulnerabilidad, permitieron desplegar estrategias de negociación ante actores que ocupaban posiciones de poder. Frente a este tipo de disparidades, las organizaciones sociales y políticas suelen ocupar los espacios de forma física, contraponer lógicas y empoderar a sus miembros, fundamentalmente en cuanto a su capacidad de intervenir espacialmente e interactuar con otros actores del entorno.

Un hecho a destacar es que la empresa de provisión de electricidad, en gran parte de sus áreas técnicas y comerciales, cuenta con mandos medios y cuadros técnicos que tienen trayectoria de gestión territorial. Parte de su estructura también tiene un grado elevado de experticia en estos procesos de negociación que se producen en barrios populares con alta vulnerabilidad social. En el caso particular del barrio El Caribe, parecieron presentarse dos culturas contrapuestas dentro de la empresa: una que apuntaba netamente a promover de forma activa la mercantilización del servicio, y otra con un mayor “juego” político, y, por ende, con mayor sensibilidad a la resolución de problemáticas sociales, especialmente en el caso de territorios vulnerables como el del barrio en cuestión. La empresa ya venía trabajando con el PHyC desde hacía muchos años, en un proyecto de desarrollo social y productivo en el barrio Las Dalías.

Algunos de estos aprendizajes, llevados adelante por los distintos actores involucrados, constituyen un conjunto interiorizado de modos de relación de cada individuo con el espacio, lo que en términos de Lussault (2015) podría denominarse capital espacial. Los mismos son tanto cognitivos como prácticos, y habilitan a los individuos el ejercicio de formas complejas de interacción con el entorno, y mayor capacidad de intervención espacial. Las trayectorias previas y los conocimientos allí acumulados movilizan capacidades para las acciones específicas (Stehr, 1994), que se suman a los nuevos conocimientos y disposiciones que se generan en la interacción con el Programa a partir de relaciones de copresencia intensa y sostenida en el tiempo, que surgen a partir de las distintas iniciativas que se desplegaron en el barrio (Goffman, 2001; Schutz, 2003; Bourdieu, 2011).

Desde ese momento, algunos de los actores clave del barrio terminaron fomentando procesos de organización colectiva con el resto de los vecinos, que adoptaron la forma de asambleas informales a partir de las cuales se tomaban las decisiones colectivamente, al mismo tiempo que se organizaron internamente para presionar a la empresa con un bloqueo en sus puertas, a modo de piquete, para que el tendido del servicio fuera efectivamente realizado. Estas estrategias de presión sobre la empresa de electricidad fueron producto directo de estas redes que se tejieron entre los vecinos y el PHyC, que no eran públicas ni privadas, sino que abarcaban el espacio entre ambas esferas (Frickel, 2004); y se construyeron a lo largo del tiempo en interacciones que mantenían una interacción regular.

Como vemos aquí, la relación entre conocimiento y acción es contingente y depende de muchas variables intervinientes, que tanto pueden fortalecer como debilitar el curso de las acciones. Es así como se teje la trama de un contexto espacial específico, que termina por afectar las modalidades de las tomas de decisiones y las acciones posibles que pueden ser desplegadas (Werlen y Meusberger, 2017).

En resumen, por un lado, tenemos la experticia técnico-constructiva y las tecnologías de gestión generadas por el programa a partir de experiencias previas de trabajo territorial. Por el otro, se observan entre los vecinos trayectorias de militancia para la conquista de derechos, que fueron clave a la hora de negociar con la empresa de energía eléctrica.

Aunque es necesario hacer una aclaración: también desde el PHyC se observa que los científicos intervinientes no lo hacen desde una posición de aparente neutralidad valorativa. De

hecho, varios de ellos se asumen como científicos activistas, que sienten un compromiso concreto por mejorar las condiciones de vida de los barrios donde intervienen. La creación de conocimiento para estos expertos va de la mano y es fruto de las intervenciones que surgen en copresencia con los interlocutores barriales. Es así como los científicos se animan a ir más allá de los intereses profesionales definidos por la disciplina, para involucrarse tanto en política, como en investigación relacionada con la acción o en diversos asuntos de interés público (Frickel, 2004). Sin embargo, este involucramiento no está exento de riesgos: fundamentalmente de tener algún tipo de “sanción” por parte de la comunidad científica, al no situarse en un terreno más neutral, sin un anclaje político tan directo o expuesto. (Frickel y Arancibia, 2022)

Situaciones de interacción en territorios altamente vulnerables

En el marco de esta situación de interacción, se produjeron diversas coyunturas que debieron estar sujetas a negociación entre los vecinos del barrio. Una de ellas estuvo relacionada con la necesidad de realizar la nomenclatura de las calles internas, dado que estas se habían trazado siguiendo de forma aproximada la dirección de calles vecinas, aunque el municipio no había participado de esa situación. La nomenclatura era necesaria para realizar el tendido del servicio de electricidad, y para identificar a las viviendas que terminarían usufructuando el servicio. En ese contexto, se realizó una jornada en la cual se creó la nomenclatura de las calles, de acuerdo con la ubicación aproximada y tratando de que las mismas coincidieran con calles cercanas. Luego se procedió a numerar las casas, de forma algo aleatoria, intentando que la numeración coincidiera de modo ascendente con la que tenían las casas de un barrio cercano.

En este contexto, se produjo un hecho singular: en una de las calles que atravesaba el barrio El Caribe, en la actualidad es la continuación de la calle Avellaneda terminaba en un callejón sin salida, dado que el lugar por donde debía pasar estaba ocupado por un predio tomado por un chatarrero. Justamente, a través de dicha calle, EDEA tenía previsto instalar la subestación transformadora de electricidad que abastecería al barrio, por lo cual una de las condiciones que puso para hacer el tendido eléctrico era que el mismo debía ingresar por esa calle, que a su vez debía estar liberada y nivelada.

Esto generó un conflicto con el chatarrero, quien durante un tiempo se negó a reducir el tamaño de su terreno, que constituía también su lugar de trabajo y acopio de materiales. Luego de la intervención del PHyC y de diversos referentes del barrio, se logró, de común acuerdo, que el chatarrero cediera parte de su terreno para la apertura de la calle Avellaneda.

Aquí apareció, de forma patente, la experticia del grupo para avanzar en gestiones intergubernamentales, poniendo en juego su capital cognitivo y lingüístico, y su conocimiento de la normativa legal para interceder ante el municipio. El PHyC, en conjunto con los vecinos, presentaron una nota a la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano de Mar del Plata, solicitando la pronta apertura de la calle Avellaneda, sosteniendo que:

“Las últimas dos semanas, en base a esfuerzos propios, realizamos la limpieza y acondicionamiento de la calle Avellaneda, en el tramo entre las Calles Leguizamón y Calle Wilde. La calle Avellaneda se encontraba ocupada por un vecino que no respetaba la continuación de la trama urbana, la cual es imprescindible para el ejercicio de la ciudadanía, puesto que por ella circularían ambulancias, móviles de seguridad y otros servicios básicos que nos conecten con la ciudad” (Entrevistado N°10, comunicación personal, 20 de octubre de 2022).

El municipio, entonces, aportó una máquina para nivelar el terreno, y de esta manera se dio apertura a la calle, con la consiguiente posibilidad de que pasara el tendido eléctrico por ese sector del barrio. Esto demuestra lo contingente de los procesos de urbanización popular: de forma recurrente, deben enfrentarse a situaciones inesperadas que envuelven a distintas dimensiones de la vulnerabilidad, y que obligan a la búsqueda de acuerdos que implica un grado de flexibilidad organizacional elevado por parte de los actores involucrados. A su vez, en cada una de estas instancias de interacción, se negocian significados de lo que implica la intervención, se intercambian experticias, capitales (sociales, cognitivos y espaciales), y se generan procesos de aprendizaje colectivo.

Otro ejemplo de una situación emergente se produjo cuando, en la mitad del proceso de negociación con EDEA para la provisión del servicio eléctrico, llegó una cuadrilla operativa de la empresa y desconectó a todos los vecinos que estaban “enganchados” del servicio. Por más que la misma empresa habilitara de hecho las conexiones clandestinas, ante el tácito reconocimiento de que había viviendas que no recibirían el servicio en el corto plazo, y que

tampoco podrían pagarlo, había cuadrillas que reportaban a distintas áreas, y no todas tenían conocimiento sobre esto.

Esta situación implicó gestiones de emergencia, llamados, presencia en el barrio para que la situación se pudiera solucionar. Otros emergentes tenían que ver con situaciones recurrentes de violencia intrafamiliar o interpersonal entre habitantes del barrio: por ejemplo, una de las vecinas entrevistadas sufrió, en diversas oportunidades, hechos de violencia por parte de un familiar, y por su actuación personal destacada en el barrio, generó repercusiones colectivas que requirieron un grado de acompañamiento específico también por parte de miembros del programa.

La contemplación del PHyC frente a las situaciones emergentes provocó modificaciones en las estrategias del grupo y, por consiguiente, en los perfiles de sus integrantes, llevando a que algunos de sus miembros se enfocaran más en la gestión territorial, y en la resolución de problemas que en las actividades de investigación-vinculación más tradicionales. Esto trajo aparejado un balance entre la dedicación más plena a lo territorial y la necesidad de cumplir ciertos objetivos para progresar en la carrera académica.

Volviendo a la pregunta acerca del impacto de la conquista de la provisión de servicios públicos, se puede detectar cómo el tendido de luz y agua permitió a los vecinos concentrarse en la resolución de otras problemáticas. Uno de los proyectos colectivos que se produjo a continuación fue el establecimiento de una huerta comunitaria, para abastecer a los comedores del barrio que se encontraban a menudo con insuficiencia en la provisión de alimentos.

De esta forma, se puede observar en las trayectorias individuales un proceso de aprendizaje colectivo intensivo, que quedó establecido en las prácticas y que permitió incorporar nuevas líneas de trabajo, pero siempre con la misma dinámica de toma de decisiones asamblearia y de trabajo conjunto. Las situaciones emergentes, que mencionamos anteriormente y estaban más vinculadas a procesos de cierta “emergencia”, luego dieron lugar a que los vecinos del barrio se organizaran y comenzaran a abordar de forma autónoma otras problemáticas, como la alimentación.

A partir de un contacto con el dueño de un vivero de la ciudad, le plantearon si era posible producir sus propios alimentos en una huerta comunitaria. Como respuesta, les donó semillas

para que comenzaran a trabajarlas. También los asesoró acerca de cómo debían hacer, y así fue como comenzó un nuevo microemprendimiento barrial, en este caso orientado a resolver cuestiones de inseguridad alimentaria. A partir de este tipo de situaciones, el barrio se comenzó a configurar como un espacio de encuentro, donde se cruzaban trayectorias diversas y grupos o sujetos con culturas distintas (Massey, 1991). En alguna medida, este tipo de iniciativas podrían pensarse como estrategias de los vecinos para romper con la insularización, y crear redes con actores de diversa procedencia, que les ayuda a compensar la ausencia estatal con procesos de autoorganización local.

Recapitulando

A partir de lo expuesto anteriormente, aparecen nuevos interrogantes: ¿cuáles son los alcances y limitaciones que tienen este tipo de intervenciones, mediante las que grupos de una universidad se ocupan de la gestión para la provisión de servicios públicos, lo que constituye una función básica del estado? Si bien las universidades que investigamos son públicas y estatales, en ciertos casos cabe preguntarse cuál es el máximo alcance que pueden tener las intervenciones de un grupo universitario en su entorno. Esto es así por la alta demanda de recursos humanos que conlleva este tipo de interacciones, y porque, como se ha visto a lo largo de este capítulo, los territorios vulnerables sufren procesos de insularización que son muy complejos de abordar. Requieren de muchos recursos, la constitución de redes densas para abordar las problemáticas, y un financiamiento de envergadura junto con una fuerte sensibilidad para lidiar con personas que han sido expoliadas de casi todo.

¿En qué medida la universidad como institución da cuenta de este tipo de interacciones y qué rol juega para promover círculos virtuosos de vinculación con el entorno? A partir de lo recabado en este capítulo, el rol institucional de la universidad parece ser poco significativo para el caso seleccionado. La cantidad de fondos que invierte para los proyectos de extensión es muy exigua, y la sinergia que se produce entre los distintos programas de la universidad, enfocados a la extensión y el PHyC, tiende a ser muy baja. Esto se produce fundamentalmente porque la universidad tiene su propia agenda territorial, que no siempre coincide con las agendas de los investigadores/extensionistas quienes ya tienen un trabajo territorial desplegado, como es el caso del PHyC. Por ende, se detecta una dispersión de esfuerzos institucionales que implica cierta ineficiencia en la asignación y utilización de recursos escasos.

¿Cómo aparece concebida la dimensión espacial en las situaciones de interacción? En casos como el que reseñamos en este capítulo, se observa que desde el PHyC hay un esfuerzo por desarrollar una conceptualización algo más totalizadora, que incluya un análisis más sofisticado del contexto espacial y una praxis acorde con este reconocimiento. Esto conlleva haber desarrollado una cierta sensibilidad para comprender que el espacio funciona como un contenedor de las prácticas, pero también que estas están constantemente produciendo espacio. De esta manera, la producción de espacio en territorios altamente vulnerables debe hacerse en función de las subjetividades de quienes lo habitan, teniendo en cuenta sus expectativas, conocimientos y reconociendo los elementos de ese contexto que puedan actuar como factores limitantes: desde los problemas graves de infraestructura, la presencia de narcotráfico y delincuencia, hasta situaciones de violencia social o intrafamiliar.

En el caso de los territorios altamente vulnerables, y según se ha visto a lo largo de este capítulo, las intervenciones universitarias que terminan teniendo mayor grado de éxito son las que generan disposiciones espaciales nuevas, tejen vinculaciones densas y configuran relaciones novedosas con el entorno, de codiseño de problemas y de coproducción de soluciones, para promover una reestructuración más amplia de las relaciones de poder existentes en el territorio.

Capítulo 5: Producción de alimentos saludables a base de pescado en emprendimientos de la economía social y solidaria

Introducción

En este capítulo, se estudia el proyecto "Soberanía Alimentaria: producción sostenible de alimentos saludables a base de pescado (prepizzas y pescado cocido al vacío) en emprendimientos de la economía social y solidaria". El mismo surgió en el Departamento de Ingeniería Química y en Alimentos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y presentado a la convocatoria de “Ciencia y Tecnología contra el Hambre”, financiada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina.

El proyecto surgió con el objetivo de promover la alimentación sana y segura en los partidos de Mar Chiquita y General Pueyrredón, a partir de fomentar la producción de alimentos saludables que tomen como componente nutricional principal a las proteínas de pescado, y que sean llevados adelante por emprendimientos provenientes de la economía social y solidaria. De esta manera, proponía abordar tanto una problemática alimentaria, como productiva, así como de abordaje de una vulnerabilidad de carácter eminentemente socioespacial.

Trayectoria personal del director del proyecto y sus motivaciones para la vinculación

El surgimiento del proyecto se dio a instancias de un docente e investigador de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que a efectos de mantener su anonimato denominaremos por el nombre de fantasía Roberto Gutiérrez, que es Ingeniero en Alimentos de la Universidad Nacional de Quilmes e Investigador Asistente del CONICET, radicado en el Grupo de Investigación “Preservación y Calidad de Alimentos”, del Departamento de Ingeniería Química y en Alimentos perteneciente a la Facultad de Ingeniería. Previamente, trabajó como becario doctoral en la Facultad de Ingeniería de la UNMDP, donde investigó formas de conservación de productos pesqueros y desarrollo de nuevos productos alimenticios. Según sus palabras:

“Por suerte, entre que primero tuve la beca postdoctoral, y después entré a carrera investigador y ahí es como que puse un freno, paré la pelota y me hice la pregunta si quería seguir investigando para publicar *papers* o empezar a aplicar un poco e intentar solucionar problemáticas socioproductivas” (Entrevistado N°14, comunicación personal, 25 de agosto de 2021).

Este tipo de posicionamientos se dio en un contexto más general, tanto a nivel del país como de las instituciones científico-tecnológicas, que promovió un involucramiento mayor de los distintos actores del sistema científico en la resolución de problemáticas socioespaciales. Específicamente dentro de las universidades, desde los discursos institucionales y a partir de una constelación de políticas internas y de la creación de espacios de encuentro, se fomentó que los investigadores contribuyeran a la “misión regional” de la universidad.

“Al margen de esto, creo que el sistema científico se ha ido de tema y nuestras investigaciones, nuestros objetivos, se basan en cuestiones, investigaciones que sean publicables y que a alguna revista le interese lo que vos estás haciendo... y si eso resuelve alguna problemática, o le sirve a la sociedad va al margen, es como que se puso el foco en otra cuestión. Me parece que eso no está bien, por eso yo tomé este camino. Ahora más todavía, hay alguna forma que tiene el sistema de ver si vas a estar trabajando; por ejemplo, con los PDTs estamos escribiendo para presentarnos al banco de estos proyectos. Yo quería volcarme más a esta actividad, pero mi directora todavía es el día de hoy que me sigue pidiendo que publique y bueno, no es fácil, pero hasta ahora no te genera un inconveniente tampoco para tu carrera dentro de la institución” (Entrevistado N°14, comunicación personal, 25 de agosto de 2021).

Aquí vemos cómo se reproduce, dentro del discurso de Gutiérrez, esta tensión clásica en las discusiones sobre pertinencia y relevancia de la investigación científico tecnológica: por un lado, las necesidades o valoraciones propias de la “ciencia académica” tradicional, que se evalúa desde la producción científica publicada en revistas académicas, sobre todo internacionales, que son quienes fijan la agenda y promueven determinadas líneas de investigación; por el otro, la vinculación con las problemáticas que se detectan en el entorno universitario, que implican otro tipo de involucramiento y de acciones relacionadas con el desarrollo de tecnologías sociales de gestión y vinculación con actores externos a la academia.

Lo que aparece configurado en la trayectoria académica y profesional de Gutiérrez se inscribe en un marco más amplio de problemáticas, que atraviesan a buena parte del sector científico y tecnológico del país: cómo conjugar las evaluaciones que se realizan al personal científico-

tecnológico, que permiten evaluar la producción y así promoverse en la carrera de investigador o tecnólogo, con la necesidad creciente que surgió en las últimas décadas, en las instituciones científicas y universitarias, de abordar problemáticas socialmente relevantes.

Estas dos dimensiones son parte de un debate extendido, en la comunidad académica y en los decisores de política pública que abordan temáticas científicas. No existe un consenso definido acerca de cuál podría ser el equilibrio justo entre atender a criterios netamente académicos, versus considerar criterios vinculados a la resolución de problemáticas sociales. Desde algunas instituciones científicas como el CONICET, desde hace más de una década, se ha venido impulsando un cambio en los criterios de evaluación a fines de poner en igualdad a los perfiles más orientados a realizar ciencia más “académica”, orientada a publicaciones en revistas con referato, con los perfiles de tecnólogos y científicos que abocaron sus trayectorias a un compromiso más estrecho con la resolución de problemáticas de actores del entorno.

Abordaje de la universidad en el entorno vulnerable de Santa Clara

Tal como se abordó en el segundo capítulo, la UNMDP tiene como uno de sus mandatos principales promover la extensión en el entorno regional. Esto, a nivel institucional, es operacionalizado a partir de una serie de políticas internas y dispositivos de gestión. Para el caso que relatamos, el dispositivo que tiene mayor importancia es el Centro de Extensión Universitaria Santa Clara, localidad ubicada en el Partido de Mar Chiquita. Este fue inaugurado en el año 2016, en función de un convenio suscrito entre la UNMDP y autoridades municipales del Partido de Mar Chiquita. El objetivo era trabajar problemáticas locales identificadas por vecinos, referentes, así como por agentes estatales que trabajaran en la zona. Entre las principales áreas de actuación del CEU se encuentran los barrios: Mar de Cobo, La Baliza, La Caleta, Playa Dorada, Santa Elena, Frente Mar, Atlántida; Santa Clara del Mar, Camet Norte, Parque Lago y Balneario Parque Mar Chiquita. Desde el año 2019, el territorio de actuación se extendió a las zonas internas, o no costeras de Mar Chiquita, abarcando todo el partido.

Sus principales ejes de trabajo son la educación, la salud colectiva, la cultura, el desarrollo local y el hábitat y medio ambiente. Como señalan desde su página institucional, el CEU Santa Clara tiene por objetivo:

“Consolidarnos como nexo cooperador entre los diversos agentes sociales: dependencias estatales, instituciones educativas, sanitarias, culturales, organizaciones vecinales y barriales, organizaciones de la sociedad civil, entre otras. Desde los principios de la extensión crítica, las epistemologías del sur, la educación popular y la investigación-acción-participación, se pretende contribuir en los procesos de organización popular promoviendo y/o acompañando espacios participativos autogestionados y autónomos. Fomentamos prácticas integrales junto a la docencia y la investigación basando nuestro trabajo en el cuidado y respeto hacia el territorio, entendiendo que este tiene sus propias lógicas y dinámicas de acción” (CEU Santa Clara, 2022).

Al respecto de sus funciones y de su modalidad de trabajo, la extensionista que estuvo a cargo del CEU, desde su creación hasta el año 2020, resalta en la entrevista las dificultades de la construcción de confianza en el territorio, particularmente en localidades chicas en las cuales resultaba complejo que las personas se familiarizaran con instituciones híbridas como los centros de extensión. De acuerdo con sus palabras:

“La gente no entiende los nombres que nos ponemos desde la academia, a veces también esos nombres difíciles con personas que no están vinculadas o familiarizadas con lo institucional. La verdad es que no hay una representación clara de la universidad. Primero es a título personal, o la universidad, después explicamos cómo trabaja el centro” (Entrevistada N°13, comunicación personal, 2 de septiembre de 2021).

La generación de estos vínculos personales parece fundamental para cimentar los procesos de comunicación con el público del entorno. A su vez, permite crear la base a partir de la cual se puedan generar lazos con la comunidad, y establecer procesos de intercambio horizontales. En este sentido, es importante rescatar algunas de las conceptualizaciones que guiaron a quienes trabajaron en los CEU que, al menos desde un plano discursivo, definen un modelo de gestión de las relaciones de la universidad con el entorno.

De forma recurrente, se mencionan a las epistemologías del sur o a la extensión crítica como los marcos conceptuales bajo los cuales buscan desplegar sus acciones. El abordaje territorial, bajo estas conceptualizaciones, parte de la base del diálogo entre saberes académicos y saberes populares (Tommasino y Cano, 2016), en marcos interactivos donde la copresencia resulta un elemento fundamental. Las funciones que ocupan los CEU, en ese contexto, promueven prácticas de investigación-acción que fomenten procesos de desarrollo local, a partir de espacios autogestivos o autónomos.

La vinculación del CEU Santa Clara con el proyecto de Gutiérrez, en principio, fue posible porque la coordinadora del centro y el investigador eran vecinos. La coordinadora comentaba en la entrevista lo dificultoso que resultaba encontrar investigadores de la UNMDP que se acercaran a los territorios más alejados de Mar del Plata. Por ello, contar con un investigador radicado en la zona, y que era conocido por algunos vecinos, resultaba un factor determinante para iniciar un camino de vinculación conjunto. La construcción de lazos de confianza sirve, en estos contextos, como un elemento mediador entre el conocimiento académico y la experticia técnica, con los actores situados localmente.

Esto nos lleva a preguntarnos acerca de las lógicas con las cuales la universidad se acerca a los entornos, y de qué forma, desde los marcos conceptuales que utilizan, se vincula con los actores territoriales. Según una entrevistada:

“La universidad tiene esta lógica extractivista que viene y se va, viene, hace las encuestas que necesita, está como necesita y después no vuelve. Eso es algo que lo hemos hablado mucho también dentro del equipo y con Roberto (Gutiérrez), sobre todo cuando pensamos en estas lógicas de la extensión y el rol de la universidad en el territorio, y fue algo que lo trabajamos un montón. Por eso mismo, vinculado con la cooperativa, siempre es un trabajo muy solidario, poner a disposición siempre las herramientas que existen. Al principio, eso cuesta hasta que te conocen y que se sabe desde qué lugar uno trabaja, ahí es que abren las puertas. Pero enseguida, y sobre todo en este Partido, donde cuesta que otros grupos participen. Ahora sí hay algunas redes comunitarias que vienen trabajando todo el tema de agroecología, de los autóctonos de la flora local y, nada, siempre tienen muchas ganas que la gente participe y sobre todo cuando decimos venimos de la Universidad... hay una expectativa muy grande” (Entrevistada N°13, comunicación personal, 2 de septiembre de 2021).

Las vinculaciones que se establecen en territorios de una menor escala, como los del Partido de Mar Chiquita, muestran que, a la par de una valoración positiva de la universidad y del conocimiento que de allí emana, es importante establecer vínculos personales de copresencia previos que den marco a la interacción. Esta particularidad fue reconocida desde el CEU, al fomentar el establecimiento de vínculos interpersonales directos con vecinos, organizaciones sociales y con investigadores y extensionistas que pudieran participar de las intervenciones. En el caso particular del vínculo con Gutiérrez, la entrevistada señalaba:

“Fui mucho también a la Facultad de Ingeniería, para situarme en su territorio también, para que sea otra lógica de trabajo. Y bueno, ahí empezamos a trabajar juntos y a pensar en cómo darle esta vuelta desde la sensibilización comunitaria y cómo el vecino y la vecina se podía apropiarse de la propuesta que ellos tenían también. La idea era que hicieran juntos, digamos que codiseñaron este proyecto de extensión y el proyecto de extensión estaba abocado a ser aplicado en este CEU particular de Santa Clara” (Entrevistada N°13, comunicación personal, 2 de septiembre de 2021).

En todo proceso de vinculación científico-tecnológico-social en el cual esté involucrada la universidad, se pone en juego la generación de expectativas por parte de los actores de la sociedad que se vinculan. La conformación de estas expectativas está relacionada de forma directa con el reconocimiento social que tiene la pericia de los profesionales universitarios, a los cuales se atribuye el dominio de ciertos campos de saber (Buschini, 2020). Por ello, estas aparentan tener una mayor autoridad para quienes se ven a sí mismos con poca influencia sobre el resultado de una promesa tecnocientífica (Borup *et al.*, 2006). Esto sucede en función de una percepción que se construye acerca de la potencial utilidad de los productos y conocimientos que circulan en la situación de interacción para el abordaje de alguna problemática local (Di Bello, 2013).

De esta manera, desde la sociedad se conforman un conjunto de expectativas que están relacionadas con la utilidad potencial que se espera usufructuar, a partir de los objetos de conocimiento que circulan dentro de los marcos interactivos propuestos desde la universidad (Di Bello, 2013). Estas son fundamentales para coordinar diferentes comunidades y grupos de actores, así como también para explicar las dinámicas que se producen entre diferentes escalas o niveles de organización. A su vez, cambian con el tiempo en respuesta a condiciones nuevas del entorno o a problemas que emergen (Borup *et al.*, 2006).

Esta construcción de un conjunto de expectativas está dada por una creencia bastante extendida de qué problemáticas sociales complejas pueden ser abordadas por el sector científico-tecnológico que va a aportar o extender una solución. Sin embargo, este presupuesto es refutado al considerar que la respuesta a una problemática compleja emerge de la interacción de muchos actores, en procesos sociales mucho más extendidos (Sarewitz, 2004).

Primeros pasos del proyecto de Ciencia y Tecnología contra el Hambre

La principal línea de investigación que lleva adelante Gutiérrez está enfocada en “Desarrollo de alimentos a base de pescado y la gestión para su producción”. En ese marco, ha desarrollado numerosas publicaciones acerca de manipulación y producción de alimentos de origen pesquero y talleres de evaluación sensorial sobre los alimentos producidos. La participación en congresos, que exponían problemáticas relacionadas con la alimentación en contexto de alta vulnerabilidad social, interpeló al investigador, quien, a partir de esos intercambios, comenzó a explorar la posibilidad de vincularse con el entorno, de modo tal que le permitiera articular el saber experto que estaba desarrollando con demandas surgidas de su entorno más cercano.

El trabajo con los vecinos para el diseño del proyecto de CCH implicó diversas instancias, entre las cuales se realizó una encuesta en una escuela de Santa Clara. Es importante destacar que una de las principales aristas del proyecto de prepizzas de pescado era su propósito de suministrar alimentos nutritivos a comedores escolares de sectores vulnerables del partido. Se partió de la base de considerar que el consumo de pescado contribuía a la equidad alimentaria, a partir del consumo de nutrientes que no eran incorporados por otras vías. Fue así como Gutiérrez se acercó a una escuela del Partido de Mar Chiquita, que quedaba a diez cuadras de su casa, y presentó ante sus autoridades la posibilidad de incorporar pescado en la dieta de los alumnos que comían en el comedor escolar.

En este establecimiento educativo, se consultó a los estudiantes si les gustaba el pescado, si lo consumían y, en el caso de que no, por qué no lo hacían. Allí se detectó que el 70% quería consumir pescado, pero que no se lo incorporaba por falta de hábito o de posibilidades económicas de acceso. Esta última estaba dada principalmente por su costo elevado, y por los escasos medios de comercialización que tenía el pescado en el partido de Mar Chiquita. A su vez, la pesca artesanal contaba con ciertas limitaciones legales para abastecer de pescado de forma directa a la población.

A partir de la realización de talleres de sensibilización y degustación, que se realizaron en diversos comedores escolares del Partido de Mar Chiquita, se observó que el grado de aceptación que tuvieron las prepizzas de pescado fue muy alto. Esto indicaba que el proyecto podría ser factible y “adoptable” por los consumidores: implicaba aumentar el consumo de

pescado a través de un alimento tan popular como la pizza, que tenía aceptación y permitía incorporar merluza en forma de harina la cual, a su vez, podía ser producida por productores locales, fomentando también el desarrollo económico regional.

Gutiérrez conoció la existencia del CEU por medio de conversaciones con las autoridades de la universidad, luego de lo cual se comunicó con su coordinadora, quien pasaría a formar parte del primer proyecto de extensión presentado por el equipo. Como manifestaba el entrevistado:

“Mi línea de trabajo, en parte, surgió de un congreso que fuimos de alimentación infantil escolar. A partir de ahí, surgió la idea y presentamos un proyecto de extensión, ahí entré en el campo de la extensión universitaria que yo la verdad que la veía pasar, no estaba muy al tanto de lo que era. Hice algunas capacitaciones, empecé a hablar con gente de la extensión y presentamos una propuesta del proyecto de extensión. Ahí la vicedirectora fue Antonela Álvarez, que era la coordinadora del CEU Santa Clara del Mar; trabajamos con una escuela de Mar de Cobo, Partido Mar Chiquita, porque en esta escuela comen los chicos almuerzan y no tenían incluido el pescado” (Entrevistado N°14, comunicación personal, 25 de agosto de 2021).

En función de haber detectado cierto déficit en la provisión de alimentos a los alumnos de una escuela local, Gutiérrez comenzó a promover la articulación de cátedras de la Facultad de Ingeniería, junto con su grupo de investigación. Entre las principales motivaciones para impulsar el proyecto, aparecía el hecho de que el consumo del pescado en Argentina es muy bajo, a pesar de que en algunas regiones del país la disponibilidad del recurso es elevada. De esta manera, la hipótesis de Gutiérrez era que se estaba desaprovechando la existencia de una fuente de proteínas de alta calidad, que podía resultar muy útil para paliar los efectos de la inseguridad alimentaria en los sectores más vulnerables de la población. En ese marco Gutiérrez comentaba:

“Nos presentamos a la convocatoria de la UNMDP y aprobaron un proyecto de extensión sin financiamiento, y ahí empezamos a trabajar en el territorio, en la escuela, haciendo talleres con los chicos. Otro de los objetivos era el desarrollo de los productos a base de pescado saludables: ahí les propusimos a los chicos de un grupo de trabajo final, junto a la Cátedra de Trabajo Final si querían hacer este desarrollo. Hicimos juntos ese desarrollo y en la escuela lo analizaron sensorialmente a ver si le gustaba o no y bueno, dio bien y ahí ese fue el desarrollo del producto” (Entrevistado N°14, comunicación personal, 25 de agosto de 2021).

Fue así como el grupo de investigación trabajó, durante los años 2019 y 2020, de forma articulada entre dos asignaturas de la carrera de Ingeniería en Alimentos (Facultad de Ingeniería, UNNMDP), el Grupo de Investigación en Preservación y Calidad de Alimentos (GIPCAL, INCITAA, Facultad de Ingeniería, UNMDP) y el Proyecto de Extensión Universitaria, denominado “Alimentación consciente y saludable: la incorporación del pescado en el menú escolar”. Particularmente, desde la materia “Trabajo final de Ingeniería en Alimentos”, hubo un grupo de docentes y alumnos que trabajaron en el desarrollo de prepizzas que tenían como insumo principal harina de trigo y carne de pescado, lo cual aumentaba notablemente la calidad nutricional del producto. Era una forma de incorporar proteínas animales de muy buena calidad en un producto de consumo masivo.

Este desarrollo, que a nivel alimenticio ya había sido certificado por la UNMDP en cuanto a su calidad, fue testeado en una escuela primaria de la ciudad de Santa Clara, por parte de 146 alumnos, en talleres y encuentros donde se promovió la degustación del producto (Perez, S. *et al.*, 2021). De allí, surgió que las prepizzas de pescado tenían una “aceptabilidad” muy alta por parte de los consumidores, lo cual dio la pauta de que el producto era viable no solo desde lo nutricional, sino también desde la posible adopción por parte de aquellos hacia quienes estaba dirigido.

El proyecto de extensión no había contado con financiamiento por parte de la UNMDP, solo con apoyo administrativo y burocrático, por lo cual quedó en evidencia para el grupo que, para poder escalar el alcance e impacto del proyecto, el mismo tenía que conseguir financiamiento de fuentes externas.

En el año 2020, con el propósito de hacer frente a los impactos de la pandemia y la consecuente crisis alimentaria que originó en sectores altamente vulnerables de la región, un equipo de voluntarios, compuesto por estudiantes, profesores e investigadores, tanto de la UNMDP como del CONICET, colaboró con el Banco de Alimentos “Manos Solidarias” en la elaboración de más de 3500 prepizzas de pescado, en las instalaciones de la UCAP-GPA (Departamento de Ingeniería Química y Alimentos, Facultad de Ingeniería, UNMDP). El Banco de Alimentos les proveía los insumos, y se quedaban con la mitad de la producción para repartir. El resto de las prepizzas producidas fueron donadas a diversas instituciones educativas y organizaciones sociales de los partidos de General Pueyrredón, General Alvarado, Balcarce y Mar Chiquita.

A partir de esta práctica, el GI fue ganando experiencia productiva y de vinculación con actores extraacadémicos, solidificó sus estrategias de creación de conocimiento aplicado, y comenzó a concebir nuevas estrategias de valorización del conocimiento producido. Particularmente, esta trayectoria de vinculación primigenia permitió al director del grupo conocer un abanico de posibilidades que se abrían para escalar la producción y la inserción del proyecto a un nivel más profundo, accediendo a financiamientos que permitían aumentar la proyección de las iniciativas.

La UNMDP venía desarrollando, previo a la pandemia por COVID-19, un programa que se denominó Programa de Innovación y Producción Popular (PIPP) y dependía de la Subsecretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica. Su objetivo consistía en desarrollar estrategias de vinculación e innovación tecnológica abierta con sectores populares, con el propósito de codiseñar y coproducir tecnologías sustentables para la inclusión social. La Coordinadora del CEU Santa Clara, acompañó a Gutiérrez a la presentación al PIPP de un proyecto que buscaba atender la situación de emergencia producida por la Pandemia y el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Fue entonces que comenzaron a articular la producción de prepizzas, que llevaban adelante en el laboratorio, con organizaciones de la sociedad que necesitaban colaboración para paliar las consecuencias sociales y alimentarias en las poblaciones más vulnerables.

A partir de este tipo de vinculaciones, el grupo vio las limitaciones y las complicaciones que surgían de los financiamientos que otorgaba la UNMDP a través de sus programas de extensión. En palabras de una entrevistada:

“La posibilidad que hay en la Secretaría de Extensión es acotada también y el financiamiento es acotado. Hay un montón de instancias burocráticas y administrativas de presentación que a veces no son proporcionales al esfuerzo ni a después el acompañamiento. De hecho, este proyecto empezó siendo de extensión y terminó en una convocatoria de Ciencia y Tecnología Contra el Hambre... creció, digamos” (Entrevistada N°13, comunicación personal, 25 de septiembre de 2021).

Durante el año 2020, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina lanzó una convocatoria que se denominó “Ciencia y Tecnología contra el Hambre” (en adelante CCH). Este programa buscaba “promover la incorporación de las capacidades del sistema científico y

tecnológico al fortalecimiento de políticas públicas enmarcadas en el Plan Nacional ‘Argentina contra el Hambre’, que tengan el objeto de combatir la pobreza, el hambre y la malnutrición en todo el territorio nacional”. El objetivo central de la convocatoria era acercar las esferas de producción de conocimiento y tecnología, relacionadas con el acceso a la alimentación, a los sectores sociales que demandaban soluciones relacionadas con la temática.

La convocatoria buscaba fomentar soluciones vinculadas con problemáticas como: emergencia alimentaria, malnutrición infantil, pobreza, acceso y calidad del agua y vulnerabilidad socioambiental. En el ámbito de la tecnología y la producción de alimentos, planeaba aceptar propuestas productivas que se enfocaran en la integración de conocimientos científicos y tecnológicos en los procesos de producción. Se buscaba que las propuestas adoptaran una perspectiva innovadora basada en la evidencia científica, y que promovieran alimentos con una composición nutricional y capacidades de escalabilidad que contribuyeran significativamente a mejorar el acceso a una alimentación saludable por parte de población vulnerable.

El programa estaba dirigido, fundamentalmente, a convocar iniciativas que hubieran superado exitosamente las etapas iniciales de investigación y desarrollo, y que estuvieran preparadas para su producción a gran escala, tanto para el consumo general del público objetivo como de segmentos de la población con necesidades nutricionales específicas.

El proyecto de CCH y su vinculación con una cooperativa de Mar Chiquita

La convocatoria de CCH, en el marco de la pandemia por COVID-19, era de gran envergadura: el promedio de financiamientos por proyecto era de unos 10 millones de pesos cada uno (unos 150 mil dólares al cambio de ese año). Si consideramos que los proyectos de extensión de la UNMDP proveían un financiamiento aproximado entre cinco mil y diez mil pesos, vemos que el del CCH implicaba obtener fondos de varias órdenes de magnitud superior. Esto permitiría escalar los dos principales proyectos ideados por el grupo de Gutiérrez, que involucraban a dos organizaciones sociales.

Originalmente el proyecto presentado tenía previsto articular el trabajo con dos emprendimientos productivo-sociales: uno de vinculación con una organización social y con el Banco de Alimentos, radicado en Mar del Plata, y otro pensado para ser implementado en el

Partido de Mar Chiquita. Este último estaba enfocado en articularse con una cooperativa llamada “Cooperativa de Trabajo Soberana”, que llevaba adelante emprendimientos productivos. En este caso, el objetivo era elaborar de forma conjunta alimentos a base de pescado.

La cooperativa estaba conformada por mujeres en situación de vulnerabilidad socioeconómica, por lo que el proyecto implicaría para ellas contar con una fuente de ingresos estable, y la capacidad de abastecer alimentos asequibles, con buena calidad nutricional en Mar Chiquita. Para llevarlo a cabo, se había establecido una colaboración estrecha con dos dependencias municipales de Mar Chiquita: la Secretaría de Desarrollo Local y Productivo y la Dirección de la Mujer.

Al mismo tiempo, tenía como objetivo obtener el pescado necesario para la producción en la misma ciudad de Mar Chiquita, a partir de establecer una vinculación comercial con un grupo de pescadores artesanales del partido. El proyecto proponía, así, aprovechar de forma integral los recursos pesqueros locales, mediante la valorización de los residuos resultantes del fileteado de los pescados, los cuales serían utilizados para la elaboración de caldos nutritivos, hidrolizados proteicos y compost, entre otras posibilidades. El proyecto de producción de alimentos con pescado implicaba la articulación del GI con distintos grupos de la universidad, que tenían presencia territorial (como los Centros de Extensión Universitaria); con organizaciones sociales, como el Movimiento de Trabajadores Excluidos y el Banco de Alimentos Mano Solidarias; y con una cooperativa de trabajo de mujeres.

En el caso de la UNMDP, los Centros de Extensión Universitaria (CEU) fueron planteados como dispositivos institucionales que canalizaran iniciativas de investigadores y extensionistas en distintos lugares del entorno. Como se analizó con anterioridad, la suerte de estos CEU fue dispar, particularmente por ciertos déficits en cuanto a la propia articulación de los centros con los trabajos territoriales que habían llevado adelante previamente otros actores de la universidad. Sin embargo, en el caso del proyecto de Gutiérrez, el vínculo con el CEU de Mar Chiquita sí fue más extendido, al punto tal que la encargada del CEU formó parte del proyecto que analizamos en este caso.

La creación de una cooperativa de trabajo en Santa Clara

La Cooperativa de Trabajo Soberana surge, de forma previa e independiente al proceso de vinculación que aquí se estudia, a instancias de una iniciativa personal de una emprendedora barrial de Santa Clara del Mar, quien se había quedado sin trabajo a los 58 años y se encontraba cobrando una asistencia estatal que se llamaba “Hacemos Futuro”. Este programa tenía por objetivo otorgar herramientas para que personas en situación de vulnerabilidad pudieran finalizar sus estudios, capacitarse en distintos oficios y mejorar sus oportunidades en el mercado laboral. Este luego se unificó con el de Salario Social Complementario, y pasó a denominarse Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo”. De acuerdo con la emprendedora:

“Entonces me dije: yo necesito sentirme útil y empiezo a incursionar a investigar el Potenciar Trabajo, hay un proyecto que si empezás a trabajar cuatro horas en algún lugar, cobrás el salario mínimo vital y móvil completo: la mitad te lo abona el Haciendo Futuro y la otra mitad te lo paga el empleador. Me tenía que asociar a una institución que tuviera personalidad, personería jurídica. Una conocida me sugiere: no tenés ganas de armar una cooperativa, juntás un grupo de mujeres, se ponen a trabajar, te vas a sentir útil y es algo que a futuro viene muy bien” (Entrevistada N°15, comunicación personal, 15 de octubre de 2021).

A partir de la posibilidad de armar una cooperativa, la emprendedora se contactó con la Dirección de la Mujer del Municipio de Mar Chiquita y empezó a enrolar a mujeres de la zona que fueran beneficiarias de planes sociales, para que formaran parte de la Cooperativa. Una vez establecida, la misma permitiría generar un espacio de trabajo en el cual las mujeres pudieran trabajar a medio tiempo, y así contar con un salario mínimo vital y móvil, que sería provisto por el programa Potenciar Trabajo.

Desde la Secretaría de Producción del Municipio, se trabajó acompañando la creación de la cooperativa, considerando que ninguna de sus integrantes tenía experiencia en cooperativismo. Se las ayudó a reunir todos los avales para presentar en el INAES, y se reunieron en varias ocasiones para colaborar en el armado de la estructura. En palabras de un funcionario municipal:

“A nosotros nos ha pasado tener experiencias cooperativas de muchos asociados, que no lograron configurar el razonamiento de pasar de ser empleado hasta la independencia de ser asociados a

una cooperativa. Por eso, yo quise enfocarme más que nada en eso, les hablé de los reglamentos internos para el cumplimiento, de evitar problemas a futuro, de entender cómo se constituía la cooperativa. Porque se designan en este caso: una presidenta, una tesorera, una secretaria, una vocal, una revisora de cuentas. Y tal vez esa persona no siga y encuentren que tal compañera funciona más en otro cargo que en el que tenía” (Entrevistado N°16, comunicación personal, 12 de octubre de 2021).

Una de las características de la cooperativa es que las mujeres convocadas en su totalidad habían sufrido situaciones de violencia de género, y contaban con diversas problemáticas (ingresos, habitacional, laboral, familiar, psicológica, entre otras). Una vez conformado un número inicial de ocho participantes, se comenzó a pensar el objeto social de la cooperativa. De acuerdo con la emprendedora:

“Entonces dije, bueno: había algunas que le interesaba el área textil. Sabían coser, entonces armamos un área textil; por otro lado, a una de ellas le interesaba la agroecología y es vegana, entonces me dijo: “mira el tema de verdura agroecológica, va muy bien, podemos crear nuestra propia huerta”. Me encantó. Vayamos por ahí también. Después apareció Roberto con el tema de las prepizzas de pescado, entonces dijimos ‘podemos ingresar con los pescados al área gastronómica también’ y desde ahí salió la novedad de la ‘Prepizza Soberana’” (Entrevistada N°15, comunicación personal, 15 de octubre de 2021).

En este momento de conformación inicial de la cooperativa, la emprendedora comenzó a vincularse, a través de contactos personales, con distintas direcciones municipales, y así se contactó con la persona a cargo de la Dirección de la Mujer, quien le comentó que ellos venían trabajando con el área de ingeniería alimentaria de la UNMDP. Allí le presentó a Gutiérrez que venía con su proyecto de fabricar prepizzas de pescado para atender situaciones de vulnerabilidad socioalimentaria. Al respecto comentaba la emprendedora:

“Él nos comentó que estaba muy bueno este proyecto, que podía ser muy interesante bajarlo a la cooperativa y tener la experiencia de que los estudiantes de la facultad vengan, mediante las materias que rendían, a hacer sus prácticas con nosotras... a ver qué es lo que hacíamos, que se podría mejorar, cómo trabajamos. La verdad es que fue increíble, porque tuvimos un curso muy extenso, muy lindo, tuvimos que compartir un montón de veces prácticas con los chicos de la extensión universitaria” (Entrevistada N°15, comunicación personal, 15 de octubre de 2021).

A partir de este encuentro entre Gutiérrez y la emprendedora, se acordó gestar una vinculación para la producción de las prepizzas de pescado. En consecuencia, se produjeron intercambios y transferencia de conocimientos técnico-productivos. Este proceso se puede analizar a la luz del concepto de “proceso de traducción” Callon (1980): el grupo de investigación, al conseguir el financiamiento, y contar con la experticia técnica para llevarlo adelante, se convirtió de esta manera en el eje vertebrador. Cuando un actor se convierte en el centro se ve investido y atribuido de la responsabilidad de la circulación de conocimientos y gestión de las atribuciones que tiene cada nodo de esa futura red de interacciones. Esta red, por otro lado, se ve consolidada en la medida en que el conocimiento circula en situaciones de copresencia, de cercanía física, lo cual permite que se generen patrones de interpretación y codificación compartidos.

El actor central de la red, de esta forma, define el problema en sus términos, identifica y enrola a los potenciales actores involucrados, y genera el marco para que estos interactúen entre sí. Siguiendo el planteo de Callon (1980), hay una segunda instancia en la cual se teje una red de actores en donde se tienden a estabilizar sus intereses, y se los hace funcionales a la misma. En una tercera instancia, se les asigna roles dentro de la red a cada actor, lo que genera nuevas espacialidades, y moviliza un conjunto de nuevas acciones en el espacio social.

En este caso particular, esto implicó para Gutiérrez un grado de involucramiento con el proceso de articulación muy intenso, que por momentos parecía colisionar con el gran número de ocupaciones detentaba (docencia e investigación, fundamentalmente). De nuevo, aquí aparece esa tensión que se mencionaba al principio, de las trayectorias de investigadores que se vuelcan a realizar trabajo territorial o de vinculación, y que deben gestionar el tiempo que requiere una dedicación de tiempo completo a la docencia e investigación, al tiempo que deben incorporar una dedicación importante a sostener las vinculaciones en copresencia, y tejer esa red de actores que permita sostener toda la situación de interacción.

En un principio, y como parte de estas estrategias, los intercambios de conocimiento entre el Grupo de Investigación y la Cooperativa incluyeron cursos de manipulación alimentaria y de producción de alimentos. De acuerdo con la emprendedora:

“Queda una guía de cómo se va trabajando, de qué es lo que corresponde, qué es lo que no, los cuidados que hay que tener. En resumen, fue una experiencia muy bonita y, mientras tanto, íbamos produciendo. El producto lo dividíamos entre las mujeres de la cooperativa, que somos

seis o siete. Luego lo comercializábamos. No obtuvimos una gran ganancia, eso sí. Así fue como conocimos al tío Roberto, que se volvió una persona imprescindible para el grupo, por eso lo llamamos "tío". Él es la persona autorizada en alimentos, nos acompaña, nos guía, nos orienta y nos facilita abrir puertas. De esa manera estamos seguros de que hacemos las cosas bien” (Entrevistada N°15, comunicación personal, 15 de octubre de 2021).

La interacción con Gutiérrez permitió que las cooperativistas comenzaran a formar parte de esta red, y a medida que adoptaban conocimientos, incorporaron también disposiciones novedosas y nuevos sentidos para sus acciones. Estos últimos, que se construyen de forma conjunta cuando se despliega una situación de interacción, inciden en los esquemas interpretativos de los participantes y se nutren de elementos normativos, materiales y también simbólicos (Werlen, 2003). En este sentido, no parece casual que la emprendedora mencione a Gutiérrez como “tío”, dando cuenta así a un tipo de relación muy cercano, que lleva implícito un grado de confianza significativo. Esta denominación, a su vez, remite al rol de autoridad que se inviste a quien propone la situación de interacción, que es quien aporta el conocimiento experto y el financiamiento indispensable para desplegar el proyecto. Esto lleva a una pregunta más general, o extrapolable a otros casos similares: ¿En qué medida es posible romper con un comportamiento más “tutelar” por parte de los académicos en casos como éste, a fines de lograr una horizontalización profunda de los lazos contruidos con actores del entorno?

De la mano con lo anterior, aparece lo contingente de la credibilidad que se inviste al conocimiento, y el rol que juega este tipo de procesos en la apropiación del conocimiento científico y tecnológico (Wynne, 1992). La confianza que se generaba entre las cooperativistas y Gutiérrez no era un valor dado, sino el resultado de un proceso de construcción de un terreno en común, a partir del cual se compartieron una serie de valores como la base para llevar adelante un trabajo conjunto.

En los planes de Gutiérrez, el proyecto de CCH permitiría financiar la consolidación de una situación de interacción entre un grupo de investigación de la universidad, la cooperativa, el municipio y los pescadores artesanales. Allí se entablarían vínculos de copresencia intensa entre los participantes, a partir de los cuales se podría generar la sostenibilidad económica del proyecto y la circulación de conocimiento. Esto considerando que la copresencia afecta de manera determinante los procesos de intercambio de conocimiento, socialización, aprendizaje y, por ende, contribuyen a crear nuevas espacialidades (Werlen, 2003).

Esto nos lleva a preguntarnos en qué medida la situación de interacción planteada terminó interpelando a todos los actores involucrados, partiendo de reconocer la espacialidad actual como una base para el despliegue de nuevas interacciones, que a su vez devinieran en una espacialidad mediada por el proyecto. Sobre todo, considerando que el diseño del proyecto surgió desde la universidad, y así conformó la idea de un problema social que era pasible de ser intervenido a partir de una serie de operaciones. Como consecuencia de este diseño, fue el mismo grupo de investigadores que se conformó en “nodo central” de la red, y se propuso enrolar a los distintos actores, para así diagramar un espacio de interacción.

Primeros pasos de la cooperativa y perspectivas productivas

El trabajo de la cooperativa fue apoyado desde un principio por la Dirección de la Mujer y por el área de producción del Municipio de Mar Chiquita. Ambas direcciones colaboraron con la cooperativa, y le cedieron a préstamo un lugar de trabajo para que desempeñaran sus funciones productivas y sociales: el Centro Integrador Comunitario el CIC de Camet Norte (ubicado al sur del Partido de Mar Chiquita), colindante con Santa Clara del Mar.

En este momento de la vinculación, y luego de las instancias de formación productiva y comercial, las cooperativistas comenzaron a hacer las prepizzas a una escala muy baja, del orden de las 60 prepizzas por día de trabajo. Estos problemas de escala estaban dados principalmente por la falta de un lugar más propicio para llevar adelante la producción, y de un equipamiento productivo adecuado para el nivel de producción que se pretendía alcanzar.

El financiamiento de CCH permitiría solucionar ambas problemáticas: por un lado, articular con el municipio para conseguir un lugar permanente y así poder llevar adelante la producción; y por el otro, comprar las maquinarias e insumos necesarios para poner en marcha el proceso productivo a una escala mayor, que fuera comercialmente viable y socialmente significativa.

Parte del financiamiento se dedicaría también a dar sustentabilidad a la producción de los pescadores de la zona que, por cuestiones de regulación, vendían su producción a frigoríficos de Mar del Plata, pero no podían hacerlo de forma directa a consumidores en los mercados locales del Partido. En palabras de Gutiérrez:

“Parte de estos 10 millones y pico de pesos son para Mar del Plata, parte para la producción de la cooperativa de mujeres y parte para los pescadores artesanales de acá del Partido de Mar Chiquita, para que puedan procesar sus capturas. Porque hoy en día hay pescadores que pescan, y eso es ilegal porque no lo deberían hacer, pero está, existe, el municipio lo deja pasar. Esas capturas se las venden a un camión de Mar de Plata y se las llevan. O sea que acá en la zona no tenemos pescado. Yo quiero comprar pescado de acá de la zona y no tengo un lugar donde ir a comprar. Entonces la idea es que puedan procesar esas capturas, que le den el pescado necesario a la cooperativa para hacer las prepizzas y también que le vendan a la gente claro, en eso en eso consiste el proyecto es como una de las tres patas sería del proyecto” (Entrevistado N°14, comunicación personal, 25 de agosto de 2021).

Aquí aparecen con claridad ciertos problemas que son intrínsecos a la economía informal, y que están relacionados con el vínculo que tienen estos actores con la dimensión regulatoria del estado, y con cómo esto define los alcances y posibilidades de inserción económica. El poder de incidencia de estos actores sobre el sistema político, a su vez, tiende a ser bajo, lo cual retroalimenta las situaciones de vulnerabilidad que están dadas por depender de terceros para acceder a los mercados de consumidores.

En esta segunda etapa del proyecto, Gutiérrez se dedicó a gestionar de forma directa con el Municipio la provisión de un lugar para que se llevara adelante la producción. La idea era contar con un terreno fiscal para que la Cooperativa pudiera construir un espacio productivo, y llevar ahí a sus hijos, dado que todas eran madres solteras, y no tenían con quien dejarlos. Uno de los factores que inciden de forma directa en la vulnerabilidad socioeconómica de madres solteras está dada por la carga que implica la crianza de los hijos, tanto en términos económicos como de posibilidades de dedicar tiempo a actividades laborales por fuera de la crianza.

Si pensáramos esto en términos de justicia espacial, podríamos pensar en la falta de sitios laborales que incluyan espacios para los hijos de madres solteras como condición base para la reproducción de injusticias de base espacial (Soja, 2010). En este marco, Gutiérrez buscó abordar también esta problemática emergente, que no había sido considerada desde el proyecto en sus orígenes, dado que, sin una respuesta a esta situación, resultaría muy dificultoso que las cooperativistas pudieran desarrollar su labor.

El problema de la pesca artesanal o de subsistencia en Mar Chiquita

El proyecto de CCH incluía a un actor productivo del Partido de Mar Chiquita: los pescadores artesanales o de subsistencia que desarrollan su actividad en las costas de Santa Clara y Mar Chiquita. Se calcula que cerca de 300 personas viven de la pesca en el municipio, por lo que constituye una actividad económica muy relevante. Tradicionalmente, los pescadores siempre trabajaron sin permisos de pesca, como trabajadores independientes por fuera del mercado laboral registrado. De acuerdo con un funcionario de la Municipalidad de Mar Chiquita:

“Los pescadores tampoco tenían demasiado interés en regularizar: ellos quieren realmente seguir como están, de manera ilegal. Nosotros estamos trabajando distintos proyectos para pegar un salto de calidad y que la pesca artesanal sea rentable para los mismos pescadores. Porque las embarcaciones no pueden vender ellos su propia producción en el circuito legal comercial de Santa Clara” (Entrevistado N°16, 1 de agosto de 2021).

Trabajan en su mayoría desde gomones semirrígidos o kayaks, pescando principalmente corvinas y pescadillas, a una distancia máxima de 5 kilómetros de la costa. En un día que ellos consideran bueno, pueden llegar a pescar entre unos 5 o 15 cajones de pescado, que durante el invierno venden a pescaderías de Mar del Plata. Durante el verano, el producto se suele vender de forma directa a pobladores locales y turistas.

La regularización de los pescadores fue una cuestión conflictiva durante muchos años, dado que la actividad se encuentra históricamente atravesada por múltiples intereses. Uno de los actores más fuertes que inciden en la política pesquera es la Cámara de Pescadores, que tiene una gran fortaleza en Mar del Plata y ha realizado lobby para mantener al margen de la ley a los pescadores artesanales. Tal como señala uno de los entrevistados:

“Hay obviamente una rosca muy importante del sector de la cámara de pescadores de la pesca convencional concentrada, que no quiere a la pesca artesanal, entonces hay muchas presiones más. De hecho, cuando se anunció que se van a gestionar los permisos de pesca provincial en el Partido de Mar Chiquita, desde las cámaras de pescadores mandaron nota de protesta a pesca de Provincia de cómo podía ser que iban a dar permiso de pesca a las embarcaciones de la pesca artesanal de Mar Chiquita, que estaba en peligro su fuente de trabajo. Una locura cuando uno

compara los volúmenes de pescado de uno y otro” (Entrevistado N°16, comunicación personal, día 1 de agosto de 2021).

El proyecto de Gutiérrez implicaba una vinculación directa con los pescadores artesanales, quienes se preveía serían los proveedores de pescado para que este fuera procesado en las prepizzas. Desde el proyecto se esperaba que el diálogo con el sector iba a ser fructífero, porque permitiría constituir una demanda sustentable y constante de la materia prima producida, a la vez que colaborar en la regularización de lo producido por el sector.

Estas asunciones previas probarían no ser del todo ciertas ya que, al momento de avanzar con las tratativas, el diálogo fue bastante más complejo. La gran mayoría de los pescadores involucrados, como se comentó con anterioridad, no estaban interesados en regularizar su situación laboral. Por otro lado, tenían mucha desconfianza ante personas que tuvieran una pertenencia institucional relacionada con el Estado. Esto trajo aparejado que uno de los actores centrales para el proyecto no quisiera ser enrolado en la red de vinculación, en función de haber tenido malas experiencias previas de interacción, así como producto de un conocimiento experiencial acerca de lo complejo de legalizar ciertas prácticas, lo cual en algunos casos puede terminar siendo perjudicial en cuanto a acceso a mercados muy regulados. Como señala un entrevistado:

“Hay digamos una idiosincrasia y una forma de trabajar que como te decía tiene 2000 años que va a ser muy difícil de cambiar. Hay esperanza en las nuevas generaciones de pescadores que buscan progresar, tienen otra cabeza... digamos otro pensamiento respecto a la actividad que realizan, pero también es difícil porque son los menos” (Entrevistado N°16, comunicación personal, 1 de agosto de 2021).

Desde el Municipio de Mar Chiquita, la lógica era articular a este sector productivo con la comunidad científica, para de esta manera fortalecer y dar sustentabilidad productiva y comercial a la pesca artesanal. El proyecto de Gutiérrez permitiría generar mayor valor agregado y acceder a un canal de comercialización estable, al mismo tiempo que valorizaba la labor de los pescadores, al establecer una vinculación formal con una institución estatal como la UNMDP.

Recién en el año 2019, el Municipio de Mar Chiquita comenzó una política activa para regularizar la actividad, con la creación de una Dirección de Pesca, a partir de la cual se entabló un diálogo con los pescadores y comenzó la emisión de autorizaciones para pesca artesanal. Sin embargo, y de acuerdo con lo que señalan funcionarios municipales de Mar Chiquita, el trabajo conjunto resultó muy dificultoso. A pesar de esto, el entrevistado señalaba:

“Hemos facilitado que puedan comercializar sus productos con las mínimas condiciones bromatológicas, que se inscribieran en el monotributo social, que es la categoría más baja. Nosotros lo sostenemos desde el municipio, pero aun así no podemos avanzar. Creo que hay que tener mucha constancia, y ni siquiera así se pudo encontrarle la vuelta. Hay una distancia muy grande entre las gestiones de gobierno y la sociedad” (Entrevistado N°16, comunicación personal, 1 de agosto de 2021).

De acuerdo con Gutiérrez, la situación es compleja porque no todos los pescadores quieren salir de la informalidad, a pesar de tener el apoyo municipal para comercializar y registrar la actividad. En parte, porque contar con todo en regla implicaría una gran serie de gastos e inversiones para acondicionar sus medios de trabajo. Por otro lado, la regularización implicaría también abandonar una concepción del trabajo que se produce de forma totalmente artesanal, sin ningún tipo de vinculación con la burocracia estatal, y, por ende, con un alto grado de libertad personal. El conflicto de los pescadores con el estado municipal pasa, entonces, por conciliar lo que implica una producción artesanal en cuanto al grado de libertad personal, con las regulaciones lógicas de la producción, transporte y comercialización de alimentos para consumo humano.

En esa tensión estuvo avanzando el estado municipal de Mar Chiquita a partir del año 2019, para dialogar junto con el sector y establecer un marco regulatorio mínimo que permita que la actividad productiva continúe, y que se pueda insertar comercialmente en el partido, cumpliendo con algunos mínimos estándares de seguridad alimentaria. Específicamente, el municipio trabajó con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) para generar una regulación para el sector que cumpla los estándares de esta institución. De acuerdo con lo que señalaba el Subsecretario de Higiene y Bromatología de Mar Chiquita: “Esto le otorgará al sector un marco de contención en cumplimiento con normas de sanidad y ajustado a la realidad del partido. Además, regularizará el comercio ilegal y abrirá nuevos mercados nacionales e, incluso, internacionales” (Redacción 0223, 2019).

Este conflicto por la regularización se viene trabajando desde hace varios años también con la Prefectura Naval Argentina, que es la institución que tiene por mandato controlar los permisos para las embarcaciones, tanto deportivas como de pesca, a nivel nacional. Dado que muchos de los pescadores del Partido estaban encuadrados como embarcaciones deportivas, durante la pandemia no podían salir a pescar porque no constituían una “actividad esencial”. Fue así como muchos de ellos pidieron comenzar a discutir el tema de la regularización, ya que sería la única forma de conseguir una doble matriculación como pescadores deportivos y artesanales.

Estas discusiones siguieron avanzando en los últimos años, y se han encauzado a partir de nuevas normativas municipales que promueven de forma activa la regularización de la pesca artesanal. Es un proceso lento, que se va desplegando a medida que se logra convencer a los pescadores de los beneficios que traería aparejada la regularización versus las desventajas que esta les generaría en relación con la disponibilidad del tiempo, y con la mayor carga burocrática y tributaria a la que se enfrentarían.

Problemáticas en la gestión y desenvolvimiento del proyecto

A poco de ver aprobado el proyecto de CCH, se produjeron una serie de inconvenientes en cuanto al desembolso del financiamiento, dado que este se retrasó muchos meses y se redujeron significativamente los montos que efectivamente se pusieron a disposición. El número aprobado originalmente, que superaba los diez millones de pesos, se suponía que tenía que dividirse en dos desembolsos iguales de cinco millones: el primero, sería entregado al comienzo del proyecto, y el segundo, a partir de la presentación de un informe de medio término con la rendición de cuentas solicitada.

Desde la aprobación del proyecto al primer desembolso hubo una demora de 5 meses, por lo cual la planificación inicial de compra de equipamiento y gastos iniciales tuvo que ser pospuesta. En un contexto altamente inflacionario, esto complicó las cosas por partida doble: primero, porque hizo muy difícil que la cooperativa pudiera planificar adecuadamente sus actividades para comenzar a producir; y segundo, porque los montos del proyecto se fueron licuando por la inflación a medida que pasaban los meses, y cada vez se podían comprar menos cosas con el dinero que se terminaba desembolsando.

Cuando se efectivizó el primer desembolso en el año 2021, en lugar de los cinco millones que estaba previsto que llegarían, se depositaron menos de la mitad: alrededor de dos millones de pesos. Esta reducción presupuestaria dificultó más la planificación de compra de insumos y equipamientos, que, sumada a la inflación descrita con anterioridad, hizo imposible acceder a comprar los equipamientos previstos originalmente. Ante esta situación de escasez de recursos, Gutiérrez decidió priorizar el proyecto de la Cooperativa Soberana por sobre el proyecto que involucraba al Banco de Alimentos de Mar del Plata.

La principal razón para esta elección fue considerar que se habían generado una serie de expectativas en las futuras cooperativistas, que les proponía un horizonte de inserción laboral y les permitiría abordar al menos una de las dimensiones de vulnerabilidad a la que se encontraban sometidas. Ante esto, el entrevistado señalaba:

“Pasaron muchos meses que no nos daban la plata. Cuando salió era la mitad de lo previsto y era un lío comprar todos los equipamientos. Porque una cosa es que en el laboratorio no te lleguen los equipos: bueno, postergás tu laburo experimental. En este caso, es gente que quiere laburar y vos venís y decís “no salió”. Viste, de inexperiencia, no sé cómo llamarlo, no de mala voluntad. Involuntariamente, generamos una expectativa, que sabiendo ahora no lo hubiese hecho... decirles: pero miren que no van a estar los equipos ahora” (Entrevistado N°14, comunicación personal, día 15 de agosto de 2021).

Al poco tiempo de que la cooperativa comenzara a trabajar, se produjeron una serie de disfuncionalidades: se desataron problemas personales entre sus integrantes, complicaciones en la organización de la cooperativa, y un conjunto de desavenencias internas de difícil resolución. Para el año 2022, la cooperativa se comenzó a desmembrar. A pesar de haber contado con acompañamiento, tanto municipal como del grupo de investigación de la UNMDP, las cooperativistas no pudieron terminar de consolidarla, y no lograron que la misma funcionase como un dispositivo organizacional y productivo viable. De acuerdo con uno de los entrevistados:

“El tema que les pasó a las chicas fue que no tenían un lugar donde trabajar. Tenían ese lugar que le había cedido el municipio, pero nunca llegaron a conseguir algo fijo, pensamos en alquilar un lugar, pero no se logró. El lugar que tenían lo podían usar solo una vez por semana después hacían otras cosas, es casi imposible. Para empezar, está buenísimo, pero luego nunca se pudo conseguir un establecimiento (Entrevistado N°14, comunicación personal, 15 de agosto de 2021).

En medio de la búsqueda de un lugar fijo para que la Cooperativa se instalara y comenzara a producir con regularidad, los conflictos internos entre las cooperativistas hicieron que de las siete integrantes iniciales quedaran solamente dos, la fundadora y su hija. El factor condicionante principal del alejamiento de las cinco cooperativistas parece haber sido la situación de alta vulnerabilidad socioeconómica que atravesaban.

La mayoría de estas mujeres, en paralelo a esta posibilidad de trabajar en la cooperativa, debían hacer frente a un conjunto de problemáticas que inhibieron su participación en el proyecto: desde no poder pagar el transporte para ir a trabajar, o no tener con quien dejar a sus hijos, hasta problemas de índole psicológico, que muchos días les imposibilitaba dirigirse a la cooperativa. Según una de las cooperativistas:

“Como todo emprendimiento, si no tiene recursos propios o tiene la ayuda del estado en estos casos cuando son personas en estado vulnerabilidad, como eran las mujeres que componían la cooperativa, el proyecto se cae, porque no hay como sostenerlo. Estuvimos trabajando en un lugar que nos cedía el Centro Integrador Comunitario de acá de Santa Clara, nos dio para que trabajáramos un día la semana cuatro horas. Pero qué pasa: éramos siete mujeres, ocho ya al final (porque empezamos a crecer obviamente) y éramos ocho mujeres en estado de vulnerabilidad que pretendíamos vivir de un lapso de cuatro horas semanales de producción. Era imposible, entonces intentamos buscar más días para ver qué podíamos conseguir” (Entrevistado N°17, comunicación personal, día 10 de septiembre de 2021).

Al trabajar en una jornada semanal de 4 horas, lograron producir semanalmente 60 prepizzas de pescado, las cuales se vendían a conocidos y vecinos, en ferias y en el principal supermercado local de Santa Clara, el Supermercado Aida. En este último espacio, lograron tener un stand propio, con el logo de la cooperativa, que sirvió también para dar a conocer entre los compradores la existencia de la cooperativa y la labor que estaba llevando adelante para generar procesos de inclusión social.

Sin embargo, aquí fue cuando surgió una problemática que no estuvo debidamente contemplada desde un inicio: el costo del producto. Las prepizzas, al incorporar pescado, tenían un precio final que duplicaba el de las prepizzas industriales que contenían solo harina de trigo como insumo. Si bien la calidad nutricional de las prepizzas de la Cooperativa Soberana era

ampliamente superior, en un contexto de crisis económica, el grueso de los consumidores no estaba dispuesto a gastar el doble en un producto solo por sus propiedades nutricionales. El costo final del producto no parece haber estado debidamente contemplado en el diseño del proyecto por parte del GI, ni haber sido evaluado adecuadamente por parte de quienes financiaron el proyecto. De acuerdo con una entrevistada:

“Después de la última devaluación, ya fue imposible comprar pescado, ya no lo pude bancar más, así que hablé con el Supermercado y le dije mira, esperemos a ver qué pasa... y hasta que esto repunte vemos cómo seguimos y bueno, ahí dan nos propuso que hiciéramos pan casero, que lleváramos otro tipo de producto. Lo cual estamos agradecidos, pero la idea es que la cooperativa sea rentable no sostener un espacio de comercialización solamente” (Entrevistada N°15, comunicación personal, día 10 de septiembre de 2021).

En el contexto descrito, fue muy complejo articular la creación y el establecimiento de la cooperativa con la formación e incorporación de conocimiento de sus integrantes. Específicamente, por lo difícil que resultó articular las situaciones emergentes que condicionaban la participación del grupo con la adopción de conocimientos y la gestión de una cooperativa productiva. Si bien la copresencia intensa intentó remediar esta situación, no alcanzó a dar cuenta de la complejidad social en la que estaban inmersos los distintos actores implicados.

El entorno socioespacial en el cual estaba inserta la cooperativa resultaba decididamente adverso para que sus miembros pudieran afrontar la reproducción de su vida cotidiana. Por más que aquella se planteaba como una potencial solución para el abordaje de algunas dimensiones de esa reproducción, se requerían respuestas mucho más sistémicas para revertir la escasez de capital social, cultural y espacial con los que contaban las personas que habitaban en estos contextos (Soldano, 2011). A efectos de una vinculación de conocimiento desde la universidad, el caso mostró la necesidad de sofisticar el proceso de diseño de la interacción, con una contemplación más aguda sobre las condiciones del espacio donde la misma se iba a llevar adelante. Ante este cuadro de gran, Gutiérrez decidió avanzar con la compra del equipamiento, con miras a continuar el proyecto en otras condiciones u otro contexto futuro. Comentaba al respecto:

“La idea es continuar con el proyecto en algún momento, o sea por ahí arrancar con un grupo de gente que vos veas que pueda traccionar. Y después, incorporar una vez armada la cooperativa, ahí sí incorporar a gente que tenga alguna problemática, que acompañe algo ya armado. Porque arrancar de cero con lo complejo que es y con gente con tantos problemas...” (Entrevistado N°14, comunicación personal, 15 de agosto de 2021).

En octubre de 2021, se produjo un segundo desembolso de 3 millones de pesos, con los cuales se compraron los equipamientos necesarios para comenzar con la producción de las prepizzas. Pero dado que el funcionamiento de la Cooperativa había quedado en suspenso, se decidió almacenar los equipos en la Facultad, hasta tanto decidieran qué hacer con ellos. A partir de esto, Gutiérrez se comunicó con funcionarios a cargo del programa, pertenecientes al MINCYT, los cuales autorizaron que se modificaran los objetivos, y que pasara a constituirse en un proyecto interno de la universidad, de producción de prepizzas de pescado para colaborar con situaciones problemáticas de alimentación en sectores vulnerables de la ciudad.

Reconversión productiva de la cooperativa

A partir del año 2021, la Cooperativa Soberana decidió continuar con sus funciones, a pesar de no haber podido consolidar el proyecto productivo de las prepizzas de pescado. Este sufrió diversas trabas e impedimentos: desde una estructura de costos que no era competitiva, hasta el alejamiento de la mitad de las cooperativistas, y la falta de un establecimiento productivo que les permitiera aumentar la producción o incorporar nuevas líneas de trabajo.

A partir de los aprendizajes que las cooperativistas obtuvieron, y de la interacción con la UNMDP y los funcionarios municipales de Mar Chiquita, decidieron lanzar una línea de producción relacionada con la industria textil. Esta nueva actividad se denomina Soberana Art Deco, y comprende la producción de artículos de decoración para el hogar y textiles de línea blanca: juegos de sábanas y almohadones. Se trata de un producto no perecedero, que no requiere controles relacionados con salud pública. Para ello, la cooperativa consiguió máquinas de coser e insumos para la producción textil, estando en la actualidad en la búsqueda de más insumos para comenzar a producir. En palabras de una entrevistada:

“Es más fácil porque es un producto que no se deteriora con el tiempo, que en temporada puede salir muy bien y durante el año podemos comercializar no solo acá sino en Mar del Plata también.

Nosotros al estar legalmente constituidos y poder facturar no tenemos inconveniente en vender en cualquier lado” (Entrevistado N°15, comunicación personal, 10 de septiembre de 2021).

Esta reconversión productiva, a partir de la trayectoria previa, puede pensarse como resultado de la incorporación de un conjunto de saberes mediante la interacción con el grupo de la universidad. A lo largo de todas las instancias del proyecto, el intercambio con personas que cargaban con saberes y experiencias tan disímiles redundó en la institución de un bagaje de capitales sociales, culturales y espaciales, que luego pudieron ser reconvertidos en función de nuevos objetivos.

Recapitulando

A partir de lo anterior, surgen una serie de interrogantes que, a modo de hipótesis, nos planteamos responder en este capítulo: ¿Qué tipos de conocimientos se estaban poniendo en juego en esta interacción entre un grupo de la universidad y su entorno? ¿Cómo concebían al entorno y a la vulnerabilidad desde este grupo universitario? ¿Hubo una evaluación correcta de las complejidades de un entorno vulnerable? ¿Qué tipo de conocimientos se consideraron intercambiar? ¿Es suficiente una respuesta productiva a una problemática social más amplia, que incluye no solamente un problema de ingresos o laboral, sino también de reproducción social en un sentido más amplio?

El caso que desarrollamos en este capítulo está constituido por un grupo de investigación universitario que diseñó una situación de interacción que involucraba a dos agrupaciones de la sociedad civil, con miras a abordar situaciones de vulnerabilidad alimentaria en Mar del Plata y en Santa Clara del Mar. El proyecto, que presentó este grupo a la convocatoria de Ciencia Contra el Hambre, habilitaba un financiamiento cuantioso, y permitiría desarrollar en paralelo dos líneas de trabajo: la producción de panificados con harina y carne de pescado, en una cooperativa en Santa Clara, y un proyecto productivo con el Movimiento de Trabajadores Excluidos y el Banco de Alimentos de la ciudad de Mar del Plata.

Finalmente, por problemáticas relacionadas con la gestión del financiamiento, el proyecto decidió avanzar exclusivamente con la Cooperativa de Santa Clara, que se encontraba en pleno proceso de constitución. La convocatoria de CCH permitiría financiar la compra de los materiales e insumos necesarios para comenzar con la producción, al mismo tiempo que se

formaba a las cooperativistas en un abanico de cuestiones propias del trabajo cooperativo y productivo. El proyecto tenía como premisa que, a través distintas instancias de formación en situaciones de copresencia, de socialización y de formación colectiva, se podría consolidar la creación de la cooperativa, y lograr un sustento económico para las cooperativistas que venían, en su totalidad, de situaciones de violencia de género y gran vulnerabilidad económica.

En última instancia, el proyecto de CCH también preveía que, a través de la situación de interacción propuesta, se generaran procesos de “espacialización de la acción”, a partir de los cuales las cooperativistas incorporaran nuevas disposiciones y esquemas interpretativos que les permitieran lidiar con las situaciones de vulnerabilidad que atravesaban sus integrantes, y de esta manera proveerles herramientas cognitivas y laborales para poder superarlas. Los conocimientos que se pusieron en juego en la interacción incluían tanto cuestiones técnico-productivas, como organizacionales y axiológicas, relacionadas con lo que implicaban el trabajo cooperativo y sus valores asociados.

El proyecto, suponía, en paralelo, una articulación productivo-comercial con el sector de pescadores artesanales del Partido de Mar Chiquita. Este estuvo tradicionalmente caracterizado por trabajar en una informalidad casi total, con vínculos prácticamente nulos con los distintos niveles del Estado. La situación de interacción propuesta no terminó de interpelarlos, dado que la misma implicaba la registración de parte de sus actividades productivo-comerciales. Fue así como resultó imposible contar con su participación como proveedores de la materia prima principal para la fabricación de panificados con pescado.

La cooperativa, por su parte, atravesó diversos contratiempos que fueron minando el grado de participación de casi todas las cooperativistas involucradas originalmente. Los principales estuvieron constituidos por problemas de organización intrafamiliar, que restaban tiempo pasible de ser dedicado a actividades productivas; problemas personales, relacionados con la gestión emocional de sus problemáticas familiares; problemáticas de transporte, por falta de recursos para ir a trabajar; problemáticas en la gestión y resolución de conflictos entre las cooperativistas; y, por último, problemas vinculados con no haber logrado estabilidad en los ingresos a partir de las actividades productivas de la cooperativa. Por un lado, fallaron los procesos de resolución interna de conflictos, lo cual complicó el trabajo y devino en el alejamiento de casi todas las participantes. En este sentido, las situaciones de aprendizaje e interacción propuestas no lograron consolidar modalidades alternativas de gestión de los

conflictos internos de la cooperativa. Por otro lado, el proyecto que resultaba viable desde lo cognitivo, desde lo productivo y desde la potencial articulación con los actores, no parece haber tomado la misma consideración en cuanto a su viabilidad comercial. Los productos eran nutricionalmente valiosos, sin embargo, su costo de fabricación hacía que, de recurrir a canales masivos de comercialización, se convirtieran en un producto “de nicho”, poco competitivo ante opciones similares. Esto afectaba directamente la capacidad de que la cooperativa se autosustentara financieramente, dado que la comercialización en una escala mayor, por fuera de la provisión escolar o vecinal, era la única posibilidad que se veía internamente para lograr un flujo de ingresos estable y significativo. Esta falta de perspectivas económicas, sumada a las complejidades del proceso productivo y los costos crecientes del pescado en el mercado local, generaron un marco de incentivos negativos para la continuidad del proyecto.

Como resultado de los tres procesos anteriores, la falta de consolidación de la cooperativa, la imposibilidad de enrolar a los pescadores artesanales en el proyecto, la cuestión de los costos crecientes y los bajos ingresos se terminó por ver interrumpido el proceso de traducción a partir del cual Gutiérrez conformaría una red a partir de la cual se vincularían distintos nodos (actores) intervinientes.

Una red de esta densidad, con actores que atravesaban escenarios de alta vulnerabilidad, requería sostener situaciones de copresencia en plazos mucho mayores, que permitieran estabilizar cada nodo, y conformar una red de mayor solidez tanto a nivel organizativo, como de gestión de los recursos humanos involucrados. También resultaba central que el diseño del proyecto tuviera en cuenta, en mayor medida, su estructura de costos, y posibilidades de inserción comercial. A esto se sumaron las trabas a nivel burocrático del financiamiento de CCH, que no permitieron redirigir una parte del financiamiento, dado que el mismo se encontraba en su totalidad orientado a la compra de maquinarias e insumos. Esto impidió que el proyecto pudiera abordar problemáticas como la falta de un lugar de trabajo adecuado, que atendiera necesidades de contar con espacios productivos y relacionados con las actividades de crianza de niños, que complicó la continuidad del proyecto.

Por último, cabe destacar un aspecto que cobró centralidad en el caso, y que está vinculado con la cuestión de las expectativas, tanto desde los investigadores en su concepción de un territorio de intervención, del comportamiento de los actores allí presentes y de los posibles resultados

de la interacción, como desde la sociedad hacia las promesas que se generaron desde el sistema científico-tecnológico acerca de la generación de potenciales soluciones.

En el primer caso, se podría afirmar que el marco interactivo propuesto desde la universidad partió de la base de suponer que el conocimiento experto en cuestiones técnico-científicas era condición suficiente para enlazar en una red a actores que provenían de trayectorias muy diversas y de contextos de alta vulnerabilidad socioespacial. Esto no terminó sucediendo de la manera esperada, dado que emergieron problemáticas en el marco interactivo que excedieron cuestiones de conocimiento o de gestión. Las mismas estuvieron dadas por condicionamientos más generales: tanto del marco en el cual se desenvuelven prácticas de pesca de subsistencia, como de problemáticas más vinculadas a las situaciones de violencia o vulnerabilidad que atravesaban las cooperativistas involucradas.

En el segundo caso, en cuanto a las expectativas que se generaron desde la sociedad (en este caso las cooperativistas) hacia la ciencia, pudimos observar un ciclo de “entusiasmo y decepción” (Borup *et al.*, 2006). Hubo un momento inicial en que la cooperativa estaba constituyéndose, y la posibilidad de contar con financiamiento desde el proyecto de CCH generaba una posibilidad o ventana de un futuro deseable. A medida que los desembolsos se fueron retrasando, y de que la disponibilidad de un lugar de trabajo adecuado se veía cada vez más lejana, las expectativas dieron paso a una etapa de decepción.

Es preciso entender a la ciencia y la tecnología como elementos que forman parte de un contexto social mucho más amplio del cual emergen los resultados. Por ello, no se puede esperar que un programa o un proyecto generen un resultado social específico, ya que de esta manera lo que estaríamos haciendo es reducir una problemática social compleja a un problema exclusivo de conocimiento (Sarewitz *et al.*, 2004). En este sentido, y tomando como base que se trata de un proyecto que intenta reparar una problemática socioeconómica y alimentaria en un contexto de alta vulnerabilidad, es importante comprender que los procesos de insularización que se producen en este tipo de espacios se deben abordar de una manera sistémica. Esto implica tomar en consideración todas las dimensiones en simultáneo, porque las experiencias en estos territorios tienen por característica principal su gran potencialidad de limitar el rango de movimientos y posibilidades de sus habitantes. En consecuencia, el diseño de una intervención, si no tiene en cuenta estas características, puede ver mermada, en buena medida, su capacidad de incidencia.

A pesar de lo anterior, se logran rescatar diversos elementos de la situación de interacción. En primer lugar, se observa cómo la vinculación del GI con las cooperativistas permitió en estas últimas la incorporación de nuevas disposiciones sociales y espaciales, que, a posteriori, serían determinantes para que la cooperativa pudiera reorientar sus objetivos hacia la producción de productos diferentes, con mayores perspectivas de producir los resultados económicos. En segundo lugar, para el GI toda la vinculación con la cooperativa, los pescadores y el banco de alimentos, constituyó un proceso de aprendizaje intenso, que permitió que los proyectos posteriores de vinculación partieran desde presupuestos diferentes. En tercer lugar, el desarrollo de la vinculación con distintos actores locales (CEU, funcionarios municipales, pescadores artesanales, entre otros), terminó por visibilizar socialmente algunas de las problemáticas locales, y movilizó, dentro de la agenda de cada actor, la necesidad de abordar algunas dimensiones de vulnerabilidad que permitieron avanzar en medidas para regularizar la pesca y promover distintas instancias de consumo local.

Consideraciones finales

Uno de los principales desafíos de esta tesis consistió en analizar las relaciones de interacción entre las universidades y sus entornos desde una óptica original, que combinó aportes de los estudios sociales con aportes provenientes de la geografía y los estudios espaciales. En función de este cruce de conceptualizaciones provenientes de diversas disciplinas, se desarrolló una “malla conceptual” que permitió estudiar las dimensiones de conocimiento e interacción a partir de un conjunto de cinco variables espaciales. Esta malla constituye el aporte conceptual central de la tesis, al darle centralidad a lo espacial para el estudio de lo social.

Este capítulo desarrolla dos objetivos principales: en primer término, sistematizar un conjunto de reflexiones surgidas en relación con los procesos de vinculación de las universidades y sus entornos, a partir del análisis cruzado de variables espaciales con dimensiones de análisis cognitivas e interaccionales. En segundo lugar, realizar una síntesis de los principales aspectos que se relevaron en los tres casos de análisis empírico.

Como se describió anteriormente, la descripción y el análisis de los casos se llevó adelante sin un esquema teórico fijo; por el contrario, se buscó rescatar de cada caso cierta dinámica narrativa propia, que estuvo conformada principalmente por el respecto cronológico a los procesos que se relataron. Esto implicó dos cosas: en primer término, que aparecieran temas o problemáticas que alejaran la posibilidad de una comparabilidad más directa entre los casos; en segundo término, que surgiera la necesidad de contar en este último capítulo con un apartado que reorganizara algunos aspectos salientes de los mismos, en función de una serie de dimensiones más generales, con el objetivo de desplegar un análisis que relacione aspectos.

Primeras conclusiones en relación con las dimensiones de análisis

A lo largo de la tesis, se tomaron dos dimensiones de análisis centrales: interacción y conocimiento. Estas fueron estudiadas a partir del cruce con cinco variables de raigambre geográfico: espacio, territorio, lugar, escala y copresencia. La síntesis conceptual de este cruce fue explicada con anterioridad en el apartado teórico-metodológico. Sin embargo, resulta preciso comprender de qué manera cada variable utilizada permite reflexionar sobre las dimensiones que se estudian en esta tesis.

1. Espacio: este concepto, nodal en la geografía contemporánea, alude principalmente a la asignación de significados que se propone desde la universidad, y a la manera en que los mismos son apropiados y resignificados por actores locales. Los marcos interactivos que se plantearon desde la universidad implicaron, de manera primigenia, que se pusieran en juego concepciones acerca de las prácticas que llevaban adelante los sujetos, y de las formas en las cuales las desarrollaban. De esta manera, un análisis espacial permite integrar a la acción y el mundo social, con un foco simultáneo en los aspectos materiales y no materiales.

En última instancia, este foco en lo espacial habilita pensar de qué manera las acciones de los sujetos se ven constreñidas por el espacio en el cual se desarrollan, a la par que incorporan la idea del rol que juegan los marcos interactivos, situados espacio-temporalmente, para modificar esas “condiciones de base”, y generar así nuevos escenarios, con acciones novedosas por parte de los actores involucrados. Desde las diferentes perspectivas teóricas que fueron reseñadas a lo largo de la tesis, se puede entender a la espacialidad como un tipo específico de acción social, en el cual se

entrecruzan representaciones, subjetividades, imaginarios, racionalidades, escalas y rutinas.

Es así como la construcción social del espacio, desde una perspectiva teórica constructivista, tiene innegables connotaciones políticas: permite indagar las formas en las cuales se reproducen las relaciones sociales, se generan las disputas de poder situadas, y se producen maneras sutiles mediante las cuales se configuran significados asignados socialmente.

La construcción del espacio, entonces, resulta imprescindible para entender las maneras en las cuales el conocimiento se crea, circula, se resignifica y se apropia; y la influencia que tienen los procesos que involucran al conocimiento para influir en la configuración socioespacial de las problemáticas. En el caso de Los Pinos, por ejemplo, a partir de la situación de interacción propuesta por la universidad se generaron procesos de espacialización que implicaron negociaciones, intercambios, reconfiguraciones de significados sobre las posibilidades de actuación de cada vecino en su mundo cotidiano.

2. Territorio: este concepto, de muy extendida utilización en las ciencias sociales contemporáneas, es tomado en esta tesis en su dimensión más relacional, como una red de vinculaciones sociales, atravesada por relaciones de poder. Resulta útil, entonces, para analizar la forma en la cual se configuran las diferentes redes de relaciones en cada caso. Esto permite comprender cómo circula el conocimiento en ellas, y de qué manera este tipo de procesos crea formas de legitimidad y modos de regulación de la vida social específicos.

Los marcos interactivos a los cuales se hizo alusión con anterioridad se encuentran situados espacio-temporalmente, y en ellos se produce el cruce de actores de procedencias y experticias diversas. En relación con esto, aparece un concepto derivado de territorio que es la territorialidad, entendida por la capacidad o voluntad de ejercer influencia sobre otros actores y, de cierta manera, controlar los flujos en el espacio. Esto remite a pensar en la configuración de las redes, en quién controla los flujos, de qué manera, qué bienes materiales o simbólicos circulan, cuál es el rol del conocimiento, y de qué manera se ponen en diálogo o en tensión trayectorias disímiles en cuanto a capitales espaciales, sociales o simbólicos.

En el caso del Proyecto de CCH, la interacción propuesta bregó por conformar una red de actores en la cual circularan conocimientos técnicos con la finalidad de solucionar problemáticas socioespaciales. La complejidad de la red planteada impidió su

concreción final, sin embargo cada actor implicado reconoce haber obtenido aprendizajes significativos con miras a futuros proyectos.

3. El concepto de lugar, luego de haber presentado dos conceptos mucho más abstractos y abarcativos como espacio y territorio, tiene un despliegue y una utilización más transparentes a lo largo de la tesis. En un principio, alude a localizaciones del espacio que no tienen una delimitación exacta, sino que su uso está regido por quienes generan una propia delimitación espacial de sus prácticas. Es así como un actor social determinado hace alusión o nombra a un lugar (en una localización específica) cuyos límites no coinciden exactamente con el lugar que nombra otro actor social. Este concepto, de esta manera, es útil para remarcar que las localizaciones y sus límites también están socialmente contruidos, lo cual tiene necesarias implicancias para la misma delimitación de las problemáticas abordadas.

Este tipo de diferenciación escalar del concepto de lugar es importante para entender cómo se construyen sentidos colectivos localizados, dado que a partir de estos es que se pueden entender las formas de circulación y adopción de conocimiento en localizaciones específicas, procesos que siempre son contingentes. Esto se puede verificar en el caso del PHyC, que tuvo un despliegue significativo en diversos barrios de la ciudad de Mar del Plata. En una de sus localizaciones, en el Barrio El Caribe, el proyecto identificó referentes barriales que tenían una trayectoria previa de militancia política o social, que permitieron establecer formas específicas de circulación de los conocimientos técnicos aportados por la universidad.

Desde una perspectiva constructivista en geografía, el concepto de lugar se entrelaza con aspectos culturales, políticos y redes de conocimiento, los cuales pueden ser percibidos en escalas diversas por diferentes actores. En este sentido, adopta una dimensión relacional que permite llevar a un nivel más concreto el concepto relativamente abstracto de territorio. A pesar de esto, a lo largo de la tesis se ha hecho en varias ocasiones un uso por momentos intercambiable de ambos términos, solo a efectos de contar con sinónimos para mejorar la sintaxis y comprensión del texto.

4. Siguiendo con la línea de pensamiento constructivista, el concepto de escala también es pensado en esta tesis como un elemento contingente, que es tanto una producción social como un objeto disputado por diferentes actores sociales. Esto nos lleva a entender a las

escalas de una manera relacional de niveles múltiples, que es producto del devenir de los actores y del cruce de sus trayectorias en lapsos temporales determinados.

Tomado de esta forma, este concepto permite comprender de qué manera la universidad construye su propia escala de intervención, la cual está dada por su capacidad económica, de recursos humanos, y su voluntad de abordar la resolución de una problemática compleja, que decide recortar en alguna de sus dimensiones (energética, habitacional, alimentaria).

A partir de la escala que construye uno de los actores implicados en la interacción, se puede observar cómo ese rango de intervención colisiona con los intereses, objetivos y escalas de intervención propias de otros actores sociales presentes en el lugar. Esto dispara una serie de tensiones y disputas por el control de los procesos que están en pugna, en los cuales la dimensión del conocimiento juega un rol fundamental, dado que existen complejidades que surgen para la circulación de este entre escalas diversas. Por otro lado, el conocimiento circula mejor en escalas menores, dado que los procesos de interacción cara a cara constituyen el marco ideal para la transmisión y adopción de nuevos saberes.

El caso de Los Pinos es un buen ejemplo de esto, dado que en este caso se puede observar de qué manera se produjo una delimitación clara de la escala de intervención desde el grupo académicos, con un recorte preciso de las dimensiones que se proponía abordar (energética y ambiental, principalmente). Esto implicó, por momentos, tensiones con actores vecinales que manifestaban tener otras prioridades (laborales y económicas en su mayoría), lo cual llevó a procesos de negociación de objetivos, conocimientos y significados intercambiados.

5. La copresencia permite comprender la interacción cuando actores diversos se encuentran en un espacio delimitado de forma presente y simultánea. Los procesos de comunicación que se dan en este contexto están mediados por el espacio, y disponen la generación de patrones de interpretación compartidos. Esto resulta central para entender procesos de intercambio de saberes entre actores que tienen experticias y saberes diferenciados, particularmente en la vinculación entre expertos y legos.

El intercambio de conocimiento en estos marcos interactivos en copresencia tienen como resultado alterar de una forma más profunda las relaciones que las personas tienen con los distintos espacios, y promover la generación de procesos identitarios novedosos. Es en estos encuentros corporizados donde se pone en juego la institución de

disposiciones espaciales novedosas, a partir de la adopción de conocimientos tanto explícitos como tácitos.

En los tres casos se observa la importancia que cobró la copresencia para los intercambios de conocimientos entre los actores involucrados: la comunicación cara a cara, mediada por el espacio y en localizaciones con características específicas, generó situaciones de interacción que permitieron intercambios de conocimientos en ambas direcciones. Esto terminó por instituir, eventualmente, nuevas disposiciones para actuar en el espacio tanto en actores universitarios como vecinales.

Conclusiones en relación con los casos

Como se mencionó desde un principio de esta tesis, el objetivo principal consistió en comprender las modalidades de interacción de la UNMDP con su entorno a partir del estudio de tres experiencias de vinculación, en las cuales se produjeron marcos interactivos de vinculación entre grupos de investigadores de la universidad y distintos grupos de actores locales. Estas vinculaciones, propuestas desde la universidad, compartieron el objetivo general de abordar problemáticas sociales complejas, a partir de promover algún tipo de solución tecnológica-cognitiva en espacios que contaban con distintas dimensiones de vulnerabilidad.

En ese marco, las preguntas de investigación que orientaron este trabajo se refirieron a entender cómo se construyeron las situaciones de interacción, qué dinámicas sociales y espaciales enfrentaron los académicos en el entorno, de qué manera se construyeron los problemas y las propuestas de soluciones, cómo se construyeron las escalas de intervención, cómo se produjo la circulación de conocimientos en los marcos interactivos y de qué manera el espacio habilitó o condicionó el despliegue de las interacciones.

En relación con la construcción de las situaciones de interacción, en dos de los tres casos estas surgieron principalmente como procesos a partir de los cuales investigadores de la universidad buscaron “transferir” sus conocimientos a un entorno que caracterizaron como vulnerable. En el caso restante, y a partir de una trayectoria previa del investigador principal del proyecto, la construcción de los problemas, y como consecuencia la interacción, se diseñó, en cierto grado, de manera conjunta con los actores locales. El diseño de los procesos de interacción con el entorno condicionó el grado de despliegue, de apropiación y de afectación que tuvieron los proyectos en última instancia. Cuanto menor era el grado de participación de los actores locales

en el diseño y la evolución de los proyectos, menor impacto y duración lograron. El caso que consiguió mayor estabilidad, duración e impacto se caracterizó por implementar una metodología de vinculación más horizontal, en la cual se produjeron procesos de coconstrucción de conocimientos entre expertos universitarios y emprendedores barriales.

Los tres casos debieron lidiar con situaciones socioeconómicas adversas en los sitios donde se implantaron, o espacios que contaban con diferentes dimensiones de vulnerabilidad que atravesaban las situaciones de interacción. Y en todos los casos, se pudo observar cómo los proyectos tuvieron mayor dinamismo en la medida en la cual lograron establecer interacciones con vecinos y emprendedores barriales que ya tenían una trayectoria previa de vinculación con diferentes organizaciones estatales o privadas. Estos aprendizajes pasados de los actores barriales resultaron determinantes para que las situaciones de interacción generaran procesos de apropiación del conocimiento, y para que los mismos pudieran estabilizarse en el tiempo. Los espacios con mayores problemáticas en cuanto a accesibilidad de transporte, llegada de servicios básicos o presencia estatal (como el caso de El Caribe) resultaron más propicios para la autoorganización, o para generar dinámicas de interacción social mediadas por organizaciones políticas o del tercer sector, que canalizaron los esfuerzos barriales por abordar situaciones problemáticas.

Por el contrario, los otros dos casos contaban con situaciones de accesibilidad, o de presencia de servicios básicos. Sin embargo, las dinámicas de interacción social entre vecinos resultaban algo más intermitentes. Si bien en todos los casos los vecinos y emprendedores barriales vivían en situaciones de mucha vulnerabilidad social, económica o ambiental, la gestión de servicios básicos funcionó en uno de los casos como una condición de base que dio lugar a procesos intensos de interacción barrial con miras a su consecución. Los procesos de aprendizaje de estos actores para gestionar servicios públicos o ayudas estatales, en situaciones pasadas, facilitaron la interacción con otro actor estatal, en este caso la universidad.

Las escalas de intervención que llevaron adelante los tres casos estuvieron condicionadas desde un principio por la magnitud de financiamiento que dispusieron en cada caso, y por los compromisos que asumió cada grupo de investigación en cuanto al alcance propuesto para la interacción. Fue así como dos de los proyectos establecieron como escala solucionar problemáticas energéticas o alimentarias a nivel de un pueblo o una localidad (Los Pinos y Santa Clara del Mar); mientras que el otro, se propuso intervenir en escala barrial, pero

incluyendo a numerosos barrios de la periferia marplatense, lo cual daba una escala de intervención muy superior, en términos tanto de superficie alcanzada, como de habitantes involucrados. Las escalas de cada intervención colisionaron con las escalas en las cuales se movían otros actores intervinientes: desde empresas de servicios públicos, funcionarios locales, organizaciones del tercer sector, y empresas privadas.

Para todos los casos, fue un desafío circunscribir su intervención a lo previsto, dado que, en muchos casos, sobre la marcha, debieron incorporar la solución de problemáticas emergentes que llevaron a ampliar la misma escala de intervención (en algunos casos ampliándola, en otros circuncribiéndola). Fue allí cuando se evidenció la importancia de la trayectoria de los grupos de investigación, en cuanto a su capacidad de lidiar con actores disímiles, con mandatos de intervención por momentos contradictorios, y con intencionalidades no siempre convergentes.

La circulación de conocimientos estuvo en los tres casos condicionada por factores diversos: las trayectorias previas de acumulación de conocimientos explícitos y tácticos; el interés que se logró congregarse en los actores involucrados para la incorporación de saberes; el cariz que tomaron las dinámicas de interacción entre grupos de expertos, vecinos y emprendedores barriales; y la confianza que los vecinos y otros actores depositaron en los saberes aportados por los grupos de la universidad. En todos los casos, se evidenció una valoración muy alta por parte de los vecinos acerca de los conocimientos aportados por los expertos universitarios, y se reconoció la importancia de adoptarlos para sus trayectorias de vida. Aún en los casos que no lograron enrolar por completo a todos los actores propuestos inicialmente por los proyectos de intervención, los que efectivamente se vincularon valoraron muy positivamente la interacción con la universidad.

Por último, resta concluir acerca de la importancia de pensar la espacialidad de las interacciones, y de la manera en que esta variable influyó en el desenvolvimiento de los proyectos. A partir de los casos, se puede observar cómo en cada proyecto se abordó de una manera diferencial: en uno de los casos se detectó una visión algo lineal, tanto sobre las condiciones de base sobre las cuales se planteaba la interacción, como de la influencia que tendría la misma en las disposiciones eventualmente adoptadas por los vecinos. En otro de los casos, ciertos déficits en el diseño de la interacción limitaron su efectivo despliegue, al no tomar en cuenta elementos condicionantes del contexto y el efecto que esto tendría sobre las acciones planteadas. El tercer caso adoptó una concepción del contexto espacial más compleja y

adaptativa, que le permitió sortear las complejidades territoriales de una manera más solvente e incorporar en la gestión de los proyectos a los vecinos y organizaciones del entorno.

En definitiva, a la luz de lo observado, la espacialidad permite comprender de una manera integradora los elementos del contexto, los efectos que generan las situaciones de interacción en esos marcos, y la manera en que el contexto a su vez se ve influenciado por las prácticas. Las situaciones de interacción que lograron mayor impacto, en última instancia, fueron las que trazaron diagnósticos más precisos, calibraron con mayor precisión las necesidades del entorno y plantearon a posterior un diálogo más horizontal con los actores involucrados. Esto marca la importancia de considerar en igual plano a la transferencia del conocimiento con una evaluación profunda del entorno donde se pretende establecer una vinculación con miras a solucionar problemáticas socioeconómicas.

A futuro quedan abiertas una serie de preguntas que surgieron del análisis, y que pueden ser insumo para futuras investigaciones. Uno de los interrogantes que aparecieron en el trabajo tiene que ver con el rol que juegan los procesos de evaluación de los proyectos o financiamientos científico-tecnológico, y de qué manera éstos se podrían optimizar para reducir los márgenes de potenciales fallos. En este sentido se podría avanzar, por ejemplo, con investigar las maneras de mejorar las metodologías de evaluación de los proyectos, y sus grillas de evaluación.

Otro de los interrogantes que aparece con centralidad está vinculado con la problemática de la evaluación de los impactos sociales que, si bien ha sido abordada por la literatura del campo CTS, requiere mayores reflexiones sobre el desarrollo de metodologías de evaluación y de construcción de indicadores que permitan mensurar el impacto, alcance y capacidad de movilización de proyectos que vinculan actores académicos con actores del entorno local.

Referencias

- Aghion, P. y Howitt, P. (1992). A model of growth through creative destruction, *Econometrica*, 60, pp. 323-351.
- Agnew, J. (1987). *Place and Politics: the geographical mediation of State and Society*. Boston and London: Allen and Unwin.
- Agnew, J. (2011). Space and place. In *The SAGE Handbook of Geographical Knowledge*. SAGE Publications Ltd, pp. 316-330. <https://doi.org/10.4135/9781446201091>
- Agnew, J. (2009). Killing for Cause? Geographies of War and Peace. *Annals of The Association of American Geographers - ANN ASSN AMER GEOGR*. 99. 1054-1059. 10.1080/00045600903279432.
- Amin, A., y Cohendet, P. (2005). Geographies of Knowledge Formation in Firms. *Industry & Innovation*, 12, 465–486. <https://doi.org/10.1080/13662710500381658>
- Ángeles, O. (1992). “Consideraciones en torno al concepto de extensión de la cultura y de los servicios”. En: *Revista de la Educación Superior*, 21, pp. 81-96. http://publicaciones.anuies.mx/pdfs/revista/Revista81_SIA3ES.pdf
- Appel, S., Rubaii, N., Lippez de Castro, S. y Capobianco, S. (2017). The concept and context of the engaged university in the Global South: Lessons from Latin America to guide a research Agenda. *Journal of Higher Education Outreach and Engagement*, 21(2), 7-34. Georgia: University of Georgia.
- Appel-Meulenbroek, R. (2010). Knowledge sharing through co-presence: Added value of facilities. *Facilities*, 28, 189. <https://doi.org/10.1108/02632771011023140>
- Araya, I. R. (2018). “La espacialidad urbana en la construcción socio espacial de los lugares: una mirada desde el giro espacial”, *Revista Geográfica de América Central*, 61E (3).
- Arbo, P. y Benneworth, P. (2007). Understanding the Regional Contribution of Higher Education Institutions: A Literature Review, OECD.
- Arnkil, R., Järvensivu, A., Koski, P., y Piirainen, T. (2010). *Exploring quadruple helix outlining user-oriented innovation models*. Tampere: Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino Oy.
- Arocena, R.; Sutz, J. (2015). Challenges for Public Higher Education in Uruguay. *International Higher Education*, (19). Doi: <https://doi.org/10.6017/ihe.2000.19.6873>

- Atta-Owusu, K. y Dahl Fitjar, R. (2023). Incentivizing knowledge exchange engagement: direct and indirect benefits of external engagement, *Studies in Higher Education*, 48:5, 758-769, DOI: 10.1080/03075079.2023.2185601
- Bartolucci, M. (2019). Universidad Nacional de Mar del Plata. Antecedentes, proyectos y trayectorias. EUDEM.
- Benedetti, A. y Souto, P. (2011). "Pensando el concepto de lugar desde la geografía" en Souto, Patricia (comp.) *Territorio, lugar, paisaje. Prácticas y conceptos básicos en geografía*. Editorial Facultad de Filosofía y Letras UBA. Buenos Aires.
- Benneworth, P., Pinheiro, R. y Sánchez-Barrioluengo, M. (2016). One size does not fit all! New perspectives on the university in the social knowledge economy. *Science and Public Policy*, 43(6), 731–735. Doi: 10.1093/scipol/scw018.
- Bianculli, K. y Arana, M. (2013). "Aportes a los estudios históricos de la planificación educativa en Latinoamérica (1968-1971)" VII Jornadas Nacionales sobre la Formación del Profesorado, Mar del Plata.
- Borkman, T. (1976). "Experiential Knowledge: A New Concept for the Analysis of Self-Help Groups", *Social Service Review*, 50(3), pp. 445–456.
- Borup, M., Brown, N., Konrad, K. y Van Lente, H. (2006). "The sociology of expectations in science and technology", *Technology Analysis & Strategic Management*, 18:3-4, pp. 285-298, DOI: 10.1080/09537320600777002
- Bourdieu, P. (2011). *Las estrategias de la reproducción social*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Brenner, N. (2001). The limits to scale? Methodological reflections on scalar structuration *Progress in Human Geography*, 25, pp. 591-614.
- Buchbinder, P. (2010). *Historia de las Universidades Argentinas*. Sudamericana.
- Buschini, J. (2020). "Trazando fronteras: reflexiones sociológicas sobre la constitución de los expertos y el saber experto en los casos de la Dietología y la Cancerología en Argentina (1920-1940)", *Historia y sociedad* (39), pp. 309-332
- Bush, V. (1999). "Ciencia, la frontera sin fin. Un informe al presidente, julio de 1945", *Revista REDES*, 14, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes.
- Citecus (2019). "El biogás y su aporte para el desarrollo comunitario". Disponible en: <https://www.citecus.com/el-biogas-y-su-aporte-para-el-desarrollo-comunitario/>

- González, F.; Cusán, M. I. y Rotondaro, R. (2013). “Tecnologías sociales como un emergente territorial: aportes para un modelo de gestión del hábitat popular. Experiencia matriz para pilares de conexión eléctrica, Mar del Plata, Argentina”, Cuaderno Urbano. Espacio, Cultura, Sociedad 14(14), Universidad Nacional del Nordeste.
- González, F.; Rotondaro, R.; Blanco Pepi, M.; González, G.; Freire, P.; Ispizua, J.; Melián, I.; Mitidieri, A. (2020). “Tecnologías sociales en territorios urbanos pobres barrio nuevo golf, Mar del Plata, Argentina (2010-2018)”, REDES, Universidad Nacional de Quilmes, Bernal.
- Callon, M. (1995). “Algunos elementos para una sociología de la traducción: la domesticación de las vieiras y los pescadores de la Bahía de Saint Brieu”. En Iranzo J. M. et al. Sociología de la Ciencia y la Tecnología. Madrid: CSIC, pp. 259-282.
- Carrozza, T., y Cavalli, A. (2022). “La innovación tecnológica popular y las economías transformadoras: la experiencia del Programa de Innovación y Producción Popular (PIPP) en Argentina”. Tekoporá. Revista Latinoamericana De Humanidades Ambientales Y Estudios Territoriales, 4(1), pp. 101-120.
- Carlevaro, P. (2010). “Intersecciones y uniones de la universidad con la ética”. Reencuentro, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, 57, México: UAM, pp. 8–17.
- Cecchi, N.; Pérez, D.A.; Sanllorenti, P. (2013). Compromiso social universitario. De la Universidad posible a la Universidad necesaria. Buenos Aires: IEC-CONADU.
- Chapuis, R. (1984). Le système socio-spatial. De la géographie urbaine à la géographie sociale, sens et non sens de l'espace. Paris.
- Chiroleu, A. R. (2000). “La Reforma Universitaria”. En R. Falcón (Dir.), Nueva Historia Argentina. Democracia, conflicto social y renovación de ideas (1916-1930), pp. 357-389. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
- Clark, B. (1998). Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transformation. Oxford: Pergamon-Elsevier.
- Clarke, A. y Fujimura, J. (eds.) (1992). The Right Tools for the Job. At Work in Twentieth-Century Life Sciences. Princeton: Princeton University Press.
- Clarke, A y Fujimura, J. (1992). “Introduction: What tools? Which Jobs? Why right?”. En: Clarke, A.; Fujimura, J. (eds), The Right Tools for the Job: At Work in Twentieth Century Life Sciences. Princeton: Princeton University Press.

- Collinge C. (1999). "Self-organisation of society by scale: A spatial reworking of regulation theory". *Environment and Planning D: Society and Space*, 17, pp. 557–574.
- CONICET (2022). Criterios de evaluación para solicitudes de promoción dentro de la carrera del/la Investigador/a Científico/a y Tecnológico/a. Disponible en: <https://convocatorias.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/sites/3/3-CRITERIOS-DE-EVALUACION.pdf>
- Correia de Andrade, M. (2002). "Territorialidades, desterritorialidades, novas territorialidades: os limites do poder nacional, e do poder local", en Milton Santos, María Adélia Souza, Maria Laura Silveira (org.), *Território: globalização e fragmentação*, São Paulo, Hucitec, pp. 213-220.
- Dagnino, R. (2007). "Empezando por la extensión universitaria". Conferencia presentada en el II Seminario Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Hábitat Popular. Córdoba, Argentina.
- D'Andre, R.; Zubiría, A.; Sastre, P. (2010). *Reseña histórica de la extensión universitaria*. Buenos Aires: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, pp. 2-9. Disponible en: <http://extension.unicen.edu.ar/jem/completas/188.pdf>
- Di Bello, M. (2013). *Una ciencia que sirva... ¿a quién?: La construcción de la utilidad social del conocimiento científico, grupos de investigación académicos y problemas sociales*. Tesis Doctoral. Universidad de Buenos Aires.
- Di Bello, M. y Romero, L. (2018). "Concepciones y orientaciones de acción de grupos de investigación académicos sobre sus entornos. Elementos motivacionales, políticos, disciplinares e institucionales". *Revista de la Educación Superior*. 47 (186) 137-162.
- Di Bello, M. y Romero, L. (2018b). "Vinculación y extensión universitaria: la relación entre la universidad y sus entornos en las universidades nacionales de Quilmes y Lanús". *Revista Apuntes: Revista de Ciencias Sociales*. XVI (82), pp. 145-171.
- Di Bello, M.; Romero, L.; Soca, F. y Sánchez Macchioli, P. (2020). "Gestión y conceptualización de las interacciones con el entorno en universidades argentinas". *Ciencia y Educación*. Vol. 4(3). Doi: <https://doi.org/10.22206/cyed.2020.v4i3.pp7-25>
- Di Méo, G. (1991). *L'Homme, la Société, l'Espace*. Paris: Anthropos.
- Di Méo, G. y Buléon, P. (2005). *L'espace social: Lecture géographique des sociétés*. París: Armand Colin.
- Dosi, G. (1999). *Some Notes in National Systems of Innovation and Production and their Implications for Economic Analysis*. En: Archibugi, D, J. Howells y J. Michie (Ed.).

- Innovation Policy in a Global Economy, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 35-48.
- Duarte, F. (2017). Space, Place and Territory. A Critical Review on Spatialities. London: Routledge.
- Dürr, H. y Zepp, H. (2012). Geographie verstehen. Ein Lotsen- und Arbeitsbuch. Paderborn: Schöningh / UTB.
- Edquist, Ch. (1997). Systems of innovation approaches. Their emergence and characteristics. In Edquist, Ch (ed.). Systems of Innovation. Technologies, institutions and organizations. Londres: Ed. Pinter.
- Elias, N. (1970). Introdução à Sociologia. Lisboa, Edições 70.
- Ellegård, K. y Svedin, U. (2012). Torsten Hägerstrand's time-geography as the cradle of the activity approach in transport geography. Journal of Transport Geography, 17-25, DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2012.03.023>
- Enders, J.; de Boer, H. F. y Westerheijden, D. F. (2011). Reform of Higher Education in Europe. Rotterdam: Sense Publishers.
- Entrikin, J. (1976). Contemporary humanism in geography. Annals of the Association of American Geographers, 66, pp. 615-632.
- Etzkowitz H. y Leydesdorff, L. (2000). "The dynamics of innovation: From national systems and "Mode 2" to a triple helix of university-industry-government relations". Research Policy 29(2), 109-123. Elsevier. Doi: [https://doi.org/10.1016/S0048-7333\(99\)00055-4](https://doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00055-4)
- Farinelli, F. (2003). Geografia. Un'introduzione ai modelli del mondo, Torino: Einaudi.
- Forni, P. (2010). "Reflexiones metodológicas en el bicentenario. La triangulación en la investigación social: 50 años de una metáfora". Revista Argentina de Ciencia Política 13/14, pp. 255-270.
- Frickel, S. (2004), "Scientist Activism in Environmental Justice Conflicts: An Argument for Synergy", Society & Natural Resources, 17:4, 359-366, DOI: 10.1080/08941920490278809
- García Chiang, A. (2014). La territorialización en el análisis sociológico. En Sociólogos y su sociología. Experiencias en el ejercicio del oficio en México. Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 267-283.

- García Delgado, D. y Casalis, A. (2013). “Modelo de desarrollo y universidad en Argentina. Análisis crítico y contribución de la extensión universitaria al desarrollo local y regional”. +E: Revista De Extensión Universitaria, 3(3), pp. 24-31. <https://doi.org/10.14409/extension.v1i3.468>
- García Guadilla, C. (2010). “Heterogeneidad y concentración en las dinámicas geopolíticas del conocimiento académico. Reflexiones y preguntas para el caso de América Latina”. En Mollis, M. et al., Políticas de postgrado y conocimiento público en América Latina y el Caribe, Buenos Aires: CLACSO.
- Gebhardt H., Reuber P., Wolkersdorf G. (2003). "Kulturgeographie, Lineamientos y Perspectivas". En: Gebhardt H., Reuber P., Wolkersdorf G. (dir.), Kulturgeographie. Aktuelle Ansätze und Entwicklungen, Heidelberg & Berlin, Spektrum Akademischer Verlag, pp. 1-27.
- George P. (2007). Diccionario Akal de Geografía. Madrid. Akal.
- Germes, M.; Glasze, G. y Weber, F. (2011). “Neue Kulturgeographie” Débats et perspectives au sein de la nouvelle géographie culturelle germanophone. Cybergeog. 10.4000/cybergeog.24727.
- Gibbons, M., Limoges, C., Nowotny, H., Schwartzman, S., Scott, P. y Trow, M. (1994). The new production of knowledge: The dynamics of science and research in contemporary societies. Thousand Oaks, Estados Unidos: Sage Publications Inc.
- Giddens, A. (2006). La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración. Buenos Aires: Amorrortu
- Goddard, J. B. y Chatterton, P. (2003). The Response of Universities to Regional Needs. En F. Boekema, E. Kuypers, R. Rutten (eds.). Economic Geography of Higher Education: Knowledge, Infrastructure and Learning Regions, Londres: Routledge.
- Goddard J., Coombes, M., L. Kempton, L. y Vallance, P. (2014). Universities as anchor institutions in cities in a turbulent funding environment: vulnerable institutions and vulnerable places in England. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 7(2), 307-325. Cambridge: Cambridge University Press.
- Goddard, J., Hazelkorn, E., Kempton, L. y Vallance, P. (2016). The Civic University - The Policy and Leadership Challenges. Chaltenham: Elgar. Doi: 10.4337/9781784717728.
- Goffman, E. (2001), La presentación de la persona en la vida cotidiana. Buenos Aires: Amorrortu.
- Goffman, E. (1981). Forms of talk. Estados Unidos: University of Pennsylvania Press.

- Gordon, A. (2011). "Las políticas de ciencia, tecnología y educación superior en el período 2003-2010 en Argentina: continuidades y rupturas con el legado de los noventa". En: Revista Sociedad N° 29/30, Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales/UBA.
- Grabher, G., Melchior, A., Schiemer, B., Schüßler, E., y Sydow, J. (2017). From "being there" to "being aware": Confronting geographical and sociological imaginations of copresence. *Environment and Planning A*, 50. <https://doi.org/10.1177/0308518X17743507>
- Gren, M. (2001). "Time-geography matters". En May, J. y Thrift, N. (eds.) *TimeSpace: Geographies of Temporality*. London: Routledge.
- Gumuchian, H. (1991). *Représentations et aménagement du territoire*. París: Economica.
- Gumuchian, H; Grasset, E. Lajarge, R. y Roux, E. (2003). *Les acteurs, ces oubliés du territoire*. París: Anthropos Economica.
- Gunasekara, C. (2006). Reframing the Role of Universities in the Development of Regional Innovation Systems. *The Journal of Technology Transfer*. Doi: 31. 101-113. 10.1007/s10961-005-5016-4.
- Guston, D. y Keniston, K. (1994). *The fragile contract: University science and the federal government*. Cambridge, MA: MIT Press, pp. 270. Doi: <https://doi.org/10.1002/pam.4050150221>
- Haesbaert, R. (2013). "Del mito de la desterritorialización a la multiterritorialidad", *Cultura y representaciones sociales*, 8(15), pp. 9-42.
- Harvey, D. (1990) *Los límites del capitalismo y la teoría marxista*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Hägerstrand T. (1985). Time-geography: focus on the corporeality of man, society, and environment. *The Science and Praxis of Complexity*, The United Nations University, pp. 193-216.
- Hammersley, M. y Atkinson, P. (1994). *Etnografía. Métodos de Investigación*. Barcelona: Paidós.
- Harding, A., Laske, S. y Scott, A. (ed.). (2007). *Bright Satanic Mills*. London: Routledge. Doi: <https://doi.org/10.4324/9781315569970>
- Hérin, R. (1984). "Quelques convictions pour la géographie sociale", *Revue géographies de Lyon*, 59(3), pp. 147-155.

- Hérin, R. (2006). “Por una geografía social, crítica y comprometida”, Scripta Nova, vol. X: N° 218(93), Universidad de Barcelona.
- Hess, A. y Rothaermel, F. (2011). “When Are Assets Complementary? Star Scientists, Strategic Alliances, and Innovation in the Pharmaceutical Industry”, Strategic Management Journal, 32, pp. 895 - 909.
- Hess, A., y Rothaermel, F. (2011). When Are Assets Complementary? Star Scientists, Strategic Alliances, and Innovation in the Pharmaceutical Industry. Strategic Management Journal, 32, 895–909. <https://doi.org/10.1002/smj.916>
- Hoyt, L. y Hollister, R. (2014). Moving Beyond the Ivory Tower: The Expanding Global Movement of Engaged Universities. En B. Hall, y R. Tandon, (eds.). Knowledge, Engagement and Higher Education: Rethinking Social Responsibility. Nueva York: Palgrave Macmillan.
- Iorio, R., Labory, S., y Rentocchini, F. (2017). ‘The Importance of Pro-social Behaviour for the Breadth and Depth of Knowledge Transfer Activities: An Analysis of Italian Academic Scientists’, Research Policy, 46: 497–509
- Ispizúa, J. (2022). “Cooperativas de trabajo y estrategias de gestión para el acceso al agua en contextos de urbanización popular en Mar del Plata (2008-2015)”, Revista Quid 16, Buenos Aires.
- Ispizúa, J.; Melián, J.; Mitidieri, L.; Blanco Pepi, M. (2021). “Políticas públicas y participación ciudadana: análisis de tres programas estatales implementados en un barrio popular de Mar del Plata (2018-2020)”, Cuaderno Urbano, <http://dx.doi.org/10.30972/crn.31315779>
- Jacob, W.J., Sutin, S.E., Weidman, J.C. y Yeager, J.L. (eds.). (2015). Community Engagement in Higher Education Policy Reforms and Practice. Rotterdam: Sense Publishers. Doi: 10.1007/978-94-6300-007-9
- Jessop, B., Brenner, N., y Jones, M. (2008). “Theorizing Sociospatial Relations”, Environment and Planning D: Society and Space, 26(3), pp. 389–401. <https://doi.org/10.1068/d9107>
- Jociles Rubio, M. I. (2018). “La observación participante en el estudio etnográfico de las prácticas sociales”. Revista Colombiana de Antropología, 54(1), pp. 121–150. <https://doi.org/10.22380/2539472x.386>
- Knorr Cetina, K. (1999). Epistemic Cultures. How the Sciences Make Knowledge. Harvard University Press.

- Kreimer, P. y Zabala, J. P. (2006). “¿Qué conocimiento y para quién? Problemas sociales, producción y uso social de conocimientos científicos sobre la enfermedad de Chagas en Argentina”, *REDES*, 12(23), pp. 49-78.
- Kruss, G., Visser, M., Aphane, M. y Haupt, G. (2012). *Academic Interaction with External Social Partners: Investigating the Contribution of Universities to Economic and Social Development*, Ciudad del Cabo: HSRC Press.
- Kwiek, M. (2013). “Knowledge Production in European Universities States, Markets, and Academic Entrepreneurialism”, Bern, Switzerland: Peter Lang AG. Series: Higher Education Research and Policy.
- Lam, A. (2011). “What Motivates Academic Scientists to Engage in Research Commercialization: ‘Gold’, ‘Ribbon’ or ‘Puzzle’?” *Research Policy*, 40(10), pp. 1354–68. doi:10.1016/j.respol.2011.09.002
- Lamarra, N. F. (2009). “Hacia una universidad democrática, inclusiva y de calidad en América Latina. Los aportes de la investigación en educación comparada”. En: *Investigación en Educación, Pedagogía y Formación Docente*. Medellín: Universidad Nacional de Antioquia.
- Laredo, P. (2007). “Revisiting the Third Mission of Universities: Toward a Renewed Categorization of Universities Activities?”, *Higher Education Policy* (20), 441-456.
- Ley N° 21.139. (1975). Ley de creación de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
- Lindón, A. (2006). “La espacialidad de la vida cotidiana: Hologramas socio-territoriales de la cotidianeidad urbana”. En: J. Nogué i Font y J. Romero (Coordinadores) *Las Otras Geografías*, Valencia: Ed. Tirant Lo Blanch, pp. 425-446
- Lindón, A. (2007). “Los imaginarios urbanos y el constructivismo geográfico: los hologramas espaciales”. *EURE* (Santiago), 33(99), pp. 31–46. <https://doi.org/10.4067/S0250-71612007000200004>
- Lindón, A. (2012). “La concurrencia de lo espacial y lo social”. En: *Tratado de Metodología de las Ciencias Sociales: Perspectivas Actuales*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Lischetti, M. (coord.) (2013). *Universidades latinoamericanas: compromiso, praxis e innovación*. Buenos Aires, Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras UBA/ Programa de Promoción de la Universidad Argentina, Ministerio de Educación de la Nación, Argentina.

- Llanos-Hernández, Luis. (2010). “El concepto del territorio y la investigación en las ciencias sociales”, *Agricultura, sociedad y desarrollo*, 7(3), pp. 207-220.
- Lopes de Souza, M. (1995). “O territorio: sobre espaço e poder, autonomia e desenvolvimento”. En De Castro, I; da Costa Gomes, P y Lobato Correa, R. *Geografia: conceitos e temas*. Rio de Janeiro. Bertrand Edit.
- Lucas, R (1988). “On the Mechanism of Economic Development”. *Journal of Monetary Economics*, 22, pp. 3-42.
- Lucero, P. et al. (2015), *Atlas de Mar del Plata y el Partido de General Pueyrredon II: Problemáticas Socio-territoriales Contemporáneas*, GESPyT, UNMdP. Ed. EUEM. ISBN 978-987-1921-44-7. Mar del Plata.
- Lundvall, B.A. (1992). *National Systems of Innovation: Toward a Theory of Innovation and Interacting Learning*. Londres: Pinter Publisher.
- Lussault, M. (2005). “La mobilité comme événement”. En Allemand, S. et al. (dirs.) *Le sens du mouvement*. París: Belin – IVM, pp. 109-117.
- Lussault, M. (2007). *L’homme spatial: la construction sociale de l’espace humain*. París: Seuil.
- Lussault, M. y Stock, M. (2010). "Doing with space": towards a pragmatics of space. *Social Geography*. 5. 11-19. 10.5194/sg-5-11-2010.
- Macchiarola, V. (2021). “Universidad y territorio: hacia nuevas formas de conocer”. IX Congreso Universitario Centroamericano del CSUSA. Tegucigalpa, Honduras.
- Madsen, S. (2022). “A constructivist approach to the spatial organization of transformative innovation policy”, *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 42, pp. 340-351.
- Marston, S. A. (2000). The social construction of scale. *Progress in Human Geography*, 24(2), 219-242. <https://doi.org/10.1191/030913200674086272>
- Mato, D. (2009). “Interculturalidad e inclusión en las universidades. Diferencias culturales, de modos de producción de conocimiento y de modalidades de aprendizaje”. En P. Gentili, G Frigotto, R. Leer y F. Stubrin, F. *Políticas de privatización, espacio público y educación en América Latina*, Rosario CLACSO-Homo Sapiens.
- Massey, D. (1991), “A Global Sense of Place”, *Marxism Today*, pp. 24-29.
- Massey, D. (2008). *For Space*. SAGE.

- Massey, D. (2012), “Espacio, lugar y política en la coyuntura actual”. *Urban*, 4, Madrid, pp. 7-12.
- MDP (2022). “Las Prácticas Socio Comunitarias cumplen 10 años”. Recuperado el 21 de octubre de 2022 del sitio web: <https://www.mdp.edu.ar/index.php/extension/74-programas-de-extension/practicas-sociocomunitarias/333-las-practicas-socio-comunitarias-de-la-unmdp-cumplen-10-anos>
- Mendonça, M. (2016). Las políticas universitarias entre el golpe de estado de 1966 y las elecciones de 1973, *Prácticas de Oficio*, 17.
- Mendonça, M. (2018). “La creación de nuevas universidades nacionales en la década de los años setenta. Continuidades y rupturas del plan Taquini en el marco de la coyuntura política nacional (1966-1973)”. *Perfiles Educativos*, vol. XXXVII, núm. 150, pp. 171-187.
- Mendonça, M. (2018). “Creación, nacionalización y escisión: ¿reestructuración? Una aproximación al proceso de transformación del sistema universitario argentino (1971-1973)”, *Revista Iberoamericana de Educación Superior* N° 24, pp. 82-105.
- Metcalfe, Stan (1995). “The economic foundations of technology policy”. En: P. Stoneman (ed.), *Handbook of the economics of innovation and technical change*, Oxford, Blackwell.
- Meusburger, P., Werlen, B., y Suarsana, L. (Eds.). (2017). *Knowledge and Action, Knowledge and Space*. Springer Nature. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-44588-5>
- Mitcham, C. y Briggles, A. (2007). “Ciencia y política: perspectiva histórica y modelos alternativos”, *Revista iberoamericana de ciencia tecnología y sociedad*, 3(8), pp. 143-158.
- Naidorf, J. (2009). *Los cambios en la cultura académica de la universidad pública*. Buenos Aires, EUDEBA.
- Neave, G. y van Vught, F. A. (1991). *Prometheus Bound: the changing relationship between government and higher education in Western Europe*. Oxford: Pergamon Press.
- Nelson, R. (ed.). (1993). *National Innovation Systems: A Comparative Analysis*. New York: Oxford University Press.
- Nonaka, I., y Takeuchi, H. (1995). *The knowledge creating company*. New York: Oxford University Press.

- Ochoa-Ramírez, J.; Guzmán-Ramírez, A. (2020), “La vulnerabilidad urbana y su caracterización socio-espacial”. *Legado de Arquitectura y Diseño*, 15(27). doi:10.36677/legado.v15i27.13288
- Omote, F., y Medina, F. C. (2021). La construcción de las realidades geográficas. Una geografía de la acción: Punto sur, 5. <https://doi.org/10.34096/ps.n5.11005>
- Orazbayeva, B., Davey, T., Plewa, C., et al. (2020). “Engagement of Academics in Education-driven University-business Cooperation: A Motivation-based Perspective”, *Studies in Higher Education*, 45, pp.1723–36.
- Pérez Serrano, G. (1997). *Elaboración de proyectos sociales*. Madrid. España. Ed. Narcea.
- Pérez, D.A., Cecchi, N., Lakonich, J.J. y Rotstein, A. (2009). *El compromiso social de la universidad latinoamericana del siglo XXI: Entre el debate y la acción*. Buenos Aires: IEC-CONADU.
- Pérez Lindo, A. (1985). *Universidad, política y sociedad*. Buenos Aires, EUDEBA.
- Perkmann, M., Salandra, R., Tartari, V., et al. (2021). “Academic Engagement: A Review of the Literature 2011–2019”, *Research Policy*, 50, pp. 1–20.
- Pinheiro, R., Benneworth, P. y Jones, G. (eds.). (2012). *Universities and Regional Development A critical assessment of tensions and Contradictions*. Londres: Routledge.
- Pírez, P. (2013). “Los servicios urbanos en la urbanización popular: desmercantilización y redistribución”. *X Jornadas de Sociología*. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
- Porto-Gonçalves, C. W. (2002). “Da geografia ás geo-grafias: um mundo em busca de novas territorialidades” en Ceceña, A. E. y Sader, E. (Coord.) *La guerra infinita. Hegemonía y terror mundial*, Buenos Aires, CLACSO.
- Ramírez Velázquez, B. y López Levi, L. (2015). *Espacio, paisaje, región, territorio y lugar: la diversidad en el pensamiento contemporáneo*. Ciudad de México: UNAM/UAM.
- Riquelme, G. (ed.). (2008). *Las universidades frente a las demandas sociales y productivas: capacidades de los grupos de docencia e investigación en la producción y circulación de conocimiento*. Buenos Aires: Miño y Dávila Editores.
- Romer, P. (1986). “Increasing Returns and Long Run Growth”, *Journal of Political Economy*, 94, 1002-1037.

- Romer, P. (1989). "Human capital and growth: Theory and evidence", National Bureau of Economic Research Working Paper N° 3173. Cambridge, Massachusetts.
- Romero, L., Buschini, J., Vaccarezza, L. y Zabala, J.P. (2015). "La universidad como agente político en su relación con el entorno: Aproximación teórica metodológica para el estudio de la conformación de vínculos entre la Universidad y su entorno social municipal", *Ciencia, Docencia y Tecnología*; 26(51), pp. 1-25.
- Rovelli, Laura (2009). "Del plan a la política de creación de nuevas universidades nacionales en Argentina: la expansión institucional de los años 70 revisitada", *Revista temas y debates*, N° 17.
- Rovelli, L. I. (2015). "Un modelo para armar: áreas prioritarias e investigación en universidades nacionales", *Ciencia, docencia y tecnología*, (51), 26-53. Recuperado en 05 de mayo de 2022, de http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-17162015000200002&lng=es&tlng=es.
- Rovelli, L. (2017). "Expansión reciente de la política de priorización en la investigación científica de las universidades públicas de Argentina", *Revista Iberoamericana de Educación Superior*, 8(22), 103–121. <http://ref.scielo.org/jxfzr5>.
- Sack, R. (1986). *Human territoriality: its theory and history*. Cambridge University Press. Cambridge.
- Sánchez Macchioli, P. (2020). "La operacionalización del concepto de territorio en el INTA: los proyectos regionales con enfoque territorial", *Economía, sociedad y territorio*, 20(63), pp. 513-536.
- Sánchez Macchioli, P. (2021), "Los territorios, las políticas de desarrollo local, y la orientación de las agendas de investigación y extensión en el INTA", *Pleamar*, 1, pp. 107-132
- Sarewitz, D., Foladori, G., Invernizzi, N., y Garfinkel, M. (2004). *Science Policy in Its Social Context. Philosophy Today*, 48. <https://doi.org/10.5840/philtoday200448Supplement8>
- Schiller, D. y Revilla Diez, J. (2008). "Mobile star scientists as regional knowledge spillover agents". IAREG Working Paper WP2/7.
- Schutz, A. (2003). *El problema de la realidad social*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Shapin, S. y Schaffer, S. (2005). *El Leviathan y la bomba de vacío. Hobbes, Boyle y la vida experimental*. Bernal: Ed. Universidad Nacional de Quilmes.

- Slaughter, S. y Leslie, L. (1997). *Academic Capitalism: Politics, Policies & the Entrepreneurial University*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Smith, N. (1993). "Homeless/global: scaling places". En Bird, J., editor, *Mapping the futures*, London: Routledge, pp. 87-119.
- Soldano, D. (2011). "Vivir en territorios desmembrados. Un estudio sobre la fragmentación socio-espacial y las políticas sociales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (1990-2005)". En: *Procesos de urbanización de la pobreza y nuevas formas de exclusión social. Los retos de las políticas sociales de las ciudades latinoamericanas del siglo XXI*, Alicia Ziccardi (Comp.): 37-59. Bogotá: Siglo del Hombre Editores.
- Stehr, N. (1994). *Knowledge Societies*. SAGE Publications Ltd.
- Storni, A. (2005). Las 'nuevas' universidades del conurbano bonaerense: (10 años después). En V Coloquio internacional sobre la Gestión Universitaria en América del Sur. Mar del Plata: UNESCO.
- Suarez, D. (2018). "El enfoque de los sistemas de innovación". En Barletta F., Robert V. y Yoguel, G. (editores): *Tópicos de la teoría evolucionista neoschumpeteriana de la innovación y el cambio tecnológico*. Vol. 2. Buenos Aires: UNGS.
- Taquini, A. C. (h) (2010). *Nuevas universidades para un nuevo país y la educación superior: 1968-2010*. Buenos Aires: Academia Nacional de Educación.
- TECHO Argentina (2018). *Relevamiento Nacional de Barrios Populares (RENABAP)*. Recuperado de <http://datos.techo.org/dataset/argentina-relevamiento-nacional-de-barrios-populares-2018>
- Thomas, H. (2009). "De las tecnologías apropiadas a las tecnologías sociales. Conceptos/Estrategias/Diseños/Acciones". Ponencia presentada en el IV Seminario Iberoamericano de Ciencia y Tecnología organizado por el Centro Experimental de la Vivienda Económica. Córdoba, Argentina.
- Tommasino, H., y Cano, A. (2016). "Modelos de extensión universitaria en las universidades latinoamericanas en el siglo XXI: tendencias y controversias". *Universidades*, (67), 7-24.
- Tommasino, H. y Rodríguez, N. (2010). *Tres tesis básicas sobre extensión y prácticas integrales en la Universidad de la República. Cuadernos de Extensión N° 1. Integralidad: tensiones y perspectivas*. Uruguay: Udelar.
- Trucco, I. T., González, N., y Locher, M. V. (2022). *Estructuración territorial de los procesos de innovación. Análisis conceptual y aproximación al caso de la industria*

manufacturera argentina en base a la ENDEI II (2014-2016). Estudios Socioterritoriales. Revista de Geografía, 32, 121–121. <https://doi.org/10.37838/unicen/est.32-121>

Tuan, Y. F. (1974). *Topophilia. A study of environmental perception, attitudes and values*. New Jersey: Prentice Hall.

Tuan, Y.F. (1977). *Space and Place: The perspective of experience*. Minneapolis: University of Minnesota.

Tuan, Y. (1978). Sacred space: Exploration of an idea. En Karl W. Butzer (Ed.), *Dimensions of Human Geography*. Chicago: University of Chicago Press, pp. 84-99.

Tuunainen, J. (2005). Hybrid practices? Contributions to the debate on the mutation of science and university. *Higher Education*, 50, pp. 275–298.

Tünnermann Bernheim, C. (2000). El nuevo concepto de extensión universitaria. Michoacán, México. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Morelia. <https://bit.ly/2CE2C0G>

Unzué, M., y Emiliozzi, S. (2017). “Las políticas públicas de Ciencia y Tecnología en Argentina: un balance del período 2003-2015”, *Temas Y Debates*, (33), 13–33. <https://doi.org/10.35305/tyd.v0i33.353>

Vaccarezza, L. (2011). “Conflicto en torno a una intervención tecnológica: Percepción del riesgo ambiental, conocimiento y ambivalencia en la explotación minera de Bajo de la Alumbrera”, *Revista iberoamericana de ciencia tecnología y sociedad*, 6, pp. 241-260.

Vaccarezza, L. y Zabala, J. P. (2002). *La construcción de la utilidad social de la ciencia. Estrategias de los investigadores académicos en biotecnología frente al mercado*. Bernal: Ed. Universidad Nacional de Quilmes.

Vallaes, F. (2006). Breve marco teórico de la responsabilidad social universitaria. CD Multimedia, Lima, Perú: Banco Interamericano de Desarrollo. Recuperado de <https://www.econo.unlp.edu.ar/frontend/media/86/10986/10ec2d7e617a62eba0696821196efeae.pdf>

Veschambre, V. (2006). “Penser l’espace comme dimension de la société: Pour une géographie sociale de plain-pied avec les sciences sociales”. En Séchet, R., & Veschambre, V. (Eds.), *Penser et faire la géographie sociale: Contribution à une épistémologie de la géographie sociale*. Presses universitaires de Rennes. doi:10.4000/books.pur.381

- Vessuri, H. (1995). "El crecimiento de una comunidad científica en Argentina", *Cadernos de História e Filosofia da Ciencia*, 3(5), CLEHC, pp,173-222.
- Werlen, B. (2003). *Society, Action and Space: an alternative human geography*. Taylor & Francis.
- Werlen, B. (2004). "Human geographies without space? A view from the perspective of action theory". En: *Travaux de l'Institut Géographique de Reims*, 30(119-120), pp. 9-22. <https://doi.org/10.3406/tigr.2004.1477>
- Werlen, B. (2005). "Regions and Everyday Regionalizations: From a Spacecentred Towards and Action-Centred Human Geography". En: Houtum, H., Kramsch, O. T. y Zierhofer, W. (2005). *Bordering space*. Ashgate
- Werlen, B. (2017), "Action, Knowledge, and Social Relations of Space". In: Meusburger, Peter; Werlen, Benno; Suarsana, Louise (Ed.) *Knowledge and Action. Knowledge and Space*, 9. Germany: Springer Open, pp. 31-56.
- Wisions of Sustainability (sin fecha). SEPS Knowledge Exchanges. Recuperado el 5 de mayo de 2020 de: <https://www.wisions.net/pages/seps-exchange-activities>
- Wynne, B. (1992). "Misunderstood misunderstanding: Social identities and public uptake of science", *Public Understanding of Science*, 1, pp. 281-304. 10.1088/0963-6625/1/3/004.
- Zangrossi, G. (2013). "Las universidades del Conurbano Bonaerense, impacto, desafíos y perspectiva", X Jornadas de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos
- Zucker, L. G. y Darby, M. (2006), "Movement of Star Scientists and Engineers and High-Tech Firm Entry", National Bureau of Economic Research, Working Paper N° 12172.